

**PERÍODO 129°**



— REPÚBLICA ARGENTINA —

# **DIARIO DE SESIONES**

## **CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN**

---

**17<sup>a</sup> REUNIÓN – 2<sup>a</sup> SESIÓN EXTRAORDINARIA**  
**22 DE DICIEMBRE DE 2011**

---

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don AMADO BOUDOU, y de la señora presidenta provisional del Honorable Senado, senadora BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH**

Secretarios:

Señor don **JUAN H. ESTRADA** y señor don **JUAN H. ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor **LUIS G. BORSANI**, señor **MARIO DANIELE** y señor **GUSTAVO CARLOS VÉLEZ**



## PRESENTES:

AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
 ARTAZA, Eugenio J.  
 BARRIONUEVO, Walter Basilio  
 BASUALDO, Roberto G.  
 BERMEO, Rolando A.  
 BIANCALANI, Fabio D.  
 BLAS, Inés Imelda  
 BONGIORNO, María José  
 BORELLO, Marta Teresita  
 CABANCHIK, Samuel M.  
 CABRAL ARRECHEA, Salvador  
 CANO, José M.  
 CASTILLO, Oscar A.  
 CIMADEVILLA, Mario J.  
 COLAZO, Mario J.  
 CORRADI DE BELTRÁN, Ana María  
 CORREGIDO, Elena M.  
 de la ROSA, María Graciela  
 di PERNA, Graciela A.  
 DÍAZ, María Rosa  
 ESCUDERO, Sonia M.  
 ESTENSSORO, María Eugenia  
 FELLNER, Liliana B.  
 FERNÁNDEZ, Aníbal D.  
 FILMUS, Daniel F.  
 FUENTES, Marcelo J.  
 GIMÉNEZ, Sandra D.  
 GIUSTINIANI, Rubén H.  
 GODOY, Ruperto Eduardo  
 GONZÁLEZ, Pablo G.  
 GUASTAVINO, Pedro G.  
 GUINLE, Marcelo A.  
 HIGONET, María de los Ángeles  
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel  
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle  
 JUEZ, Luis A.

LABADO, María Esther  
 LATORRE, Roxana I.  
 LEGUIZAMÓN, María Laura  
 LINARES, Jaime  
 LÓPEZ, Osvaldo R.  
 LORES, Horacio  
 LUNA, Mirtha María T.  
 MANSILLA, Sergio F.  
 MARINO, Juan C.  
 MARTÍNEZ, Alfredo A.  
 MAYANS, José M. Á.  
 MEABE de MATHÓ, Josefina A.  
 MENEM, Carlos S.  
 MONLLAU, Blanca M. del Valle  
 MONTERO, Laura G.  
 MORALES, Gerardo R.  
 MORANDINI, Norma E.  
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.  
 NIKISCH, Roy A.  
 PARRILLI, Nanci M. A.  
 PÉREZ ALSINA, Juan A.  
 PÉRSICO, Daniel R.  
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.  
 PICHETTO, Miguel Á.  
 REUTEMANN, Carlos A.  
 RIOFRIO, Marina R.  
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.  
 ROLDAN, José M.  
 ROMERO, Juan C.  
 RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz  
 SANZ, Ernesto R.  
 VERA, Arturo  
 VERANI, Pablo

## AUSENTES, CON AVISO:

RACHED, Emilio A.  
 VERNA, Carlos A.

## SUMARIO

1. **Fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diarios.** (O.D.-852/11.) (Pág. 2.)
2. **Acuerdos.** (Pág. 60.)
3. **Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.** (O.D.-920/11.) (Pág. 64.)
4. **Apéndice.**
  - I. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 98.)
  - II. **Actas de votación.** (Pág. 130.)
  - III. **Inserciones.** (Pág. 148.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 02 del jueves 22 de diciembre de 2011:

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Señoras y señores senadores, buen día. Continúa la sesión.

## 1

## O.D. N° 852/11

**FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN  
 Y DISTRIBUCIÓN DE PASTA CELULOSA  
 Y DE PAPEL DE DIARIOS**

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley en

los señores senadores puedan hacer llegar su opinión o sus requerimientos sobre tal actividad.

Es cierto que se han cumplido absolutamente todos los requerimientos porque venían todos los informes, todos los legajos, la falta de antecedentes administrativos y judiciales en cada uno de los casos; obviamente, el informe del CELS, que siempre es exigido, que es una práctica que hemos utilizado inveteradamente y que se ha aplicado otra vez.

Así que a ello debe agregarse, obviamente, la disposición del señor ministro para juntarse con la comisión apenas reanudemos la actividad normal, cosa que cuenta con su absoluta disposición y que vamos a hacer para que nos ilustre, fundamentalmente, sobre las tareas que se desarrollan con las fuerzas armadas.

Señora presidenta, corresponde poner a consideración los pliegos.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Así se hará, senador Guinle.

En consideración los pliegos.

–Se practica la votación.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones correspondientes.<sup>1</sup>

### 3

#### O.D.-920/11

#### PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

**Sr. Prosecretario** (Borsani). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley venido en revisión por el que se crea el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto**. – A efectos de ordenar el debate, adelanto que por nuestro bloque va a hablar la senadora Graciela de la Rosa, que es la miembro informante, presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y va a cerrar el senador por Misiones, Juan Irrazábal.

Nos gustaría que los demás bloques definan quiénes son los oradores, hacemos una lista y ya le damos el cierre, fijando la hora de votación.

**Sr. Petcoff Naidenoff**. – Pido la palabra.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff**. – Por el bloque de la Unión Cívica Radical, el miembro informante es el senador Mario Cimadevilla y cierra el senador Gerardo Morales.

**Sr. Giustiniani**. – Pido la palabra.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani**. – Por nuestro interbloque, será miembro informante el senador Jaime Linares y yo voy a estar en el cierre del debate.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso**. – El Interbloque tiene dos posiciones diferenciadas en este tema.

Entonces, van a ser miembros informantes la senadora por el Chubut y el senador Romero. Y van a hacer uso de la palabra, también, el senador Reutemann y la senadora Escudero, quien va a cerrar.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – ¿Las senadoras van a compartir el tiempo?

**Sra. Escudero**. – Los dos miembros informantes van a usar tiempo de miembros informantes. Yo voy a usar el tiempo del presidente del bloque por el cierre y el senador Reutemann va a hablar brevemente.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Muy bien, senadora.

**Sra. Monllau**. – Pido la palabra.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.

**Sra. Monllau**. – El bloque del Frente Cívico y Social, simplemente, va a adherir al dictamen de la Unión Cívica Radical.

**Sra. Díaz**. – Pido la palabra.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Díaz.

**Sra. Díaz**. – Nosotros vamos a compartir el tiempo y no vamos a utilizar más de lo que me correspondería como presidenta de bloque.

**Sr. Roldán**. – Pido la palabra.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Roldán.

**Sr. Roldán**. – De la misma manera, el bloque del Frente de Todos va a hacer uso de la palabra para apoyar el proyecto del oficialismo, pero muy brevemente.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Entonces, tiene la palabra la señora senadora De la Rosa.

**Sra. De la Rosa**. – Señora presidenta: venimos hoy a este recinto para analizar un proyecto de ley en revisión de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.

Éste es un proyecto que tuvo un amplio debate en la Cámara de Diputados de la Nación y que, además –como recordábamos el otro día en la reunión de la Comisión de Agricultura–, fue un miembro de la Federación Agraria y miembro del bloque radical de la Cámara de Diputados el que oportunamente le solicitara a la señora presidenta de la Nación el tratamiento de este tema. En esa oportunidad, nuestra presidenta mandó el proyecto correspondiente, el cual tuvo un amplísimo debate.

Tengo que decir que éste no es el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo sino que, en todo el proceso de consensos que hubo entre los bloques y entre todos los grupos que durante tantos años pelearon por tener un proyecto de ley que limite la extranjerización de tierras en la Argentina, tenemos hoy este proyecto de ley en revisión que creo que es fruto del consenso y que, evidentemente, tiene que ver con lo que hoy está pasando en el mundo y con las necesidades que tiene la Argentina.

Creo que se trata de un acto de reivindicación de la soberanía política, económica y, también, social porque, evidentemente, cuando este proyecto de ley limita el uso, la tenencia y la propiedad de las tierras rurales de la Argentina a las personas físicas o jurídicas extranjeras, también deja un claro mensaje en el sentido de que son los propios argentinos los dueños de esta tierra y los que tienen que trabajarla. Entonces, también hay una protección a lo que es la propiedad de los argentinos, con relación a la tierra.

Ese debate acerca de los recursos naturales en el mundo se viene desarrollando desde hace

mucho tiempo, porque se inició en el siglo pasado. Voy a ser breve; no me voy a extender tanto porque sé que tenemos que ser breves y, después, voy a solicitar la inserción de amplios aspectos de esta ponencia, de esta presentación de este proyecto; pero, sin duda, estamos ante un proyecto muy importante. Creo que es un proyecto bisagra en la historia de la Argentina; es un real acto soberano que encuentra sus raíces en el pensamiento nacional y es una reivindicación, también, a los 200 años de historia.

Quiero, brevemente, reivindicar acá y recordar a Juan Domingo Perón, no solamente por esa claridad intelectual que tuvo en su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo en 1972 sino también después, en su “Modelo argentino para el proyecto nacional”; con sólo leerlo, comprendemos la importancia de los recursos naturales y el rol, el papel, el lugar que ocupa la Argentina en el marco de América Latina. Decía Perón que el mundo actual observa con creciente preocupación el paulatino agotamiento de los recursos naturales, al punto de temer el desencadenamiento de una crisis en materia de productos esenciales para la subsistencia de la humanidad. Decía que debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales.

Esa cuestión que se dio en el siglo pasado, evidentemente, hoy, en el siglo XXI, adquiere gravedad por los acontecimientos que se están desarrollando. Hoy vamos a reivindicar a los luchadores: a los luchadores de los recursos naturales, a los luchadores del pensamiento nacional, a aquellos que defienden a la tierra como parte de un proceso también de liberalización, porque la dependencia también tiene mucho que ver con el uso de la tierra.

¿Qué es lo que pasó en este mundo? Voy a ser muy breve, pero quiero tomar las palabras del ex ministro de la Producción cuando claramente nos decía que asistimos a un creciente aumento de la población mundial y que ésta va a crecer en un 50 por ciento en los próximos 40 años; y, según la FAO, esto requerirá un incremento del 60 por ciento de la producción mundial de alimentos. ¿Y dónde están las disponibilidades de tierras arables en el mundo? En África y en América Latina; en particular, en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Por eso, los países

de la región buscan a través de normativas proteger la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Por ejemplo, como antecedente, la Constitución de Brasil, en su artículo 190 limita categóricamente las inversiones extranjeras sobre el dominio de las tierras de ese país.

¿Cuál es el núcleo de esta iniciativa que nos ha mandado la presidenta de la Nación? Precisamente, la consideración de que el recurso tierra es un recurso estratégico no renovable y que es necesario y susceptible de atender mediante legislación para restringir la adquisición de manos de extranjeros y proteger la titularidad de los argentinos en nuestras tierras rurales.

Podemos decir mucho, pero me parece que el hecho fundamental que se está dando en el mundo es el crecimiento de esa población mundial y la oferta restringida de tierras para la producción de alimentos. De hecho, se va a producir en el mundo –y lo están haciendo– un escenario de confrontación, que es a lo que debemos dar respuesta con este tipo de legislaciones.

Creo que, además de la cuestión global y estructural, del hecho de la creciente población mundial y de la oferta restringida de recursos naturales para proveer alimentos, hay que considerar la situación internacional –que a nadie escapa– y cómo afecta la crisis internacional en este escenario. La volatilidad de los precios internacionales de los alimentos también ayuda a que capitales especulativos vengan a adquirir tierras rurales en la Argentina porque, de hecho, son activos más rentables que otros. Entonces, ésta es la oportunidad de discutir y sancionar este proyecto de ley.

Es un proyecto muy simple, un proyecto que restringe de una manera muy coherente y simple el dominio extranjero sobre las tierras rurales. Son tres las principales limitaciones que impone hacia el dominio extranjero de las tierras rurales. En primer lugar, el establecimiento en un 15 por ciento como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional. Creo que se trata de un límite absolutamente equilibrado, que también se ha bajado, porque en el proyecto original era un 20 por ciento y se ha bajado a un 15 por ciento. Ese límite del 15 por ciento se computará, además, sobre todo el territorio de las provincias, los municipios y cada entidad administrativa, para que, realmente, no más de ese 15 por ciento sea

de dominio extranjero. Por lo tanto, se trata de una clara limitación.

La segunda limitación consiste en que dentro de ese porcentaje del 15 por ciento, en ningún caso las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera podrán superar el 30 por ciento. Ésa es otra restricción muy concreta.

La tercera limitación se refiere a que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente. Esto trajo mucha discusión, sobre todo en la Cámara de Diputados de la Nación, y se planteó la utilización de otro indicador técnico para limitar. Pero, finalmente, primó este criterio porque es muy simple y, además, porque esas mil hectáreas en la zona núcleo tendrán su superficie equivalente en el resto del territorio de la Argentina, y serán las provincias argentinas las que determinarán la superficie equivalente en sus propios territorios. Esa equivalencia será establecida por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, según el artículo 16 del proyecto de ley que estamos considerando. Justamente, una de las tareas que deberá desarrollar dicho consejo será analizar la superficie equivalente en el marco de las regiones, las provincias, la producción y la productividad de esas tierras. O sea que eso dependerá, exclusivamente, de las regiones y de las provincias porque, obviamente, todos sabemos que mil hectáreas en la zona núcleo de la pampa húmeda no tienen absolutamente nada que ver, por ejemplo, con nuestras provincias del norte o del sur.

En cuanto a las restricciones, creo que esos son los tres criterios básicos.

Luego, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales, que será el que autorizará las nuevas tierras a adquirir por los extranjeros.

Solicitaré la inserción de mi discurso porque podemos hablar muchísimo de este tema. Se trata de una cuestión central que hace a la soberanía de la Argentina y que se relaciona con una problemática global y actual. Por ende, esta iniciativa es una clara y contundente respuesta que hoy está dando la presidenta de la Nación en el marco de la situación global y de la crisis internacional.

Quiero expresar, además, que el proyecto se fundamenta en pactos internacionales, tales como



el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 1° y 2°. Al respecto, también pediré su inserción para ser breve en la presentación de la iniciativa.

Creo que es la primera vez que la Argentina, en el marco de la crisis internacional por la que se está atravesando, toma esta actitud. Se trata de una decisión política adoptada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vinculada con la soberanía de la Argentina. No podía ser de otro modo porque, evidentemente, sabemos que la Argentina está cambiando y que, actualmente, tiene un paradigma de crecimiento y de desarrollo con inclusión social. Hoy, la Argentina está parada en América Latina con un proyecto nacional y popular. Y en ese marco, este proyecto de ley expresa a las claras la voluntad de la presidenta de la Nación de seguir apostando al desarrollo con inclusión social y defensa de los recursos naturales de la Argentina.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

**Sr. Cimadevilla.** – Señora presidenta: en primer lugar, quiero dejar sentado, como principio general, que una idea de poner límite a la extranjerización de las tierras debe ser acompañada. Así lo expresamos en la comisión, donde también advertimos que, a veces, el articulado de un proyecto no logra que consigamos el fin que la idea o la iniciativa propone. Preguntamos allí si teníamos la posibilidad de hacer algún cambio o enmienda porque en líneas generales acompañábamos el proyecto y se nos dijo que no, por lo que nos vemos obligados a hacer las observaciones en este recinto.

Tal como lo hizo el señor senador Sanz en el tema anterior, donde fijó los lineamientos doctrinarios de nuestro partido, yo voy a remarcar acá –para que no quede ninguna duda– cuál es nuestra postura en el tema tierras, que emerge de nuestra historia y doctrina. Digo esto porque los radicales entendemos que la tierra debe ser evaluada y conceptuada en los aspectos económicos, sociales y humanos que conlleva el tratamiento de este tema. Porque siempre se debe legislar teniendo en consideración a la tierra sólo en función del hombre.

Nuestra posición tiene una idea madre: la tierra tiene que ser privada de su carácter de mercancía y de ser objeto de mercado susceptible de producir rentas o ganancias de especulación.

Definimos a la tierra como el elemento básico de la producción nacional y debe ser colocada al servicio de la sociedad y del trabajo. Ésta es la idea madre de la Unión Cívica Radical.

En una primera observación debo decir que, lamentablemente, este proyecto de ley no evita que se especule sobre el valor de la tierra ni evita que podamos tratar a la tierra únicamente en su valor comercial.

Pero ahora voy a pasar a relatar las observaciones que tenemos con respecto al texto de este proyecto de ley, artículo por artículo.

A continuación, voy a leer textualmente cómo quedó redactado el artículo 1° de este proyecto de ley que, en verdad, no creo que coincida realmente con la intención de la señora presidenta. Dice que la presente ley rige en todo el territorio de la Nación con carácter de orden público debe ser observada según las respectivas jurisdicciones por las autoridades de los gobiernos federal, provincial y municipal y se aplicará a todas las personas físicas y jurídicas que por sí o por interpósita persona posean tierras rurales, sea para uso o producciones agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos. Este artículo, a nuestro juicio, tiene un error que debió haber sido enmendado y no nos dieron oportunidad de hacerlo.

En este sentido, pregunto qué ocurrirá con las adquisiciones de tierra que se puedan hacer a partir de la sanción de esta ley. Creo que ese es un tema que deberíamos analizar y que, por supuesto, estamos dispuestos a hacerlo para buscar soluciones.

Este mismo artículo genera confusiones en cuanto a la caracterización de la tierra rural. Primero dice que se considerarán tierras rurales apelando al uso que se le dé: productivo, agropecuario, forestal, turístico u otros usos. Pero a renglón seguido se señala que a los efectos de la presente ley se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino. Por consiguiente, no queda claro cómo vamos a caracterizar a la tierra rural: si por el destino o por la ubicación. Y esto genera algunas dificultades. Voy a brindar algunos ejemplos de situaciones que se pueden producir en mi provincia.

Allí hay localidades que tienen ejidos urbanos muy extensos, donde hay campos en los cuales crían ovejas. Sin embargo, con la redacción de este artículo, no vamos a saber si estamos frente a predios urbanos o rurales, porque la ley no caracteriza de forma clara de qué manera determinamos cuándo una tierra es rural y cuándo es urbana.

Pero existe otro problema; y voy a citar ciertos ejemplos de situaciones que se pueden producir en mi provincia, donde existe actividad minera.

Si la tierra rural es la que está fuera del ejido urbano y fuera está la caracterización que hacemos al respecto, tendríamos que analizar el caso de los proyectos megamineros. Porque, ¿qué le vamos a decir a Barrick Gold? ¿Qué le debe vender su paquete accionario a los argentinos? Al no estar claro si definimos la tierra rural por su destino o por su ubicación, todas estas dudas se pueden presentar.

Pero lo más grave, a mi juicio, está en el artículo 3º, porque de ninguna manera su redacción impide la extranjerización de la tierra a sociedades anónimas con mayoría de capital extranjero.

Lo voy a leer textualmente: “A los efectos de la presente ley, se entenderá como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación que le impongan las partes, y extensión temporal de los mismos, a favor de...”. Y el inciso b) contempla dos supuestos. El primero, se refiere a las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes societarias de la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social en proporción superior al 51 por ciento sea de titularidad de personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera, en las condiciones descriptas en el inciso precedente.

Aquí quiero remarcar algo, porque si uno no lee detenidamente esto, puede pasar inadvertido. Se habla de una proporción superior al 51 por ciento. Quiere decir que, hasta el 51 por ciento, la tierra puede ser de propiedad extranjera. Con lo cual, la mayoría societaria pasaría a ser de extranjeros, y estamos estableciendo un articulado que no contempla los fines que la ley propone, ni la intención que aquí se ha manifestado tiene la señora presidenta.

Quiero señalar que nos vemos obligados a realizar esta observación en este recinto, porque no se nos permitió realizar absolutamente ninguna modificación cuando tratamos el proyecto en comisión.

Ayer habló el señor senador Sanz de una sobreactuación legislativa. En realidad, si analizamos seriamente el problema, o sea, cómo jurídicamente se tiene que resolver esta cuestión, lo que queremos legislar es una incapacidad de derecho. Reformando algún artículo del Código Civil, esto lo podríamos haber solucionado perfectamente bien. Pero se optó por esta vía, y hoy nos encontramos con este problema.

Es más, se han hecho muchos reparos de tipo constitucional respecto a esta norma, en cuanto a que los extranjeros tienen los mismos derechos que los argentinos y no se los puede limitar en su derecho a ser propietarios. Sin embargo, creo que la propia Constitución contempla la solución, por cuanto el Preámbulo debe ser también utilizado para la interpretación de la Carta Magna. Y su interpretación teleológica, es decir, lo que tuvo en miras el legislador al legislar, debemos hacerla, porque en realidad la Constitución de 1853 brinda exactamente a todos los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales, pero a aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, dicha previsión no es para los extranjeros que vienen, compran nuestras tierras, las cierran, las usan para recreación y después se van fuera del país. Es más, este país fue colonizado por extranjeros. Yo pertenezco a una familia que se ha dedicado, por varias generaciones, a la cría de ovejas y, hoy, soy titular de un campo porque, antes —un español, en mi caso— fue titular de la tierra. Es decir, el hecho de ser extranjero, mientras se haya venido con la intención de radicarse en la Argentina y trabajar la tierra, realmente, no genera ningún tipo de impedimentos, ni problemas. El problema lo tenemos cuando la tierra se utiliza con fines especulativos, o no se tiene en cuenta el carácter productivo que le tenemos que dar a la tierra.

De allí que, primero, marqué la idea madre del radicalismo, no de ahora, desde siempre. Por eso, también digo que esta ley, aun si le salváramos las cuestiones legales que le observamos, no dejaría ninguna salvedad con respecto a la posibilidad de que únicamente esté contem-

plando los aspectos especulativos de la tierra. Y no avanza en un tratamiento de la tierra como un bien estratégico, un bien de producción y, fundamentalmente, un bien puesto al servicio del hombre. La tierra genera un vínculo y una cultura muy especiales. De ahí que tendríamos que habernos dado tiempo, si no estuviéramos tan apurados en el tratamiento de estas leyes, para avanzar en otra discusión más profunda: si se puede permitir o no que las sociedades anónimas sean propietarias de tierras rurales dedicadas a la producción pecuaria, o a la producción agropecuaria.

Por eso, señor presidente, nos encontramos, hoy, en este atolladero. Queremos acompañar, queremos colaborar. Repito que en la doctrina de nuestro partido es una idea madre la nacionalización de la tierra y que ésta sea un bien de producción. Coincidimos en que es un bien estratégico, pero no encontramos cómo acompañar en particular estos artículos porque, tal como la mayoría los ha dejado redactados, tenemos serias dudas de que, en definitiva, este proyecto de ley, si se sanciona, logre el fin o la finalidad que tuvieron quienes fueron sus autores.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Di Perna.

**Sra. Di Perna.** – Señora presidenta: consideramos que el proyecto de ley de tierras, que pretende regular la venta de tierras a personas físicas y jurídicas extranjeras, no tiene, en principio, ningún vicio de inconstitucionalidad. No existe ese vicio, porque el artículo 20 de la Constitución protege sólo a los extranjeros que son personas físicas y habitantes del país, como lo dijo el senador preopinante. No obliga a reconocer iguales derechos a extranjeros que no sean habitantes, ni a personas jurídicas.

En este orden de ideas, parecen ser bastante claros los artículos 3° y 4° del proyecto en cuestión. En este sentido, quiero decir que nosotros presentamos, el 7 de septiembre de 2010, un proyecto contenido en el expediente S.-2.499/10 que, por tener giro, también, a otra comisión, no pudo formar parte del dictamen que estamos tratando. Y cabría, de mi parte, solicitar que quede constancia del mismo como antecedente.

Tenemos que decir que, en la legislación comparada, no es novedoso este tipo de medidas. Debo señalar que son muchos los países que ya incluyen, en sus legislaciones, sistemas

restrictivos para la compra de tierras. Por ejemplo, en Brasil, la proporción total del área rural propiedad de un extranjero residente no puede sobrepasar el 25 por ciento de la tierra de cada municipio; además, los extranjeros deben obtener autorización gubernamental para obtener tierras localizadas en sectores limítrofes. En El Salvador, el artículo 109 de su Carta Fundamental establece que la propiedad de los bienes raíces rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros, cuyos países de origen no tengan iguales derechos que los salvadoreños, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos industriales.

La Constitución Nacional de Guatemala prescribe que los extranjeros necesitan autorización del Poder Ejecutivo para adquirir la propiedad de bienes inmuebles que, según el artículo 122, relativo a reservas territoriales del Estado, se ubican en las zonas que esta misma disposición indica.

En Canadá, en aplicación del Investment Canada de 1985, las inversiones extranjeras directas que no superen los 5 millones de dólares y las indirectas hasta 50 millones quedan liberadas de toda autorización federal. Pero será necesaria tal autorización cuando por razones de interés público el Ministerio de Industria recomiende que la inversión deba ser examinada por el Consejo de Ministros.

Solicito la inserción de los antecedentes de otros países para hacer honor a la brevedad. Pero quiero decir que en un país limítrofe, Uruguay, el 25 por ciento de la totalidad de la tierra es extranjera. Y ahora el presidente Mujica pide al Congreso que considere este tema.

Quiero hacer algunas salvedades también con respecto a lo que es la letra del proyecto. El primer problema que tenemos, coincidiendo con el senador Cimadevilla, es la definición de tierras rurales. El texto dice que tierra rural es todo lo que no es urbano. Según la definición del INDEC, urbano es todo aquello de más de 2.000 habitantes. Por lo tanto, de los 2.780.000 kilómetros cuadrados que tiene la Argentina, el 99 por ciento sería rural. Si a esto aplicamos el 15 por ciento, podemos vender gran parte de la tierra de la República Argentina.

Por otro lado, algunos expertos definen la tierra rural como aquella que no es urbana o



la que está ubicada fuera de los ejidos urbanos de manera...

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Perdón, senadora. La senadora Parrilli le pide una interrupción.

**Sra. Di Perna.** – Bueno, que sea muy breve para que hablemos todos en este tema.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción tiene la palabra la senadora Parrilli.

**Sra. Parrilli.** – Aclaro que hoy no he hablado.

Aquí, en esta ley, hay una definición que dice que a sus efectos se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino, como usted leyó. Pero cuando uno toma una ley no puede leer un artículo por separado; debe leer todo, incluidos los fundamentos.

Nosotros acá no podemos tomar, máxime cuando esta ley lo explicita, la definición que da el INDEC. Sobre todo porque para hacer el relevamiento en la autoridad de aplicación participan los municipios, las provincias y la Nación. Cada municipio con su Concejo Deliberante tiene determinado cuál es el ejido urbano y el ejido rural en cada una de las localidades.

Esto fue discutido en la comisión y quería dejar aclarado este aspecto.

Por otro lado quiero decir que ésta no es una ley que viene ahora, fue presentada en abril de 2010 y estuvo durmiendo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, creo que hubo bastante tiempo para hacer sugerencias.

Entiendo que respeta el espíritu para el cual se ha hecho, pero quería puntualmente hacer esta observación.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Di Perna.

**Sra. Di Perna.** – Como estaba diciendo, también esto de describir ejidos urbanos de manera negativa, como hace la ley, deja una zona gris, que es la agricultura periurbana, es decir, aquella que se desarrolla en el borde de las ciudades. Si esto es así, las tierras donde se desarrolla esta agricultura periurbana, a los efectos de esta ley, ¿se considera como urbana o como rural? Es decir, consideramos que éstas son cosas que no están claras.

El proyecto también indica que el comprador extranjero no podrá adquirir más de mil hectáreas en la zona núcleo. El proyecto entiende como “zona núcleo” el concepto establecido por el INTA, que habla de la zona núcleo maicera que comprende el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba; en términos rurales, la llamada Pampa Húmeda.

En función de la zona núcleo, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales definirá la cantidad de hectáreas que corresponde para cada una de las regiones. En este sentido, tal como se propuso en la Cámara de Diputados, consideramos que tendría más sentido sustituir esa medida por la de unidades económicas que sean definidas por cada una de las provincias. El Consejo Interministerial de Tierras Rurales está conformado por un amplio número de representantes, y no está claro de qué forma se puede llegar a tomar una decisión dentro del mismo. Si bien se mencionan informes técnicos, los mismos no son vinculantes. Y si se llegara a tomar la decisión por mayoría simple, la opinión de una provincia sobre la cual se debe establecer el límite de la adquisición de tierras, en este contexto, puede quedar licuada. La posibilidad de que cada provincia fije el límite en cuanto a las unidades productivas resulta, entonces, más práctica y existen menos posibilidades de cometer un error. No olvidemos que la tierra pertenece a las provincias.

Además de la limitación de las mil hectáreas para la zona núcleo o su equivalente, se establece que la totalidad de las tierras en poder de los extranjeros no podrá superar el 15 por ciento de la superficie rural de la Argentina ni el 15 por ciento de la superficie rural de la provincia ni del municipio o departamento equivalente. Y de ese límite —tal como lo dijo el miembro informante del Frente para la Victoria—, no puede haber más de un 30 por ciento en manos de extranjeros de la misma nacionalidad. En ese sentido, nosotros consideramos que el 15 por ciento puede resultar demasiado y habría que reafirmar un 10 por ciento, que es lo que nosotros establecimos en nuestro proyecto.

El artículo 15 dispone que en un plazo de 180 días a partir de la creación y puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales se realizará un relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que determine la propiedad y posesión de las tierras rurales. El problema es que hoy en día no

existen catastros con la suficiente tecnología ni hay una información unificada acerca de ellos que permita determinar estos datos. Entonces, el plazo de cumplimiento de este artículo parece ambicioso, cuando no imposible.

Señora presidenta: consideramos que regular la venta de tierras a extranjeros es una medida para celebrar. Sin embargo, en lo que respecta a la tierra todavía hay políticas pendientes, y es necesario avanzar en una reforma agraria que vaya en contra de los latifundios, que imponga tributos a la tierra ociosa, que regule los arrendamientos y que, por sobre todas las cosas, evite la posesión de tierras con fines especulativos.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Linares.

**Sr. Linares.** – Señora presidenta: no voy a ser muy extenso tampoco.

Me parece que ésta es una muy buena iniciativa del gobierno, y celebro el hecho de que la haya motorizado y puesto en la agenda.

Como decía el senador Cimadevilla, lamentando que no hayamos tenido oportunidad, al menos aquí en el Senado, de poder hacerle unos agregados que podrían mejorar un poco la redacción, en función de que en Diputados lo pudieron hacer.

Esta ley tenía, en una primera instancia, un porcentaje del veinte por ciento; se ha bajado al quince. Además, tenía algún tema en el artículo 3° vinculado a los residentes en la Argentina, que se ha corregido.

Así que, en primer lugar, adelanto el voto positivo de nuestra bancada a este proyecto de ley, porque cumple con algunas necesidades que hoy son muy importantes. Ustedes saben que en esta crisis del capitalismo global, del capitalismo en general, en un mundo donde los mercados están tan inquietos, el tema de la tierra como valor para algunas inversiones ha sido una cuestión central en los últimos años.

Esto ha surgido porque, si bien no hay registros estables o confiables todavía en el país, la realidad es que en los últimos años aquí se ha incrementado bastante la aparición de inversiones del sector extranjero.

Por tal motivo, me parece que a esta iniciativa, aun incompleta o al menos con algunas posibilidades de mejora, es necesario que nosotros la apoyemos.

Esto no pasa solamente en la Argentina; en todo el Mercosur es importante esta presión sobre las tierras. Brasil tiene su legislación ajustada; hablan de cinco mil hectáreas. Tienen otro concepto, que nosotros hubiéramos preferido que se tomara. No solamente ahí estaban un poco las necesidades de corrección.

Aquí se ha tomado mil hectáreas en la zona núcleo, sin tener ninguna base científica que diga por qué mil hectáreas en la zona núcleo. A su vez, no define cuál es la zona núcleo. Nos dicen que es el sur de Santa Fe, un sector de Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires, pero esto es demasiado ambiguo. Y después, cuando se aleja de la zona núcleo, dice que hay una comisión que interpretará qué representan esas mil hectáreas en la zona núcleo en otros lugares.

Entonces, alguien había hecho el comentario días pasados, con respecto a qué hacemos en Mendoza, donde la base productiva es la vid.

Me parece que, en cuanto al criterio de mil hectáreas en la zona núcleo, son dos indefiniciones que se podrían haber ajustado, porque me parece más razonable haber trabajado sobre un indicador que sea unidad productiva. Una unidad productiva en la zona núcleo a lo mejor no son mil hectáreas. No sé; no soy de esa zona, soy de la zona del secano, pero hay gente que tiene cincuenta hectáreas en el sur de Santa Fe y vive sentado en una reposera mientras otros cosechan soja.

En mi zona, en mil hectáreas no alcanza a vivir una familia. Entonces, me parece que será muy difícil determinar estas cosas después.

Por otro lado, coincido con la senadora preopinante con respecto al tema de la elaboración de los registros, en función de que ustedes sabrán que hay temas de posesiones todavía sin dilucidar en muchas zonas. Los catastros de las provincias son incompletos; faltan mensuras; todavía hay muchas sin hacer.

Así que esto me lleva a dudas, porque en ciento ochenta días va a ser muy difícil que esto se pueda llevar adelante seriamente. Tal vez hubiera sido más razonable tomarse estos ciento ochenta días –que me aseguran que lo van a hacer–, congelar esto por ciento ochenta días y, después, definir si tiene que ser el 15, el 20 o el 12. Porque la verdad es que no hay anteceden-

tes. Hay algunos de la Federación Agraria que tienen un concepto vinculado más a la compra, porque hay cosas con testafierros, hoy día, que no se pueden chequear en superficies concretas. Entonces, la Federación Agraria hablaba hace algunos años de alrededor de 7 millones de hectáreas, pero es sólo un dato. Por su parte, la FAO habla de alrededor del 10 por ciento, pero la realidad es que hoy tenemos una indefinición con este tema. Tal vez, nos estemos excediendo estableciendo el 15 por ciento.

Yo tengo dudas con respecto al tema de los catastros, pero si están seguros de que se pueden hacer, ojalá que así sea, pero me parece que si nosotros no ajustamos mejor la redacción, lo que van a tener en la reglamentación es una fuerte necesidad de buscar cómo resolver esto que hoy nosotros no tenemos la oportunidad de corregir. Creo que, a lo mejor, con un poco de tiempo, se hubiera podido resolver esto en función de que todos estamos de acuerdo con que tenemos que tener una ley de estas características y, de hecho, en los trazos generales, estamos de acuerdo, pero faltaría ajustar algunas cosas que me parece que hubieran sido prudentes.

La FAO fija las experiencias de buena gestión de gobierno para la tenencia en la administración de tierras. Ella promueve la producción de registros precisos, completos y actualizados para lograr un manejo eficiente y transparente. No está presente la senadora Fellner, pero el otro día me retó por el tema de los catastros. Yo le decía: “Mirá, vos sos bioquímica; yo soy agrimensor. De manera que de catastro dejame hablar un poquito a mí”.

Entre otras cuestiones de la redacción, les decía que lo de la zona núcleo nos parece también un tema muy indefinido porque va a ser difícil definir hasta dónde llega la zona núcleo.

Finalmente, desde el FAP consideramos que esto constituye hoy un bien imprescindible no sólo para la radicación o consolidación de familias en la tierra, sino porque se trata de un recurso estratégico para el desarrollo de regiones con mucho mejor equilibrio territorial que el que hoy tenemos, ya que actualmente, tenemos grandes extensiones vacías en el país. Sin embargo, este tipo de ley debería ser complementada con algunas otras normas que traten de consolidar un proyecto productivo de radicación de familias, como puede ser la

ley de arrendamientos rurales, que sería otra herramienta importante y complementaria, o la ley de conservación de suelos, que son dos elementos que se complementarían con esta ley de tierras. Incluso, podrían conformar una trilogía fundamental para desarrollar definitivamente el interior en economías regionales sustentables con la gente para que la trabaje y no solamente para la especulación.

Así que nosotros, desde el Frente Amplio Progresista, entendemos que éste es un recurso estratégico que debe ser regulado, que es imprescindible en este momento, pero que, de todas maneras, hubiéramos preferido una mejor redacción, a los efectos de que los puntos de consenso, que son claramente posibles en este caso, nos hubieran permitido tener una mejor ley y no una ley que seguramente tengamos que corregir, o que tenga una complejidad de reglamentación que la prolongue en el tiempo y que en ese tiempo en el que no se ponga en vigencia nos encontremos con que después no hayan pasado más del 15 por ciento y tengamos más tierras compradas que las que realmente hay hasta el momento.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Romero.

**Sr. Romero.** – La verdad es que con esta ley en lo conceptual estamos haciendo una exclusión, porque es una ley para excluir a un grupo de personas que son los extranjeros. No lo hizo la Constitución del 53, y lo hacemos nosotros. De todos modos, tiene otra incongruencia de entrada que voy a señalar primero, que es que tanto en los fundamentos como en el propio texto en siete u ocho oportunidades se denomina a la tierra “recurso estratégico no renovable”, “recurso natural”, “recurso estratégico natural” y demás.

Esa propia denominación que hace el Poder Ejecutivo nos demuestra que está mal la ley como se planteó, porque si son recursos naturales, como obviamente lo son, y no renovables, cae bajo el régimen del artículo 124 de la Constitución y, por lo tanto, es absolutamente de dominio de las provincias. Además, ese artículo nos costó sacarlo y fue una gran pelea en la Convención del 94. Cumpliendo con ese artículo el ex presidente Kirchner nos transfirió a las provincias los recursos energéticos. Y ahora nosotros le estamos quitando a las

provincias el manejo de la tierra, nada menos que el territorio, que es lo único que tienen las provincias. Hay provincias que pueden tener industrias, otras pueden tener petróleo y otras tienen puras tierras, además de gente, que es lo más valioso.

Considero que ésta es la primera incongruencia de este proyecto de ley, lo que me anima a decir que no debo votarlo, en principio por esto. De entrada es una intromisión, una invasión, un despojo de un recurso natural que se hace a las provincias.

En segundo lugar, el texto en sí, el propio dictamen, tiene otras incongruencias que voy a señalar. Por ejemplo, no sólo el artículo 2° regula respecto de las personas físicas o jurídicas extranjeras, sino que también tiene como objetivo determinar la actitud catastral y de dominio de la situación de posesión bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establece la obligación de registrar el dominio o posesión de dichas tierras, conforme a la previsión de la presente ley. Por lo que entiendo yo, esta primera parte está referida a los argentinos. O sea, acá para determinar a quién excluimos, todos los argentinos tenemos también que reempadronarnos. Todo chacarero o gran propietario tendrá que registrarse, se nacionaliza y centraliza el registro, como el registro del automotor. Antes se patentaba en la provincia. Cuando el proceso o algún gobierno militar –creo que de Onganía– inventó el Registro Nacional era porque nunca más se iba a robar un auto, nunca más iba a haber un fraude con las patentes. Y si algo no se acabó en este país es el robo de autos. Pero sí aumentó la burocracia y hasta hemos perdido la posibilidad de identificarnos con las chapas del coche. Somos todos anónimos, con letras y números. Eso pasa sólo en países centralizados o unitarios.

Entiendo que el artículo 2° genera, además, una obligación para los argentinos de tener que ir a otro registro a anotarnos. Y cada vez que uno haga un movimiento, que venda un pedacito, que arriende, tiene que venir acá a contarle a Buenos Aires, y acá pueden tardar meses en inscribir un cambio de domicilio. Eso es determinar una obligación más para que los chacareros deban tener gestores en Buenos Aires para cumplir con este registro y no ser sancionados.

Con respecto a la que decía el senador Cima-devilla, habría que estudiarlo. En el inciso b) del artículo 3°, al hablar de superior a 51 por ciento, está poniendo el 51 como mínimo y no como máximo para determinar que es extranjera. Creo que eso puede ser un error de una palabra. Que el miembro informante lo estudie porque le correspondería ver cómo se puede salvar o si eso se considera un error.

También se mencionó acá el concepto de zona núcleo. Nunca escuché esa palabra en el campo. ¿Será para no decir zona marginal, zona productiva o economía regional, como si las regionales no fueran economías? Pero como no nos quieren discriminar tanto a los del interior, acá se pone “núcleo”, con lo cual no sabemos qué es núcleo. El núcleo vitivinícola será Mendoza, el núcleo sojero será Río Cuarto, el núcleo tabacalero serán Jujuy o Salta, pero no está claro. Ponen una extensión y no explican cómo se va a resolver la compatibilidad según la productividad. ¿Se imaginan ustedes si quien quiere comprar va a criar ovejas en la Patagonia? ¿Para cuántas ovejas le alcanzan mil hectáreas? Para cien ovejas. Contrariamente, si va a producir vino mil hectáreas de vid es una barbaridad, como también lo son si produce caña.

En la época de la Doctrina de la Seguridad Nacional que tanto gustaba a los gobiernos militares ya existía la ley de áreas de frontera. Aquí quedó el remanente del registro y del permiso, que se hacía en el Ministerio de Defensa, pero privaron a los propietarios de áreas de fronteras de todos los beneficios que esa ley daba al principio, que era limitar el acceso a los extranjeros pero quien invertía en un área de frontera tenía un beneficio fiscal. Salta y Formosa lo perdieron. Tal vez para las provincias que limitan con Chile esto no fue tan dañino porque esa área de frontera contra la montaña no es tan productiva, pero las que tienen zonas productivas en sus fronteras, como Formosa o Salta, han perdido totalmente los beneficios pero no la obligación de registrarse. La gente ya se acostumbró a hacerlo. Se trata de un trámite engorroso pero que ya lo saben hacer los escribanos, que es informar sobre el carácter o no de extranjero de los propietarios. Con lo cual esa limitación sigue.

Y después también hay algo vago, como prohibir a los extranjeros ser ribereños de cuerpos



de agua de envergadura y permanentes. Hay que ver cómo define la reglamentación al agua de envergadura. Porque por ahí para nosotros agua de envergadura es un arroyito y para los santafecinos es el Paraná. Así que, esta también es una situación muy vaga.

En cuanto al registro, se podría pedir que las provincias informen, pero no: creamos un registro nacional –como el del automotor que mencionamos recién– que llevará un registro de todas las tierras; se le dan muchas facultades y eso genera mucha burocracia.

Además, se crea el Consejo Interministerial encargado de dirigir todas estas acciones. Otro organismo más. Por lo menos le hubiesen puesto “Federal”, ya que las tierras son de las provincias; pero le pusieron “Interministerial”. La palabra “federal” a veces suena bonita, aunque después no se ejerza, pero se la hubiesen puesto.

Por lo menos fueron sinceros al no ponerle “Federal”, porque tal vez sea una muestra de sinceridad.

En cuanto a la entrada en vigencia a partir de la publicación, me parece bien que no se dé un período en el cual alguien pueda hacer una simulación o un fraude, pero lo cierto es que por seis meses o un año no se va a hacer ninguna operación ni por una hectárea, hasta que se reglamente y hasta que se organice todo el Consejo Interministerial, el Registro.

Después, si bien es cierto que es obvio lo relacionado con los derechos adquiridos, no es menos cierto que éste es un premio al que llegó primero y que queda como una discriminación, porque el extranjero que llegó primero se salvó y el que llegó tarde no pudo invertir en la Argentina.

Así como por un lado tiene un resabio de la Ley de Seguridad Nacional, por otro lado me hace acordar a una antigua teoría –porque tiene más de 100 años– que decía que los estados eran importantes cuando tenían su territorio y su espacio vital.

Con esa teoría los europeos han hecho dos guerras de característica mundial en menos de 20 años por el famoso espacio vital. Y también por esa teoría del espacio vital tuvimos conflictos con Chile.

Los argentinos ahora estamos muy celosos de mil hectáreas de tierra, pero por malas nego-

ciaciones perdimos islas, el canal de Beagle, la soberanía sobre las islas a la salida del mismo, y los nortños perdimos una salida al mar. Tal vez ya nos olvidamos, pero hasta el año 1820, Salta tenía salida al mar por Atacama, en el puerto de Cobija, que hoy es Antofagasta; eso era un puerto salteño. Ahí operaban los salteños y, también, los jujeños –por supuesto, no los voy a excluir– hasta los años 23 y 24. Posteriormente, le cedimos Atacama a Bolivia en canje por Tarija, para que tuviera salida al mar. Luego, Tarija se independizó de Argentina en la época de Juan Manuel de Rosas y Bolivia perdió Atacama y su salida al mar en la guerra con Chile. Por lo tanto, los dos nos quedamos sin el pan y sin la torta; nos quedamos sin salida al mar.

Para mí, la teoría del espacio vital es antigua. La Argentina perdió grandes extensiones. Por el egoísmo de Buenos Aires se perdió Uruguay y no pudo ser parte de la Confederación. Asimismo ganábamos guerras pero perdíamos los territorios, como la guerra contra Brasil. En la guerra –tan injusta y dolorosa para los federales y el interior– como la del Paraguay, Brasil se quedó con los frutos de la victoria.

Perdimos grandes extensiones y ahora, doscientos años después, defenderemos un arroyito, una lagunita o un curso de agua de la voracidad extranjera. Este país –nuestro país– se hizo con los extranjeros, los nativos, los criollos y con los que llegaron primero y después.

¿Qué hubiera pasado en el Litoral? ¿Hubieran ido esos extranjeros a Esperanza o a las colonias de Entre Ríos; hubieran ido los colonos a La Pampa y los galeses a la Patagonia, con una ley así? Venían a cultivar la tierra; me refiero a los colonos. Otros inmigrantes se quedaron en las ciudades. ¿Hubieran venido a este país los que se escapaban de la guerra, los italianos, los árabes o los judíos, muchos de los cuales se radicaron en Entre Ríos? Este país se hizo así, gracias a la política de inmigración. Y si bien ahora no existe una política al respecto, llegan muchos inmigrantes de los países vecinos; y en buena hora.

Así es la Argentina; culturalmente somos esa mezcla inorgánica, a veces, y de pensamiento disperso y dispar. Pero ése es nuestro país, lo queremos y no tenemos problemas entre nosotros. No nos peleamos por cuestiones raciales



ni religiosas; solamente nos peleamos por el fútbol y la política.

Con esta especie de nacionalismo vamos en contra de esa tradición, de esa cultura argentina que permitió esa pluralidad fantástica de inmigrantes que tiene Misiones, Chaco, etcétera. En consecuencia, ¿vamos a ir a contramano de esa tradición de 150 años, de ser receptores de habitantes de países muy diversos, quienes venían a poblar nuestro país y a trabajar nuestra tierra? ¿Por qué ir en contra de ello?

Sé que se dice que otros países hacen lo mismo; eso es cierto. En general, los países tienen restricciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos —que tanto se lo menciona—, que tiene un federalismo más fuerte que el nuestro, esta cuestión la resuelve cada Estado. En la mayoría no hay restricciones; sin embargo, algunos son muy duros, como Iowa. El Estado nacional solamente exige que si la extensión es de cierta envergadura, deberá reportarse al ministerio pertinente. Asimismo, hay que tener en cuenta que la Constitución de los Estados Unidos no es como la nuestra, que les da a los extranjeros igualdad de derechos. En la Carta Magna estadounidense hay una sola mención de los extranjeros y, en general, habla de ciudadanos. Ésa es la gran diferencia.

En los fundamentos se hace referencia a seguir el derecho comparado. ¿Por qué tenemos que seguirlo, en lugar de hacer lo nuestro, lo correcto? Nuestra tradición con relación a la inmigración es parte de nuestra cultura; y no podemos copiar cosas que parecen iguales, pero que no lo son.

El jurista francés Jean Niboyet dijo: “El comparatista [refiriéndose a quien hace un culto del derecho comparado] no tiene por misión el transformarse en un importador de cargamentos jurídicos. Después de haber sacado del estudio de ciertos derechos extranjeros un provecho cultural debe ponerse en guardia, al contrario, contra la fácil tentación de tomar el derecho de los demás tal como lo encuentra hecho en vez de crearlo por sí mismo”. Y esto es lo que estamos haciendo: en vez de crear nuestra propia protección, si es que hay algo que proteger, estamos copiando.

Yo me pregunto: con esta ley, si viene un kelper y quiere comprar en la Patagonia, ¿cómo lo tratamos? ¿Es extranjero? ¿Le ponemos límite?

¿Lo tratamos como argentino? De esta iniciativa surgen estas incongruencias.

La Constitución de Francia en ningún momento diferencia entre ciudadanos y extranjeros. Es una Constitución hecha para los ciudadanos. Entonces, obviamente, aunque no tiene limitación para los extranjeros, no tiene ninguna obligación constitucional para con ellos.

En España, sólo en Andalucía, se ponen algunos límites, pero la Constitución española, al igual que la francesa y las demás europeas, se refiere a los ciudadanos españoles y a los extranjeros no les reconoce derechos. Pero no los trata, como la nuestra, con igualdad.

En Brasil, país del que se habla mucho acá, tampoco hay ninguna mención en la Constitución sobre los extranjeros. Cabe acotar que ellos vienen de una experiencia imperial. Pero ahora Brasil se está dando cuenta que ha cometido un error con las restricciones y ha inventado algo que es ingenioso: está arrendando tierras a los extranjeros; o sea, a los inversores. Hace poco el ministro Wagner Rossi dijo que es importante que vengan los extranjeros a hacer inversiones. Da toda la impresión de que la presidenta Rousseff es más pragmática que el anterior presidente, porque quiere que lleguen inversiones extranjeras, entonces, para sortear la ley, permite el alquiler de tierras hasta por 99 años. Pero están trabajando en eso; y no nos olvidemos de que Brasil es el principal productor mundial de café, azúcar, carne bovina, jugo de naranja y el segundo exportador mundial de soja; y está creyendo que es importante la inversión en tecnología y en producción.

Bolivia, que es un país nacionalista y que tuvo su reforma agraria, solamente tiene una limitación para los extranjeros en la zona de frontera: a 50 kilómetros de la frontera, nada más, no tiene otra limitación.

También se mencionó a Australia, que es un país que tiene algunas restricciones pero allí se requiere de autorización cuando las compras son mayores a 50 millones de dólares australianos. Quiere decir ya que no estamos hablando de la compra de una finquita; recién en ese caso interviene el ministro y analiza el tema. Pero no se trata de una prohibición.

Por lo tanto, a mí tampoco me convence lo que se dice con respecto al derecho comparado.

Así mismo, aquí se ha mencionado a Uruguay, que tiene el 25 por ciento de propietarios agrícolas extranjeros, muchos de los cuales son argentinos de la zona central que, al no haber restricciones en ese país, fueron a plantar soja allí y a hacer forestación. Por más que el presidente Mujica se preocupe, yo no he visto, salvo por la amenaza que le hizo el gobierno argentino por el conflicto con las papeleras, que su soberanía esté en cuestionamiento; me refiero al conflicto con el gobierno anterior.

Y la Argentina tiene el 3 por ciento de las tierras en manos de extranjeros. Está bien, para llegar al 15 falta mucho. Australia, el 3 por ciento; Estados Unidos, 1,7; Brasil, 1,2. ¿Dónde está el peligro si Uruguay, que es pequeño y tiene el 25 por ciento en manos de extranjeros, no considera que su soberanía esté afectada? ¿Nosotros nos estamos preocupando en un país como el nuestro, donde necesitamos producir y trabajar?

Podrá haber más fábricas de electrodomésticos en Tierra del Fuego y de automóviles en la zona central, pero las demás provincias, ¿en qué vamos a crecer, si no en materia de producción agroindustrial? ¿Cuándo vamos a ver en Salta o en Jujuy una fábrica de automóviles? ¿Cuándo vamos a ver una industria que pueda realizar una transformación de las materias primas? Entonces, no debemos desalentar la inversión. Tal vez con el arriendo y con los alquileres se podrá encontrar algún estímulo para el país, que tanto necesita de las inversiones.

Ahora bien, hablando de inversiones, quiero decir que la Argentina ha ido perdiendo lugares entre los países de América como receptora de inversiones. Según la CEPAL, el año pasado estábamos mejor que Perú y hoy ya este país nos pasó también.

El primero en materia de inversión es Brasil. En 2010 tenía 48.000 millones de dólares. Luego México, con 17.000 millones de dólares. En tercer lugar Chile, con 15.000 millones. Luego Perú, con 7.300 millones; que estaba empatando con la Argentina hace un par de años. Y nuestro país, hasta 2008, recibía 2.000 millones más que Perú. Pero en 2009 ya nos pasó; y seguimos postergados durante 2010 y 2011. Por su parte, Colombia recibió inversiones por 6.700 millones. Y finalmente la Argentina figura sexta, como receptora de inversiones, con 6.100 millones.

Esto no se debe a la maldad del capitalismo —que de por sí algo tiene— sino a las desacertadas políticas posteriores al *default*, que por distintas cuestiones no se orientaron a atraer inversiones. Sin embargo, este proyecto de ley desalienta las inversiones, y también demuestra que quizá se quiere buscar algo que movilice alguna sensibilidad, pero es poco práctico.

Para finalizar, creo que este proyecto de ley no sólo no atiende el espíritu de la Constitución argentina ni nuestra tradición —aquí convivieron, conviven y convivirán inmigrantes con nativos—, sino tampoco el espíritu de nuestro Preámbulo, el cual prioriza la libertad. Más aún, el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes —no a los ciudadanos— los derechos a trabajar, ejercer toda industria lícita, navegar, comerciar, peticionar, permanecer, transitar, salir del territorio, publicar ideas, usar y disponer de la propiedad, asociarse con fines útiles, enseñar y aprender.

Es más, el artículo 16 establece que la Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, y señala que no hay títulos de nobleza y que todos los habitantes son iguales ante la ley.

Entonces, nuestra Constitución se diferencia de otras. Quizá podemos tener leyes parecidas, más o menos duras, pero en ninguno de los otros países que hemos analizado existe una protección o un cuidado, en sus constituciones, como la que tiene la nuestra, felizmente, a favor de los habitantes extranjeros que quieren poblar nuestro suelo.

Señor presidente: espero que esta norma se aplique en el futuro de la mejor manera posible y que no pase lo que hemos escuchado hace unas horas aquí, cuando el señor Sbatella —quien estuvo sentado ayer en este Senado— informó que la ley sancionada anoche, relativa al terrorismo, podría ser utilizada incluso con respecto a la prensa si ésta expone información que aterrice a la gente. Esto es lo que dijo Sbatella a varios medios. O sea, que si los medios de comunicación aterrizan a la gente, se les debe aplicar la ley. Pero esto no es lo que expresaron los miembros informantes, ni el sentido de la norma que mencionó el senador Fuentes, cuando afirmó que la ley debe interpretarse según nuestro plexo normativo.

Pero se ve que para el señor Sbatella, ni las palabras, ni lo que dijeron los miembros informantes es lo que él va a hacer. Él piensa denunciar. Su misión es denunciar el lavado de activos, luchar contra el lavado, contra los fondos ilícitos y no preocuparse porque la prensa publique algo. Porque, si esto es así, publicar la inflación es terrorismo; publicar que el dólar sube puede ser terrorismo; y ése no creo que sea el sentido de lo que aquí hemos votado. Evidentemente, los funcionarios irresponsables son los que, a veces, tuercen la voluntad de los legisladores, incluso la de la propia presidenta que, con su mensaje, trata de conciliar al país, aunque eso no se nota luego en los funcionarios.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Roldán.

**Sr. Roldán.** – Señora presidenta: vengo de una provincia y, dentro de ella, de un departamento donde, podríamos decir, fuimos pioneros en esto de la distorsión que se produce a través de la tenencia de la tierra por parte de extranjeros, que fundamentalmente no orientan su actividad, en cuanto a la explotación de las tierras, hacia los intereses de nuestro país.

Hace no mucho, en mi provincia éste fue justamente un tema de debate. En oportunidad de la reforma de la Constitución, hubo sectores –y así se hizo– que propugnaron que en su texto figure la restricción de la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Tengo que manifestar que, en esa oportunidad, me opuse, más allá de que estoy de acuerdo con este tema. Pero me opuse porque entiendo, y entendí en aquella oportunidad, que es una materia que no tiene que ser tratada por la Convención Constituyente provincial sino por el Congreso de la Nación. Y me felicito, en este sentido, por tener la posibilidad de participar en este debate y de dar la respuesta que debe dar el Parlamento al tema y a la problemática referida a la tenencia de la tierra por parte de extranjeros, sean personas jurídicas o físicas, que tengan el espíritu de pertenencia a nuestra Nación.

La verdad es que la iniciativa no prohíbe la compra de tierras por parte de extranjeros. La norma proyectada exige que el extranjero tenga ese espíritu de pertenencia a la Nación. Justamente por eso, en el artículo 4° del texto del proyecto, se determina cuáles son aquellos extranjeros que están exceptuados.

Decía anteriormente que vengo de un lugar que es pionero en esto de la desvirtuación de la tenencia de la tierra y de su explotación por parte de extranjeros, que es mi provincia, más precisamente mi departamento, donde por mucho tiempo fue propietaria de grandes extensiones de campo la corona inglesa, nada más y nada menos que el país con el que tenemos el mayor conflicto y que nos llevó a una guerra con el final que, lamentablemente, todos ya conocen.

Esto llevó a que la zona a la que pertenezco se postergara en su desarrollo, porque la corona inglesa en la cuestión de la explotación de ganadería estaba interesada en que en nuestra provincia o en la región no se instalaran frigoríficos, ya que los que le pertenecían estaban en el puerto de la ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, quería que no se produjera la industrialización de la carne en nuestra zona.

Pero decía que éste era el sentido de la norma y creo que viene a hacer justicia, porque hoy por hoy la tierra volvió a ser el bien estratégico que en algún tiempo dejó de ser. En este sentido, habiendo hasta decaído su valor en algún momento, hoy ha recuperado uno mucho mayor.

Creo que también esta cuestión del desaliento de la compra por parte de extranjeros va a permitir que el valor de la tierra de nuestro país se ubique en los parámetros reales. Y esto determina que los nacionales y las personas que vivimos en este país podamos adquirir la tierra. Porque si no, al final de cuentas, vamos a terminar vendiéndola a los extranjeros, que son los que tienen mayor capacidad de compra.

También es bueno decir que en este tiempo la tierra y lo que ella produce es rentable. Por lo tanto, quienes las poseen tienen la gracia de poder gozar de los beneficios de su trabajo, lo cual no ocurrió por mucho tiempo.

Entonces es bueno que esta iniciativa dé prioridad a quienes pertenecemos y vivimos aquí, seamos nacionales o extranjeros, o a quienes tengan que ver con la producción de alimentos, de gozar de los beneficios de la actividad rural.

Por otra parte, me voy a permitir disentar con el senador Juan Carlos Romero en lo referente a que esta norma avanzaría sobre cuestiones que tienen que ver con la aplicación del 124 de la Constitución Nacional. Lo que nosotros venimos a reglamentar acá es el derecho real de

dominio, que es una facultad del Congreso de la Nación. Y en ninguna parte de la iniciativa dice que la propiedad originaria por parte de las provincias en lo que hace a los recursos naturales deja de existir. Solamente viene a restringir la cuestión de la adquisición de la tierra por parte de los extranjeros, que es una de las facultades que tiene el Congreso de la Nación para reglamentar los derechos de sus habitantes.

También creo que este proyecto sigue el mismo espíritu de la Constitución de 1853. En el momento de su dictado se entendía como fundamental —y me parece que fue acertado— que la Nación Argentina debía tener una política migratoria muy fuerte, tal como se lo establece en su texto. Y también con ese sentido de pertenencia convocaba a los extranjeros a que vinieran a habitar nuestro suelo —no a comprar tierras indiscriminadamente— y se mantuvieran en su lugar de origen. Era un anzuelo que se les ponía diciéndoles que se les iba a dar los beneficios que tienen que ver con la extensión y la riqueza de los recursos naturales. Y así se hizo a nivel nacional con leyes de colonización y también en las provincias.

Por todo ello vamos a votar a favor del dictamen en mayoría.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra el señor senador Reutemann.

**Sr. Reutemann.** — Señora presidenta: el agua, la tierra y la energía escasean en el mundo; son bienes cada vez más preciados.

En la agenda del siglo XXI las cuestiones ambientales y de posesión de los recursos vitales están en el centro de las preocupaciones mundiales. De la disponibilidad de esos bienes dependerá la soberanía alimentaria.

Comparto plenamente la visión de que la tierra es un recurso estratégico. Y el hecho de que estén preferentemente en manos de los argentinos es una cuestión notoria de geopolítica, de respeto del acervo cultural. Y en la medida en que se modere la concentración en su tenencia y dominio, también es cuestión de equidad social.

La naturaleza ha sido pródiga con la Argentina en materia de recursos naturales. Ellos constituyen una permanente fuente de riqueza y la plataforma para que nuestra producción pueda sostenerse y desarrollarse con altos niveles de competitividad, los que nos caracterizan y que

son reconocidos por los mercados mundiales, en particular en lo que concierne al complejo agropecuario y agroindustrial.

Queda claro que nuestro suelo es rico y codiciado. Nuestro país, en la historia y en el presente, ha sido visto como granero del mundo. Ese granero está ubicado en un suelo específico; por ello es necesario protegerlo y cuidarlo, dejándolo preferentemente en manos de los connacionales, que tienen un campo ancho para desarrollarse. Ese suelo debe ser objeto de prácticas regulatorias que promuevan que la tierra sea del todo prioritariamente para los argentinos.

La Argentina es y será un factor clave a la hora de saciar la sed y el hambre de todo el mundo y de todos los habitantes; pero lo hará respetando un criterio básico de soberanía nacional, sin que medie una previa apropiación indiscriminada de su propio territorio, decidida en forma preventiva desde otro lugar de la Tierra. Sabido es que somos el principal exportador mundial de harina y aceite de soja, así como el segundo de maíz y un proveedor clave de trigo. Atento a ello, entre otras razones, somos una atractiva opción en la adquisición de nuestras tierras rurales.

La frontera productiva, que se ha venido ensanchando en los últimos tiempos, producto de la revolución biotecnológica en curso, nos hace ver que serán necesarios, en forma cada vez más creciente, suelos que puedan ser susceptibles de ser cultivados o donde pastoree nuestra hacienda.

El suelo es, en cualquier lugar y en cualquier caso, percibido como un bien estratégico, fundamentalmente por la creciente necesidad en su apropiación para ponerlo al servicio de la producción, mediando siempre el correspondiente cuidado del medioambiente.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

**Sr. Reutemann.** — Este marco legal, más allá de algunos cuestionamientos puntuales que ha recibido, debe ser considerado un gran avance en procura de lograrse objetivos que deben ser considerados superiores.

Haré un último comentario respecto de ciertas prevenciones que se hicieron en el sentido de que, al sancionar este proyecto, se estaría



avanzando sobre las competencias provinciales. Es sabido que soy un acérrimo defensor de ellas y que siempre he defendido el respeto al federalismo. Pero en este caso considero que de ningún modo se está afectando a las facultades que le son propias a las provincias argentinas. No se está reglamentando el dominio originario, que efectivamente está en cabeza de las provincias sino que se está ejerciendo una facultad exclusiva del Congreso Nacional, que deriva de la aplicación de la legislación civil; y las cuestiones atinentes al Código Civil son exclusiva materia del Congreso de la Nación y no de las provincias.

La reglamentación se refiere a la transmisión del dominio de inmuebles rurales y no al dominio originario en sí mismo. Por lo demás, el país es uno solo, la Nación Argentina es de todos y, al defenderla, se defienden los intereses de las provincias, las que, en una mirada federal, integran nuestra Nación.

Así que, por lo expuesto, señor presidente, voy a votar afirmativamente el proyecto.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Díaz.

**Sra. Díaz.** – Señor presidente: cuando llegó al Parlamento el proyecto que enviara el Poder Ejecutivo, los que conformamos el Frente Parlamentario Contra el Hambre decidimos convocar a una audiencia pública, porque consideramos que hablar de tierra es también hablar de producción de alimentos.

A esa audiencia concurrieron distintas organizaciones sociales, campesinas, políticas, agrarias, universidades nacionales, integrantes del INTA, integrantes del CONICET; y yo me comprometí a hacerles un punteo de los ítems sobre los que hubo coincidencia entre todos los sectores convocados para traerlo a este recinto.

Así que voy a explicitar concretamente estos conceptos con la mayor brevedad posible. Lo primero que debo destacar es que, de todas las agrupaciones presentes, había desde organizaciones afines al oficialismo hasta otras que se situaban en el extremo opuesto. Lo que sí se celebró desde todo este espectro fue la iniciativa de poner en debate el tema de la tierra.

Uno de los puntos que se señaló, fue la importancia de destacar que este tema va de la mano de un profundo debate del plan agroali-

mentario, que también fuera presentado por el Poder Ejecutivo. Se consideró la necesidad de poner en contexto la problemática y destacar el acaparamiento global que se está haciendo de la tierra, con la finalidad de asegurar su seguridad alimentaria.

Otro punto desarrollado fue la necesidad de discutir la concentración de la tierra no sólo en manos extranjeras sino también de capitales nacionales. En este sentido, uno de los participantes explicó que deberíamos invertir la sigla IAR, que significa inversiones agrícolas responsables, para hablar de RAI, que significa reforma agraria integral, según sus dichos textuales.

Otro de los puntos que se desarrolló fue la necesidad de salir de los tratados bilaterales de inversión de los años 90 donde, por ejemplo, de acuerdo a uno de los firmados con Estados Unidos, ellos pueden hacer lo que quieran aquí, pero nosotros allá no podemos tener medios de comunicación ni bienes raíces.

También se explicitó que este debate es el inicio de otros, como el vinculado con el proyecto de ordenamiento territorial, que tiene que ver con el uso del suelo, con su función social, y el que suspende los desalojos campesinos.

Por su parte, varias organizaciones pidieron considerar la tierra como un recurso natural no renovable, por eso hay que defenderla junto a los recursos hídricos, los bosques nativos y las riquezas minerales.

Se planteó también la necesidad de proteger a las comunidades originarias que habitan esos suelos, evitando que los extranjeros –sean personas físicas o jurídicas– se instalen en zonas de seguridad de frontera.

Así mismo, todos los sectores coincidieron con que el 20 por ciento del que hablaba el proyecto original significaría la suma de las superficies de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. En consecuencia, se evaluó la necesidad de reducir el porcentaje a un 10 por ciento, estableciendo esto mismo en las provincias y en los municipios.

Se consideró la necesidad de poner en debate la matriz productiva, que es funcional a intereses que no son los nacionales, y que debe tener como núcleo fundacional y productivo a la familia y como el corazón de la producción en



la República Argentina a la pequeña y mediana empresa rural.

Se planteó la necesidad de discutir qué producimos, cómo producimos, para qué producimos y para quién producimos en nuestras tierras.

Hablamos también de la necesidad de avanzar con políticas contundentes sobre la desertificación y la deforestación.

Además, se dieron terribles ejemplos de cómo se desaloja a los pequeños agricultores de sus tierras, con brutal represión que, en muchos casos, ha llegado a provocar la muerte de personas que intentan resistir estos desalojos y que, por supuesto, pelean por la tenencia de la tierra.

Se planteó la necesidad de discutir la propiedad, la tenencia, la posesión y la consignación de grandes extensiones de tierra. O sea, discutir la concentración de la tierra no sólo como propiedad, sino la vinculada con el arrendamiento de grandes extensiones para llevar adelante los agronegocios.

En los últimos años, 200 mil familias perdieron su tierra y han sido expulsadas a zonas del conurbano, sin trabajo, sin profesión, sin vivienda, en condiciones indignas de pobreza, que generalmente es criminalizada.

El agua, la tierra y la semilla son indicadores básicos para comenzar a hablar de soberanía alimentaria y, entonces, sí comenzar a hablar de soberanía nacional. Cuando debatimos estos temas, no hay que dejar de hacerlo en el marco de la cuestión ambiental. En Latinoamérica la industria emite menos gases de efecto invernadero que la agroindustria.

También quiero traer a este recinto la voz del espacio Habitar Argentina, del que también formamos parte, para expresar la importancia de que este proyecto sea el primer paso de un debate más amplio e integral sobre la regulación de la tierra, a fin de permitir su acceso para la vivienda y para el trabajo, ya que el libre mercado no garantiza estos derechos.

Los conflictos más álgidos han tenido en común el tema de la tierra, rural y urbana, y las muertes. Por ejemplo, el Parque Indoamericano, las ocupaciones de tierra en Ledesma, los asesinatos de campesinos en Santiago del Estero y la fuerte represión y destrucción de viviendas de parte de estados provinciales y municipales, como los realizados en Ushuaia.

Estos puntos, que me parece respetuoso compartirlos con ustedes, fueron los que se pusieron de manifiesto y se debatieron en estos grupos que me parece importante destacar, porque son plurales y representativos de distintos sectores de nuestra sociedad, del mundo académico, del mundo de las organizaciones sociales, del mundo de la política.

Como bloque celebramos el debate del proyecto del Poder Ejecutivo como inicio de una discusión más integral; y confiamos en el compromiso asumido por el nuevo ministro de Agricultura, quien declaró que se necesitarán otros instrumentos legales para regularizar los problemas de la tierra, entre los que enumeró al de regularización de los problemas de tenencia de la tierra, al de ocupación indebida de campos o alquileres, al de solución de la problemática de los pueblos originarios para acceder a la tierra, al de ordenamiento del tema de propietarios de dudosa tenencia legal.

Además, queremos dejar constancia de la presentación de cuatro proyectos de ley vinculados con la regularización dominial, con las garantías habitacionales en el proceso de desalojo, con el régimen de ordenamiento territorial nacional y con el sistema integral de políticas para la vivienda y el hábitat y fondo para la producción social del hábitat, así como un proyecto de ley de alquileres que acabamos de presentar.

Además, vamos a presentar nuevamente el proyecto de ley de recuperación y mantenimiento de la capacidad productiva y de manejo sustentable de los suelos y los recursos naturales que intervienen en la producción agropecuaria y silvícola.

Esperamos que estos proyectos sean tratados con la prioridad que nos está marcando la realidad, junto con aquellos que suspenden los desalojos rurales. Así, anhelamos poder avanzar sobre el reordenamiento territorial en todo el país, a fin de garantizar derechos humanos esenciales consagrados en nuestra Constitución y en los tratados y convenciones internacionales a los que hemos adherido.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador López.

**Sr. López.** – Señor presidente: respaldo y hago propias las palabras de la senadora que me antecedió en el uso de la palabra.

Asímismo, quiero remarcar que, en verdad, desde que este proyecto empezó a tomar cuerpo en la Cámara de Diputados, veníamos haciendo nuestros aportes al tema, respecto de algunas cuestiones que pretendíamos que se contemplaran de modo diferente. Por ejemplo, el tope a la superficie o a la cantidad de tierra que puede ser materia de adquisición por capitales extranjeros, así como también la previsión en cuanto a la autoridad de aplicación.

En este aspecto, nos parecía que hacía falta contemplar a las provincias. Nuestro territorio es enorme, muy extenso y de repente la necesidad de contar en este organismo de aplicación con actores locales vinculados más inmediatamente con las distintas regiones y territorios, podía enriquecer la mirada sobre las políticas a llevar adelante y permitiría también articular la política nacional con las provinciales sobre estos mismos temas. A su vez, nos parecía necesario contemplar la participación de los movimientos y las organizaciones sociales que militan por la tierra.

Este tema forma parte de una de las tantas materias pendientes que tenemos como país desde hace mucho tiempo, y durante décadas –forzoso es reconocerlo– la mayoría de los partidos políticos fueron cooptados por el neoliberalismo y estas banderas fueron sostenidas por movimientos sociales, organizaciones territoriales, movimientos campesinos, pueblos originarios. Por lo tanto, en parte, esta iniciativa es un reconocimiento a esa lucha, a toda esa resistencia. En consecuencia, nos parecía clave que ellas estuviesen aunque sea a título de organismo consultor o asesor, porque estoy convencido de que tienen mucho para decir y para enseñar.

También teníamos alguna inquietud respecto de la previsión del proyecto en cuanto a que no se aplica retroactivamente. Esto, en parte le resta algún nivel de utilidad o de eficacia en cuanto a los objetivos que tiene la norma, porque si bien va a permitir crear un cuadro de situación más armónico con los objetivos de acá en adelante, no va a poder incidir sobre situaciones consolidadas actualmente al amparo de un vacío normativo o la legislación anterior. Por ejemplo, si se prevé que no se va a poder tener más de mil hectáreas en cabeza de una misma persona, esto va a tener que convivir con propiedades rayanas al millón de hectáreas

en cabeza de un mismo individuo. Y lo cierto es que nosotros no creemos que desde el punto de vista legal o constitucional sea imposible pensar en la aplicación retroactiva de la norma, porque es una cuestión de contrabalancear los derechos en juego.

En efecto, si estamos hablando de recursos naturales no renovables, estratégicos, vinculados a la soberanía y a la libertad de autodeterminación de nuestra Nación, obviamente se justifica la aplicación de determinadas medidas especiales; y ello prevalece sobre los derechos e intereses particulares, sobre todo cuando en muchos casos éstos no pasan más allá de la constancia en un papel –llámese título de propiedad, según nuestro sistema registral–, sin reposar sobre la posesión, que es la vinculación directa de la persona con su bien, con su patrimonio, con su propiedad.

De todas maneras, somos conscientes de que esta herramienta es un paso dentro de un proceso que es muy importante y muy profundo y que, por ende, va a llevar más debate, más búsqueda de otras herramientas, de otras soluciones, y muchísima decisión política e involucramiento social que seguramente vamos a tener oportunidad de seguir atravesando en los años que vienen.

Pero creo que todos estos diferentes aspectos o miradas distintas que quisiéramos hacerlas presentes en este debate, poca utilidad tendrían si en el mientras tanto las tierras siguen extranjerizándose. Por eso es bueno que podamos avanzar en esta ley. La verdad es que con uno solo de sus artículos ya sería un avance importante, como lo es el que le pone un tope a la extranjerización. A partir de ahí tenemos una suerte de paraguas protector y ganamos tiempo para poder debatir en profundidad todo lo que pensemos que haga falta, mucho de lo cual ha sido mencionado por la senadora Díaz. Con eso ya tenemos un avance importante.

Y también daríamos un paso importante con la creación del registro, porque es verdad que sin un cuadro de situación suficientemente fidedigno, claro, es difícil pensar y diseñar las mejores medidas y las mejores políticas. Este constituiría otro avance. Y así, de lo que arroje este registro –una vez que esté organizado, funcionando y concentre la información que va a ser de su competencia–, vamos a tener más elementos para, eventualmente, pensar en refor-

mas a esta norma o en otros proyectos o leyes que complementen y que permitan avanzar más en los aspectos que quedan pendientes.

Insisto en algunas ideas que expresaba ayer cuando analizábamos el proyecto de ley sobre regulación del trabajo agrario y en algunas ideas que expresé hace un rato, cuando debatíamos sobre el proyecto de Papel Prensa. Creo que son distintos proyectos o diferentes políticas y medidas que se enmarcan en un proceso de desmercantilización del derecho. Eso me parece que es lo importante. Se trata de pensar a la tierra como un derecho antes que como una mercancía apta para la producción de lucro, y no sólo como un derecho de los ciudadanos y de los compatriotas sino de la Nación toda, vinculada a la soberanía y a la autodeterminación. Eso es lo que nos permite poder sopesar, poder valorar desde otra perspectiva y poder tomar partido con otro enfoque sobre la iniciativa.

Tal como se ha dicho acá, no creo que sea una política excluyente de los extranjeros. Creo que en parte esto ha sido acertadamente respondido por otras intervenciones. El artículo 20 de nuestra Constitución es muy claro cuando dice que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos a los que después alude. Remarco “en el territorio”. No hace falta detenernos a explicitar en profundidad qué se entiende por esta expresión. Como militantes políticos sabemos lo que ello significa; y se trata de una condición que a lo mejor no reúnen un Benetton o un Turner que, como dije hace un rato, detentan un papel a su nombre, pero difícilmente tengan vinculación con la tierra a través de su posesión; y así tienen que valerse de intermediarios que, como tenedores, eventualmente son representantes de su posesión.

Pensar en el dominio a una distancia tal que a su titular le resulta materialmente imposible poseer su tierra, pareciera que tiene bastante que ver con el colonialismo; o quizás en otra época así se le llamaba.

En este sentido, en esta necesidad de salirnos del colonialismo, puedo señalar que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, en sus políticas relativas a las negociaciones que trata de imponer entre la Argentina y Gran Bretaña en torno de las islas Malvinas, una de las cosas que tiene en cuenta es la distancia entre quien pretende el dominio respecto del bien sobre el

cual reivindica sus derechos. Y si no es colonialismo, será quizá la necesidad del negocio. Ahora, si en un plato de la balanza uno pone estos valores —entre comillas— que pueden reivindicar estas personas de nacionalidad extranjera, y en el otro plato coloca los derechos de la Nación, de la soberanía y de la libertad de autodeterminación, obviamente la balanza tiene que inclinarse hacia el lado de este último de los platos del ejemplo.

Creo que en estos tiempos hay muchas ideas, muchas iniciativas, muchos proyectos, mucho debate, mucho entusiasmo, que moviliza a grandes sectores de nuestra población. Avanzar en la materialización de esas ideas y proyectos —de esos sueños, en definitiva—, durante tanto tiempo postergados, requiere entre otras cosas un país soberano. Y pensar una Nación soberana sin un territorio es imposible. El territorio es uno de los elementos esenciales del Estado. Pero en manos de capitales extranjeros, esta integridad del territorio y de la soberanía se resiente.

Por ello, entendemos que es importante dar este paso. Ojalá logremos la cantidad de votos necesarios para que este proyecto de ley pueda ser sancionado.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

**Sr. Cabanchik.** — Señor presidente: seré breve; y pediré luego permiso para insertar.

Retomo el final del discurso del senador López, respecto de esta cuestión de la soberanía. En primer lugar, la cuestión de la tierra está en el centro de los debates filosóficos y políticos de Occidente. En ese sentido, Carl Schmitt la elevó a uno de los principios fundamentales de la soberanía en lo que denominó el “*nomos*” de la tierra, que es una palabra griega que significa “*tomar, dividir y explotar*”. Por lo tanto, esos serían los tres conceptos fundamentales de todo ordenamiento concreto que hagamos del territorio argentino. La decisión sobre la tierra se ha constituido, históricamente, como el ejercicio soberano más patente en esa triple operación: la conquista, la división y la explotación.

La soberanía sobre el territorio nacional comenzó con la Revolución de Mayo y se cristalizó con la declaración de la Independencia. Por ese motivo, la celebración del Bicentenario se extiende hasta 2016. Asimismo es la soberanía

nía lo que está detrás de la decisión de instituir como feriado nacional la conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, cuando en 1845 se consolidó la soberanía sobre los ríos interiores frente a las fuerzas anglofrancesas y al mundo, en general. Entonces, la cuestión de la soberanía no se agota en una medida simbólica o económica, aunque éstas sean dimensiones importantes de lo que estamos debatiendo, sino que se trata también de un tema político.

A su vez, la disposición con respecto a la explotación de la tierra no es meramente un cálculo, ya que está en juego la soberanía. Ahora bien, debemos recordar que existe una historia compleja en la conquista de la soberanía hacia el interior de nuestro territorio, la cual fue asumida como la conquista del desierto. Sin embargo, dicha campaña también implicó el genocidio de los pueblos originarios. En consecuencia, esa conquista merece una reparación, que debe también ser discutida a partir de ahora.

El debate de este proyecto de ley puede ser visto como un primer paso hacia ese sentido reparatorio. Llevar adelante esta discusión real, y no sólo simbólica, aunque entraña desafíos profundos, pondría de manifiesto la madurez política que necesitamos.

Por eso, luego de este primer paso tenemos que avanzar en la regularización de la situación dominial en el país. Se necesita una ley de reorganización territorial que restrinja también la acumulación de grandes superficies de tierra, independientemente de la nacionalidad de quien las detenta. Además, está el tema de los pueblos originarios y la discusión de una ley de arrendamiento rural.

Por estas consideraciones generales, creemos que el proyecto es bastante claro y que ha sido mejorado por los diversos bloques de la Cámara de Diputados. Asimismo, supongo que la reglamentación de la ley podrá mejorar aquellos aspectos ambiguos o imprecisos señalados previamente.

Por lo tanto, acompañaremos en general y en particular este proyecto de ley, y esperamos poder avanzar en la agenda. En ese sentido, la senadora Díaz ya dio algunos ejemplos de proyectos que hemos acompañado en la Cámara de Senadores.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Meabe de Mathó.

**Sra. Meabe de Mathó.** – Señor presidente: este proyecto me llena de satisfacción. Hace cuatro años tuve la responsabilidad de presidir la Convención que trató la reforma de la constitución en la provincia de Corrientes. Allí, en forma totalmente pionera, se habló del tema de las tierras y se sancionó una ley parecida a ésta, aunque no igual. De manera tal que yo voy a acompañar este proyecto y me alegro enormemente de que se vote en este recinto.

Quisiera señalar algunas cosas. Lo primero es que me ha llamado mucho la atención que esta iniciativa haya entrado en la Cámara de Diputados en abril y prácticamente no se le dio tratamiento al tema. No obstante, más allá de las ideas y de los partidos políticos, entiendo que el espíritu que nos anima a muchos de los que estamos acá y, fundamentalmente, a los correntinos, es el amor por la tierra que tenemos; la cual debemos defender y hacer todo lo posible para que esté en manos de argentinos.

Hoy dijeron aquí que la Constitución saluda a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren venir a trabajar a la Argentina. Eso fue hace muchos años; hoy han cambiado muchas cosas. Tengo la seguridad de que esos hombres y mujeres que vinieron a nuestro país llegaron hasta aquí para trabajar no solamente con una cultura de trabajo y de esfuerzo, sino que, además, vinieron a fundar sus familias.

Esos inmigrantes dormían de noche arriba de un recado, porque en aquella época no había ni aire acondicionado, ni televisión, ni computadoras, ni teléfonos. Y yo lo sé bien, porque me crié así; por supuesto que ahora me alegro de tener aire acondicionado, televisión y computadora. Porque sería tonto decir que uno no se alegra creciendo, mejorando, adquiriendo conocimientos y pudiendo compartir todo eso, justamente con la gente que necesita de nosotros para ir hacia adelante.

Fíjese, señor presidente, que en Corrientes no sabemos cuántos –porque lamentablemente no hay una información exacta; unos hablan de una cierta cantidad y en Google figura otra; y yo lo desconozco–, pero créanme que hay extranjeros que no han venido por amor a la tierra, que ni siquiera se criaron en el campo, pero que adquirieron bastante dinero y pudieron



comprar muchas tierras –se habla de 380 mil hectáreas–, que justamente están ubicadas en lo que se conoce como las tierras del Iberá. Y por añadidura debajo de ellas está el acuífero Guaraní, una fracción muy grande de agua que todavía hoy no tiene demasiada relevancia, pero que se presume que dentro de pocos años podría valer más que el petróleo. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar importancia a esto!

A veces nos encontramos con señores que vienen, invierten mucha plata pero no para producir, sino con otros fines, y además sacan a todos los habitantes del lugar, los cuales por distintas razones no tienen los papeles en orden. Entonces, les pagan mucho menos de lo que cabe y así van agrandando su propio territorio. Por eso, tenemos que legislar con respecto a los inversores extranjeros.

Es cierto que en algunos casos, a lo mejor –por qué no decirlo–, vendría bien en la provincia de Corrientes recibir una determinada inversión. Por ejemplo, nuestra provincia va a necesitar una pastera. Tiene cualquier cantidad de superficie ya forestada. De manera que no se puede ser tan dura con la inversión extranjera, porque se puede necesitar. Pero que les quede grabado a quienes me quieren escuchar: no es solamente la tenencia de la tierra para los extranjeros lo que debe movilizarnos. También ha existido falta de espíritu y de amor hacia estas tierras. Y esto ha provocado que muchos dirigentes políticos, quienes han ocupado diferentes cargos en la administración nacional y provincial, no se ocuparan de ver de qué manera se podía ayudar a aquellos pobladores a fin de que no fueran destronados de sus tierras y pudieran seguir criando a sus familias y a sus guachos. Y esto lo digo con toda picardía, porque una vieja de ochenta o noventa años que ha vivido toda su vida en estas tierras, tiene que tener guachos. No tiene más remedio. Muchas veces, los más jóvenes se defienden de otra manera.

Entonces, lo que me inquieta –no me sentiría cómoda si no lo dijera–, es que justamente ese federalismo es el que tenemos la obligación de defender, sobre todo los correntinos. Tengo un ascendente que fue cinco veces gobernador de la provincia de Corrientes. Era un hombre muy humilde, pero tenía un gran amor por su tierra. Ese hombre me enseñó, a través de sus escritos, la defensa que uno debe emprender de lo que

llamamos federalismo. Ésta es la parte que me inquieta, pero confío en la inteligencia de nuestra presidenta. Lamentablemente, esta norma tiene algunas cosas que se deberían mejorar. Es más, es necesario hacerlo, para el bien de todos.

Así que con esta salvedad, manifiesto que voy a acompañar este proyecto de ley, y dejo expresado que quedo a disposición de la señora presidenta para que si en alguna cuestión pudiera mejorarse este proyecto, ofrezco mis conocimientos y la seguridad de mi acompañamiento.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – Señor presidente: tal como lo hiciera el senador Linares, en nombre del Frente Amplio Progresista, adelantamos nuestro voto positivo a la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Consideramos que estamos dando un paso adelante, un paso positivo, en esta sesión, con la aprobación de este proyecto de ley que se enmarca en iniciativas parlamentarias que hace mucho tiempo venían siendo presentadas por distintos bloques, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en nuestro caso, por parte del socialismo. Se enmarca en parte de lo que ha sido nuestra historia, lo que los socialistas siempre sostuvimos.

Acá hay una conexión clara: concentración y extranjerización. En lo que respecta a la concentración de la tierra, siempre sostuvimos que es la contracara del progreso. El latifundio, históricamente, es lo que ha generado desigualdad, pobreza, explotación irracional de los recursos naturales. Ya desde 1917 Juan B. Justo hablaba, en sus proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación, del mal del latifundio. Por eso, los socialistas también acompañamos aquella huelga agraria de 1912, el Grito de Alcorta, de la que se van a conmemorar, el año que viene, los cien años. Y aquel Grito de Alcorta, de los arrendatarios explotados en sus campos, significó la creación de la Federación Agraria Argentina, el nucleamiento de los pequeños productores, en un avance sustantivo, en lo que ha sido la tenencia de la tierra.

Vengo de una provincia chacarera, no estanciera; una provincia de pequeñas producciones agropecuarias, en su inmensa mayoría, que ha



significado la construcción de pequeñas ciudades, armónicas en su desarrollo.

Voy a retomar este tema posteriormente, porque han sido planteadas algunas cuestiones en el recinto y hay artículos periodísticos que me gustaría contestar.

La necesidad de sancionar esta ley se explica con realidades que son contundentes. El indicador indiscutible del proceso de concentración de la tierra, que se profundizó en la Argentina a partir de la década del 70, puede verse en la comparación intercensal que podemos hacer entre 1988 y 2002. Da cuenta de que desaparecieron, en el término de esos años, de 1988 a 2002, cien mil establecimientos en la República Argentina.

Un estudio más reciente del INTA, por otra parte, sostiene que la mitad de las tierras pertenece al 2 por ciento de los propietarios, y que los pequeños y medianos propietarios detentan sólo el 3 por ciento del total de las tierras cultivables. A este proceso de concentración de la tenencia de la tierra habría que sumarle el proceso de concentración en el uso de la misma. Por ejemplo, el 7 por ciento del total de los productores de soja maneja más del 60 por ciento de su producción, y menos del 10 por ciento de los productores trigueros manejan el 50 por ciento de la producción de trigo. Y este proceso de concentración de la tierra, que se disparó –como decía antes– desde los años 70, tuvo una profundización en los 90, cuando quebraron miles y miles de productores agropecuarios, que desaparecieron abandonando los campos, que quedaron en manos –muchas de ellos– extranjeras.

Hay diversas estimaciones respecto del porcentaje de las tierras en manos de extranjeros. Y decimos diversas estimaciones porque lamentablemente no existe un catastro nacional unificado. Por eso no contamos con estadísticas precisas sobre los movimientos de compraventa que nos permitan decir con precisión quiénes son los dueños de la tierra en la República Argentina. Por eso la realización del catastro que plantea esta ley en el plazo que se fija sería importante para este objetivo.

Según estimaciones que en su momento hizo la Federación Agraria, en nuestro país existen entre 17 millones y 20 millones de hectáreas en manos de extranjeros sobre un total de 180 millones potencialmente productivas con las

que cuenta la Argentina. Aproximadamente el 12 por ciento de la tierra se encuentra en manos extranjeras, en un proceso de extranjerización que se ha venido acelerando en los últimos años al calor de la crisis y la apreciación del valor de la soja en los mercados mundiales.

Hay casos paradigmáticos en cuanto al patrimonio nacional que hablan a las claras de la situación de desprotección de nuestra riqueza y recursos naturales no renovables que debieran preservarse. Estoy hablando de esteros del Iberá y del acuífero Guaraní que recién mencionaba la senadora Meabe en manos del empresario inglés Douglas Tompkins; de las 970.000 hectáreas patagónicas en manos de Benetton, que también fue mencionado en este recinto; de lago Escondido, secuestrado en las tierras del inglés Lewis en El Bolsón; las 408.000 hectáreas en manos de una empresa italiana en La Rioja y las 250.000 hectáreas en manos de intereses malayos en Mendoza. Y podríamos seguir prácticamente con todas las provincias argentinas.

Si esta ley hubiera llegado antes hasta podría haber impedido la cesión de la soberanía nacional en manos de la Barrick Gold en el megaproyecto minero de Pascua Lama. Por eso compartimos esta ley y nos parece fundamental que también, como aquí se dijo, podamos complementarla con otras.

Este debate se da en un momento de continua especulación sobre nuestras tierras en el mercado internacional. Hace poco tiempo estaba con otros señores senadores y senadoras en una sesión de la OIT y un diplomático nuestro me acercó un diario que tenía en su poder. Me preguntó si lo había visto ese día. Sinceramente, no acostumbro leer el *Financial Times* ni todos los días ni una vez por semana, y menos en esa sesión.

Entonces leí ese artículo, que en realidad era un aviso clasificado de una empresa inmobiliaria inglesa que ofrecía al mercado mundial un millón de acres de la provincia de San Juan. Se puede recurrir a las páginas web oficiales de esta empresa inmobiliaria británica. Ken Jones, uno de los ejecutivos representantes de la firma Savills, que tiene sede en Londres, declaró en la web de la compañía británica que se trata de la mayor extensión de tierras rurales que jamás ha salido al mercado privado en el mundo y confía en el interés que esto despertará en los

potenciales compradores del mercado europeo y asiático. Estoy leyendo textual lo que decía la página web y algunas de estas cosas están planteadas, también, en inglés, en este aviso clasificado. Para que los interesados tengan dimensión de la extensión de las tierras, Savills promociona la estancia como equivalente a 3,5 veces el territorio de la ex colonia británica de Hong Kong y equivalente al condado inglés de Kent, habitado por un millón y medio de personas, al sureste de Londres, en el Reino Unido. Ahora, digo yo, para tener alguna referencia, esto podría ser el 20 por ciento de la provincia de Tucumán o 20 veces las dimensiones de la ciudad de Buenos Aires o dos veces el departamento de Rosario, que tiene un millón y medio de habitantes. Se trata de un ofrecimiento de, prácticamente, un octavo de dicha provincia. Un millón de acres son 500 mil hectáreas o, más exactamente, 408.318 hectáreas.

Por eso, señor presidente, me parece que estamos hablando de cosas muy concretas, que es lo que queremos limitar. Y no podemos confundir términos. Hay dos cuestiones que yo quisiera destacar. La primera tiene que ver con lo que se plantea respecto de que esta ley sería contradictoria con nuestra política histórica de brazos abiertos a la recepción de los inmigrantes. En tal sentido, cabe señalar que nuestra Ley de Migraciones, 25.871, es un orgullo para la República Argentina, razón por la cual no podemos plantear que somos discriminatorios con los extranjeros, cosa que es totalmente contraria al espíritu que hemos sostenido histórica y actualmente.

Pero yo quisiera dar mi experiencia desde la provincia de Santa Fe con dos cuestiones que se oponen como la contracara de lo que queremos decir respecto de la receptividad de los extranjeros, por un lado, y el rechazo a un modelo de desarrollo, por el otro, que es de expoliación de nuestras riquezas naturales. Ahí entra el concepto de soberanía. Me refiero a fines del siglo XIX y al siglo XX. En Esperanza, en Santa Fe, fue la colonización donde llegaban los suizos, los alemanes y los italianos del norte —que en aquel momento eran muy pobres— a trabajar la tierra en pequeñas parcelas. Eso significó una revolución, y esa reforma agraria planteada de esa manera, consistente en darle un pequeño pedazo de tierra productiva a un colono que

venía a trabajar la tierra. ¿Qué tiene que ver con esto? Absolutamente nada.

Yo creo —ahí veo la contracara— que sí tiene que ver con esto que estamos queriendo limitar. Porque la otra experiencia de la provincia de Santa Fe fue *La Forestal*, a principios del siglo XX. Dicha experiencia está muy bien desarrollada por Gastón Gori en ese libro maravilloso que es *La Forestal*, donde desarrolla cómo llegó el capital, la inversión extranjera al norte de la provincia de Santa Fe; taló todos nuestros montes, porque necesitaban el tanino; les pagaban a los obreros con vales —por eso, esto también está atado a la ley que aprobamos ayer—, en lo que es una explotación absoluta de los trabajadores, y dejaron un norte de la provincia de Santa Fe devastado, pobre. Se llevaron toda la riqueza. Ésa no es la inversión que queremos, el tipo de inversión que queremos. Eso es expoliación, que es una cuestión diferente.

Por eso, esa primera cuestión: me parece que esta ley es coherente con nuestra tradición, totalmente coherente. Coherente en la tradición que sostuvimos los socialistas en su momento, que estuvo expresada en el artículo 40 de la Constitución de 1949, en donde el recurso natural se fijó como hecho de nuestra soberanía. Ahí está ese libro de Scalabrini Ortiz, *Bases para la reconstrucción nacional*, donde desarrolla lo que fue la concepción doctrinaria de Arturo Sampay. Este aspecto es coherente y me lleva al otro punto que yo quería desarrollar.

Hoy, en un reportaje radial, me preguntaban, ya que ha sido escrito en algunos diarios, que sería inconstitucional esta sanción que hoy estamos dando, porque contraría lo que la Constitución del 94 estableció respecto del recurso natural en manos de las provincias. Desde nuestro punto de vista, no lo contraría en absoluto. Esto ya lo discutimos con la Ley de Bosques y con la Ley de Glaciares. Por lo tanto, nos parece totalmente coherente, y porque, además, en primer lugar, debemos entender que estamos legislando sobre el dominio de la tierra por parte de los particulares. Esto es claramente materia federal. Por lo tanto, estamos en presencia de una atribución de este Congreso. Por eso no vulnera ni se contradice con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales que existen en sus territorios, previsto por el artículo 124 de la Constitución Nacional.

En segundo lugar, por el artículo 41 de nuestra Constitución, las autoridades proveerán a la protección del ambiente y la utilización racional de los recursos naturales, para que todos los habitantes puedan realizar las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Aquí entra el aspecto sobre el que también debemos avanzar en otras leyes y complementar, como es el tema del cuidado del medio ambiente y de un modelo productivo de desarrollo que no sea insustentable a mediano y largo plazo. Porque hoy hay un solo producto que avanza constantemente, que es la soja. Vemos hoy que se han desmontado miles de hectáreas en nuestro país, y se siguen desmontando. Es importante dar un debate en este sentido para diversificar nuestra producción agropecuaria. O sea que el Congreso Nacional tiene la obligación de reglamentar los presupuestos mínimos que hacen al uso del suelo, como hemos dicho con bosques y glaciares, y entendemos que los límites que establece esta ley es una forma correcta de hacerlo.

Finalmente, para este aspecto...

**Sr. Presidente.** – Senador: le piden una interrupción.

**Sr. Giustiniani.** – Sí, cómo no.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Barrionuevo.

**Sr. Barrionuevo.** – Simplemente, para aclarar un tema.

Con relación a bosques, es cierto que la ley no afecta las autonomías. Con relación a la Ley de Glaciares, a nuestro entender, sí afecta las autonomías, sobre todo, en la definición de la zona periglacial. Sobre este tema, la provincia de Jujuy ha promovido una acción judicial. Hemos logrado una medida cautelar ante la justicia federal. La cuestión está a resolución de la Corte. Simplemente, quería aclarar esto porque no puedo permanecer en silencio ante esa expresión.

**Sr. Giustiniani.** – Finalmente, desde el punto de vista que estaba desarrollando en cuanto a que nos parece que no es contradictorio con el interés de las provincias y con lo que dice la Constitución Nacional, creemos que cuando chocan derechos, siempre unos prevalecen sobre otros. Es claro que el derecho que pudiera

tener un extranjero a comprar y explotar tierras –y con esto no estoy contestando su interrupción, sino retomando el inicio de mi exposición en cuanto al tema de los extranjeros– cede ante el derecho que tienen todos los habitantes del país a la protección del ambiente y a la producción. La tierra es un recurso estratégico para el presente y para el futuro; de allí que este Congreso debe regular esta materia. Por otra parte, la limitación que aquí se está realizando es una limitación parcial y no total.

En los proyectos que habíamos presentado, nuestra limitación era mayor, porque planteábamos el 10 por ciento. Luego, hubo un consenso en la Cámara de Diputados de bajar del 20 al 15 por ciento, que acompañamos favorablemente, pero planteando que, desde nuestro punto de vista, la restricción debiera haber sido aún mayor, con el 10 por ciento. Por otro lado, queremos remarcar que en la ley queda todavía cierta indeterminación y laxitud cuando se plantea la limitación de las mil hectáreas para la zona núcleo, en el artículo 10. Tal como lo manifestó el senador Linares, no está claramente definida la zona núcleo y a qué hace referencia. Nos parece que las mil hectáreas en la zona núcleo son sumamente generosas. Digo esto porque si uno entiende como zona núcleo lo que hace a toda la zona sur de mi provincia, mil hectáreas nos parece una extensión sumamente generosa.

Un tema que la ley no aborda y que nos parece central es la matriz de concentración que está planteando. Por lo tanto, la cuestión de los arrendamientos nos parece que es un tema fundamental que debiéramos abordar; que podría hacerse con otra ley. Por último, cuando vamos a la legislación comparada, respondiendo también otras cuestiones que permanentemente se traen al debate, vemos que prácticamente la mayoría de los países, y los países desarrollados sobre todo, tienen en sus plexos normativos limitaciones a los extranjeros para la compra de la tierra, que es considerada también como un bien estratégico.

Así que, con este fundamento, desde el Frente Amplio Progresista vamos a acompañar en general y en particular esta norma.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – En este tema tenemos una visión diferente con el senador Romero.

La modernización de la agricultura, la expansión del mercado de tierras, la concentración de la tierra que genera exclusión en el acceso a la tierra por parte de los pobladores son fenómenos que han sido observados por distintos expertos y que han cobrado gran notoriedad a partir de la publicación de un estudio que hace la FAO, primero, para el continente africano, preocupada por la seguridad alimentaria y advirtiendo este proceso, donde ya son otros Estados los que avanzan en la compra de tierras en diferentes países. En inglés, se habla de *land grabbing*, que es acaparamiento de tierras.

Por su parte, el término “acaparamiento mundial de tierras” –lo dice el experto Saturnino Borrás– se ha convertido en una especie de comodín para describir el fenómeno de operaciones comerciales transnacionales y especulación con tierras que se está produciendo en los últimos años en torno de la producción, la venta y la exportación de alimentos y biocombustibles. Estamos ante la presencia de una nueva realidad. Por eso, es importante regular y tener normas muy claras, a efectos de afrontar los peligros que puede significar para el desarrollo, la soberanía y la titularidad del pueblo argentino, como lo señala el mensaje de elevación.

La verdad es que hubiera sido muy bueno no tratar esto con apuro o, tal vez, que hubiéramos sido Cámara de origen. Entonces, con el conocimiento que cada senador tiene de su provincia, habríamos podido tener una ley técnicamente mucho más correcta. Reitero: habría sido sustentada por un mayor conocimiento de lo que es la realidad de cada provincia, especialmente, en lo que hace a la defensa de las facultades federales y en lo que hace a cuáles son las unidades de medida para poder restringir la compra de tierra a extranjeros.

Se ha hablado mucho de la constitucionalidad de este proyecto. Estoy absolutamente segura de que es constitucional y que es una facultad del Congreso de la Nación. Proteger el desarrollo, decimos: artículo 75, inciso 19), de la Constitución, que nos da la facultad –o sea, la obligación– de legislar para proteger y fomentar el desarrollo humano, el progreso económico y la productividad del país generando empleo.

El inciso 22 del mismo artículo de la Constitución incorpora con rango constitucional el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, que dice que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural, y que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios recursos y de sus propios medios de subsistencia.

En cuanto a la soberanía nacional, en nuestro propio Preámbulo se dice que uno de los objetivos del pueblo argentino es la protección de la soberanía nacional. En nuestro Preámbulo se habla de la defensa común. La defensa común no se refiere solamente a la idea de conflictos, de límites o de tratados internacionales sino que se refiere a defender el ocupamiento efectivo de nuestro territorio por los argentinos actuales y su preservación para las generaciones futuras.

El antecedente más antiguo que podemos encontrar es del año 44, firmado por el secretario Juan Perón. Se trata del decreto 15.385 sobre zonas de fronteras y zonas de seguridad. Ahí ya se advierte que las zonas fronterizas del país y las que rodean a ciertos establecimientos del interior son factores fundamentales de la defensa nacional, circunstancia que impone establecer que en las decisiones gubernativas que a su respecto se adopten deberán tener primacía los intereses de la referida defensa sobre todos los demás, cualquiera fuere su naturaleza.

Es responsabilidad de este Congreso cuidar que en materia de adquisición de tierras no haya operaciones especulativas y tampoco que haya operaciones de lavado de dinero. ¿Cómo no vamos a tener la facultad de preguntar a quienes vienen a invertir cuál es el origen de los fondos? Yo no quiero que mi país sea libremente adquirido por los narco traficantes mexicanos. De modo que estoy segura de que eso forma parte de la protección de la soberanía nacional.

Finalmente, está el tema de la titularidad del pueblo argentino. Sí, efectivamente, el artículo 20 de la Constitución Nacional establece que los extranjeros gozan de todos los derechos civiles del ciudadano y que pueden poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos pero, como todos los derechos que garantiza la Constitución, esos derechos lo son conforme a las leyes que garantizan. Esta limitación que estamos estableciendo, esta distinción entre nacionales y extranjeros tiene que ser razonable. Ese es el requisito que



ha dado la Corte: la razonabilidad y la proporcionalidad. Sería una norma inconstitucional si nosotros decimos que no pueden comprar los ciudadanos de determinado país, raza o religión, pero la distinción entre nacionales y extranjeros es absolutamente razonable.

Si hay un país en el mundo que no es xenóforo, es la Argentina. La ley migratoria argentina, esa a la que se refirió el senador Giustiniani, es ejemplo en el mundo. Y en un momento en el que Europa se defiende con la directiva de retorno, la Argentina, al amparo de esa ley, regularizó 900 mil ciudadanos. De modo que no me cabe la menor duda de la razonabilidad de esta norma. Sí tengo problemas técnicos con tres artículos que paso a detallar.

El artículo 8°, que verdaderamente desconoce las distintas realidades de las provincias, y por eso hubiera sido muy bueno un debate más abierto y con más tiempo acá. El artículo 10, en cuanto cierra totalmente la posibilidad a ciudadanos extranjeros o a empresas extranjeras de adquirir tierras que atraviesen cursos de agua o que estén próximos a cursos de agua, porque me parece que la prohibición absoluta es ya una limitación total al derecho. Una cosa es reglamentar el derecho y otra cosa es prohibirlo absolutamente. Eso es un agregado de la Cámara de Diputados, porque no estaba en el proyecto original. Y, finalmente, el artículo 18, que es otro agregado de la Cámara de Diputados, que establece que se aplica a partir de la vigencia de esta ley. Por lo tanto, por un tiempo que no sabemos cuánto será, tal vez un año, no va a haber un escribano que autorice una compra-venta de ninguna tierra porque tendrá que pedir la autorización a esta nueva autoridad de aplicación y este registro todavía no tendrá la información, de modo que cómo va a poder dar la autorización si todavía no sabe si estamos o no estamos dentro del límite.

Me parece que es muy rígido, y no estaba en el proyecto original. Y me parece, también, que la situación de la Argentina no es tan grave ni estamos ya cerca del límite del 15 por ciento que justifique el detener cualquier posibilidad de inversión. Lo digo desde una provincia que necesita desarrollarse y que necesita que verdaderamente vengan inversiones. Creo que este tema no es de competencia provincial. No estamos regulando recursos naturales. Decir que

la tierra es un recurso no renovable no es en el sentido de los recursos naturales que regula el artículo 124 de la Constitución y que son provinciales. La tierra no es renovable porque no se pueden fabricar más hectáreas; entonces, nos estamos refiriendo al dominio. Es un tema del Código Civil, facultad privativa del Congreso de la Nación, artículo 75, inciso 12.

Pero hay facultades de las provincias que reconoce el Código Civil. En el artículo 2.326, cuando habla de las cosas divisibles, establece en su última parte que las autoridades locales podrán reglamentar en materia de inmuebles la superficie mínima de la unidad económica. Y me parece que sobre la base de esta disposición del Código Civil debería darse a las provincias la facultad de determinar cuál es el límite en cada municipio, en cada departamento, porque nadie más que la provincia sabe cuál será el grado de superficie atractiva para que vayan a generar allí inversiones. No es, entonces, una norma de recursos naturales.

El senador Romero ya se refirió al derecho comparado, y es interesante ver que son los países agroexportadores los que están empezando a establecer algunas restricciones. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1978, fue establecido a nivel federal un sistema nacional para la colección de información correspondiente. En consecuencia, hay muy buena información sobre la cantidad de tierras en manos extranjeras y, por ello, hay algunos estados que empiezan a restringir. Por ejemplo, Iowa lo prohíbe absolutamente, y Missouri establece que si un residente de los Estados Unidos pierde el estatus de residente, tiene dos años para desprenderse de la propiedad de la tierra.

Asimismo, el Comité de Agricultura del Senado de Australia recomendó realizar una auditoría, para establecer la extensión de propiedades de extranjeros en tierras destinadas a la agricultura y pastoreo comercial y las propiedades sobre el agua. Si hay un país preocupado por el tema del agua, ése es Australia, donde la naturaleza no ha sido tan generosa como con la Argentina.

Es interesante el caso de México. La Constitución mexicana establece que sólo los mexicanos, por nacimiento o por naturalización, y las sociedades mexicanas tienen derecho a adquirir el dominio de las tierras. Pero dispone



que el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se requiere a aquéllos. Es decir que se plantea una cuestión de soberanía del tipo “no me vengan a reclamar que tengo que hacer o no hacer algo porque hay que proteger la inversión extranjera”.

Considero que teniendo en cuenta este tema se incorporó el artículo 11 al proyecto en tratamiento, que dice: “A los fines de esta ley y atendiendo a los tratados bilaterales de inversión (TBI) suscritos por la República Argentina y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta al país receptor”. O sea que no es en el sentido del artículo 124 de la Constitución, relacionado con los recursos naturales de las provincias, sino en el de no considerarlo como inversión para que no vengan los Estados de los que son nacionales los titulares de dominio a exigirnos tomar determinadas medidas de protección de sus inversiones.

A la FAO le preocupa el tema de la autosuficiencia alimentaria, pero ésa no es una problemática de la Argentina. Por ejemplo, África podría tener la preocupación de que vayan empresas u otros países a comprar tierras y que eso genere la posibilidad de que los nacionales se queden sin la seguridad alimentaria. Ésa no es la situación de la Argentina, ya que es una potencia mundial agrícola y agroexportadora. Nuestro país produce alimentos para 10 veces la población, y aun podría expandir esos niveles de producción. Los productos de origen agropecuario, cultivados y criados en campos de propiedad de extranjeros, son alimentos producidos en la Argentina con mano de obra argentina, que generan riqueza argentina y que se exportan por puertos argentinos. En consecuencia, la propiedad extranjera de la tierra no puede afectar negativamente *per se* la producción de alimentos y los ingresos del fisco.

Sin embargo, legislar sobre la propiedad extranjera de la tierra es imprescindible. Las causas no deben encontrarse en la insostenibilidad de la sustracción de tierras productoras

de alimentos sino, más bien, en fines propios de un país como el nuestro, que son compartidos por los otros países federales a los que nos referíamos. Habrá que ver qué cantidad de tierras permitiremos adquirir a los extranjeros, cuál será la regulación del ordenamiento territorial –distintas regiones, distintas superficies–, el control sobre la concentración de la tierra y la preservación de las producciones típicas en ciertas áreas. Pero como ya se dijo, éste es uno de los temas. Son muchas las asignaturas pendientes relacionadas con la tierra en la Argentina. Con este proyecto, sólo detendríamos la concentración de la tierra argentina, pero estaríamos “argentinizando” la concentración de la tierra si no hacemos algo más.

Haré una referencia respecto de la concentración de la tierra en la Argentina. En cuanto a las explotaciones agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario, en 1998 había 421 mil explotaciones agropecuarias; en 2002, bajan a 333 mil, y en 2008, a 276 mil. Es decir que cada Censo Nacional Agropecuario nos muestra que hay más hectáreas sembradas o con ganado pero cada vez menos explotaciones agropecuarias. De 170 millones de hectáreas agropecuarias que hay en la Argentina, 74 millones pertenecen a 4 mil propietarios; ése es el grado de concentración de la tierra que existe en la Argentina. Quiero decir que, en mi provincia, más del 30 por ciento de las propiedades no están mensuradas; o sea, se trata de títulos no mensurados. Y éste es un tema que hay que resolver porque está generando conflictos por la tierra.

Creo que el año próximo debemos resolver y proteger a un colectivo que quedó absolutamente desprotegido. La Constitución de 1994 dio fuerte protección a los pueblos indígenas; estamos trabajando en ello y hemos dictado la ley 26.160, prorrogada por la 26.554, y se están haciendo mensuras para determinar dónde están las tierras de ocupación tradicional de los indígenas. Ese plazo vence a fines de 2013 y después tendremos que ver aquí, en este Congreso, cómo se hará esa titulación. Pero hay algunas poblaciones criollas que quedaron absolutamente desprotegidas y que frente a este fenómeno de concentración de la riqueza van siendo expulsadas de los lugares donde vivían.

Por ello, quiero terminar con algunas preguntas que se hace la FAO y que también

deberíamos hacernos nosotros: ¿cuánto de la tierra que se concentra proviene de la agricultura campesina? ¿Cuál fue el destino de las poblaciones que antes habitaban los territorios donde ahora se materializa la extranjerización de la tierra? ¿Cómo contribuye la irregularidad de la tenencia de la tierra o la ausencia de títulos en el manejo de recursos?

**Sr. Presidente.** – La senadora Corradi de Beltrán le solicita una interrupción.

**Sra. Escudero.** – Voy a redondear esto y después le daré la interrupción.

**Sr. Presidente.** – Gracias.

**Sra. Escudero.** – Cuando la inversión extranjera es productiva enriquece a la provincia y genera trabajo. Por ello, yo quiero hacer un reconocimiento a las inversiones españolas en Anta; a la inversión norteamericana en Orán; a la inversión suiza en el departamento de Molinos y a la inversión italiana en el departamento de La Candelaria. O sea, aquí no se trata de ahuyentar la inversión sino que se trata de decir “vengan, pero queremos saber quiénes son, qué van a hacer y de qué modo van a contribuir al crecimiento de la Argentina”.

Le concedo a la señora senadora Corradi de Beltrán una breve interrupción y, después, voy a continuar hablando de los artículos en particular.

**Sra. Corradi de Beltrán.** – Quiero referirme a lo que dijo la senadora Escudero en cuanto a que aún nos faltan cosas por hacer. Ella ha mencionado la ley 26.160, con la que nosotros estamos posibilitando que se declare la emergencia en la posesión y propiedad de tierras. Pues bien, sobre esa ley se tendrían que haber hecho los relevamientos territoriales necesarios a efectos de regularizar la situación del dominio de las tierras para los pueblos originarios.

Pero no quiero dejar pasar esta sesión sin mencionar –porque la señora senadora Díaz también se ha referido a esto– algo que pasa en Santiago del Estero, mi provincia, donde el problema de la tierra es muy grave no solamente para los pueblos originarios sino también para los campesinos o criollos, como decía la senadora Escudero. Hace un mes atrás, hemos sido testigos de la muerte, mejor dicho, del asesinato, de Cristian Ferreyra, un campesino que venía luchando junto a los integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero para defender

sin armas sus tierras. Lamentablemente, no se trabajó sobre las soluciones que esperan estas personas. Se trata de tierras que les pertenecen desde hace 500 años. Eran de sus abuelos, de sus padres, de sus tatarabuelos y, sin embargo, ellos siguen sin resolver el problema del dominio.

Creo que ésta es una gran ley. Es la posibilidad de dar el paso inicial a efectos de la búsqueda de soluciones para quienes todavía siguen esperando resolver sus problemas con el dominio de las tierras. No quería pasar por alto esta mención y, en esta sesión, sin rendir un homenaje a la memoria de Cristian Ferreyra y al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que está esperando ansioso que nosotros trabajemos para solucionar el problema que tanto les preocupa.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Señor presidente: quiero referirme brevemente a los tres artículos que observé.

El artículo 8° me parece muy rígido con el tema del 15 por ciento, también, en cada municipio. Me parece que habría que dejarlo en 15 por ciento en cada provincia, y después cada provincia tendrá que discutir, conforme a las zonas en que necesite desarrollar, si puede flexibilizar ese 15 por ciento. De ser ciertas las publicaciones de algunos medios en mi provincia, ya ningún extranjero podría invertir. Porque de ser ciertas las cifras que se exponen, ya habríamos llegado al 15 por ciento. Por eso, me parece que es importante tener la información pero también flexibilizar ese 15 por ciento ya a nivel tan chico como municipios.

En segundo lugar, el artículo 10, en ese agregado que incorporó la Cámara de Diputados que prohíbe absolutamente a los extranjeros adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, hay que tener en cuenta lo que estamos prohibiendo. No se podrá invertir en actividades económicas ni productivas, cualquiera sea el origen de los fondos. No se podrán construir grandes puertos graneros, por ejemplo. No se podrán crear emprendimientos hoteleros en la Patagonia. No se podrán instalar establecimientos frutícolas orgánicos en zonas apartadas, por citar algunos ejemplos. Me parece que esto es un exceso.

El Mar Argentino es un cuerpo de agua de gran envergadura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ningún extranjero podrá comprar ni siquiera una hectárea en los 5.000 kilómetros de costas marítimas que tiene la Argentina? Creo que, en los cuerpos de agua, lo que se debe hacer es restringir y controlar. El Código Civil nos da la pauta. El artículo 2.340 dice que son bienes públicos los mares territoriales, los mares interiores, los ríos, sus cauces, las playas y los lagos navegables. Pero hay dos casos en que las aguas son susceptibles de apropiación privada.

El artículo 2.349 expresa que el uso y goce de los lagos que no son navegables pertenece a los propietarios ribereños. En ese caso, tal vez, se justifica la prohibición o la restricción. Y el artículo 2.350 señala que las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad pertenecen en propiedad, uso y goce al dueño de dicha heredad. Tal vez, en estos casos, sí se podría restringir, pero en el resto, las aguas son bienes públicos, de modo que no tiene mucho sentido esta restricción.

Finalmente, mediante el artículo 18, agregado también por la Cámara de Diputados, se impide cualquier tipo de adquisición, transferencia o cesión de derechos posesorios hasta tanto no se reglamente la ley por parte del Poder Ejecutivo. Es decir que hasta tanto no se cree el registro o no se realice el relevamiento catastral y no se determine cuál es la superficie que existe en cada provincia, no habrá un escribano que autorice una transferencia de dominio. Ante la perspectiva de dificultades que estamos viendo para el año que viene por la profundización de la crisis de Europa y en los Estados Unidos, creo que no parece que sea una buena idea establecer esta prohibición de esta forma y decir que, en la Argentina, ningún extranjero puede comprar nada.

De todos modos, veo que hay una salida frente a esta norma: los extranjeros que quieran adquirir tierras en la Argentina podrán utilizar el matrimonio o tener hijos y, entonces, tendrán las puertas abiertas.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: comparo con la señora senadora preopinante que este tema, tal vez, hubiera merecido que nos diéramos un poco más de tiempo de debate

y consultas. Pero, de todos modos, vamos a acompañar el texto propuesto en general y en particular –casi en su totalidad–, sin perjuicio de que vamos a plantear cuáles son los artículos en los que tenemos disidencias. Es un tema que tiene que ver con una concepción doctrinaria de la Unión Cívica Radical en cuanto a la tierra, a su tenencia y a proyectos que expresan esta concepción centenaria del radicalismo respecto del problema de la tierra en el país.

Hay varias iniciativas. El año pasado, la presidenta plantea el tema y envía el proyecto; y justamente un diputado de nuestra bancada es quien pide a gritos que se trate esta cuestión. Seguramente, el disenso en la Cámara de Diputados impidió el tratamiento de este asunto. Nosotros, desde nuestro partido, lamentamos que esto haya ocurrido así. En buena hora que consideremos este proyecto de ley, porque constituye un avance importante en la regulación de esta materia.

Estamos hablando de la tierra, presidente. Me parece que de a poco, en algunos temas, volvemos a conceptos ancestrales. Para las comunidades aborígenes, la tierra, en todo caso, pertenece a las anteriores, a las actuales y a las futuras generaciones. Este valor central que las comunidades le otorgan a la tierra fue la conceptualización que permitió, en la reforma del año 94, incluir la noción de la propiedad comunitaria de la tierra. De hecho, el concepto de la propiedad privada viene con la colonia.

Esta idea de la tierra es la que de a poco también va generando un cambio en la concepción universal, antropocéntrica hasta hace algunas décadas: el hombre, sujeto de derecho. En los últimos años, los recursos naturales, el medio ambiente y la tierra dejan de ser objeto de derecho para ser sujeto de derecho. No es casual, entonces, que se profundicen en los últimos veinte años, especialmente, los debates sobre el medio ambiente y sobre los recursos naturales.

Creo que este tema que tratamos tiene que ver con conceptos mucho más amplios. Estamos abordando una parte del problema y uno de los aspectos que, seguramente, tendremos que encarar como Estado. Esta cuestión tiene que ver, primero, con un proceso de concentración de la tenencia de la tierra. El senador Giustiniani y la senadora Escudero han sido claros explicitando

algunos ejemplos del proceso de concentración de la tierra. Agrego algunos datos.

Según los censos que se efectuaron en 1988 y en 2002, se han reducido 63 mil explotaciones agropecuarias de hasta 100 hectáreas; han dejado de existir 20 mil explotaciones de 100 a 500 hectáreas en ese período; hasta 500 hectáreas, las explotaciones agropecuarias que dejaron de existir están en el orden de las 5.700.000 hectáreas. En este proceso de concentración, el 10 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene el 78 por ciento de la tierra y el 60 por ciento de las pequeñas explotaciones llegan a tener el 5 por ciento de la tierra. Es un proceso que tiene que ver con que el pequeño productor se empobrece y las grandes corporaciones van avanzando, no sólo con el avance de la frontera agropecuaria, por los grandes cambios tecnológicos que se dieron, inclusive a fines de la década del 90.

Como decía la presidenta –yo no sé si lo hacía peyorativamente o no–, la soja es un yuyo porque crece en cualquier parte dada la fortaleza biotecnológica que se ha generado. También está la caña de azúcar. No quiero avanzar sobre otras provincias, pero en Tucumán, como en mi provincia, donde la producción de la caña de azúcar da fortaleza a nuestras economías, el cultivo ha avanzado mucho. De hecho, en Tucumán, por ejemplo, se está plantando caña hasta en el cerro. Es decir, la fortaleza biotecnológica está ampliando la frontera productiva y esto está generando todo un proceso de cambio constante y permanente en las economías, que ocasiona esta situación: van cayendo los pequeños productores en manos de las grandes concentraciones.

En mi provincia, por ejemplo, en los últimos 25 años, de 1.500 productores tabacaleros que había nos quedan cerca de 600. Está acá el senador Walter Barrionuevo, quien acaba de ser gobernador y sabe bien que inclusive por ahí variamos de 50 a 100 productores más, dependiendo del Fondo Especial del Tabaco, porque si no da el precio deben ir a producir otra cosa.

Tenemos un esquema en nuestra provincia, como hay en muchas otras, particularmente en las del Norte, donde obviamente no hay grandes extensiones de tierra, y el tabaco, la caña de azúcar, las frutas, el algodón y las hortalizas son la fuente central de nuestra producción.

Entonces esto tiene que ver con una serie de problemas que hay que abordar. Y no es un reclamo. Porque por ahí es la contestación que recibe la senadora Escudero como si fuera un cuestionamiento al gobierno. No, son desafíos que tenemos como sociedad argentina. Es el tema de profundizar medidas para las pymes. Y en la medida en que no fortalezcamos políticas para estas empresas, obviamente el pequeño productor se va empobreciendo, porque de acuerdo con los relevamientos que hay en materia de mano de obra, dos tercios de los trabajadores de los emprendimientos que tienen hasta cinco empleados trabajadores están en negro. Y obviamente las pymes no pueden competir porque tienen que pagar los sueldos del convenio colectivo que paga la gran empresa.

Entonces, en la medida en que no avancemos todo este proceso económico va generando una concentración de la tierra. Y de ese proceso de concentración viene la cuestión de la extranjerización, que es uno de los temas.

En este empobrecimiento del pequeño productor juegan la cuestión del endeudamiento, las estrategias de los grandes capitales, la elevada presión tributaria y la falta de políticas para las pymes, entre otros problemas.

Es muy bueno que el Congreso de la Nación dé el debate para regular el tema de la extranjerización de las tierras.

Quiero compartir el análisis que han hecho Rubén Giustiniani y Sonia Escudero en cuanto a que no hay colisión con nuestra Constitución. Es como el debate que dimos con relación a bosques y a glaciares. Estamos en el marco del artículo 41 de la Constitución en lo que hace a la extranjerización de las tierras, por cuanto es una materia que hay que regular, y respecto de los recursos naturales en la medida en que establezcamos los presupuestos mínimos.

Y se trata de esto. No sólo estamos estableciendo presupuestos mínimos. Me remito al análisis del artículo 11 que acaba de hacer la senadora Escudero. Tiene que ver con inversiones inherentes a la producción.

El tema es que no tenemos información. La creación del registro tiene que ver con que todavía no contamos con datos ciertos acerca de la cantidad de tierras.



Viendo el debate en Diputados y toda la información que nos llega, va del 3,5 por ciento de la cantidad de tierras a más del 10 por ciento, o llegando casi al 12 por ciento. No hay un registro nacional que ordene la información de todas las provincias y la sistematice para que pueda haber política nacional en esta materia, como la tienen, como acá se ha dicho, todos los países del mundo.

Desde el año 1962 Naciones Unidas, en la resolución 1.803, declara que el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre las riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado. La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de capital extranjero para efectuarlos deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente regulen y establezcan.

Toda la normativa internacional y los convenios que ha planteado la miembro informante por el Frente para la Victoria, que seguramente se van a agregar y forman parte de los antecedentes de este debate, dan cuenta de la necesidad de que sancionemos una ley en estas condiciones.

Ésta es una materia. Hay otras que tienen que ver con situaciones que se dan con argentinos.

En el caso de mi provincia, la quebrada de Humahuaca ha sido declarada patrimonio de la humanidad. Y se daba una situación en la cual nosotros tuvimos que acordar, durante la gestión del ex gobernador Barrionuevo, y trabajar juntamente con el justicialismo de la provincia para parar el trámite de usucapión, el trámite de la prescripción adquisitiva. Como obviamente desde Jujuy no podíamos tocar el Código, paramos los trámites, porque acá hay muchos vivos que manejan información calificada y presentan trámites de prescripción adquisitiva para después venderles a extranjeros tierras de la quebrada de Humahuaca, por ejemplo. Sancionamos una ley provincial para parar los trámites en inmuebles de la provincia, los paramos seis meses; después sancionamos una prórroga de seis meses más; estuvimos un año y medio parando esos trámites hasta que la provincia se ordenó y, como se dice, “pisó la pelota” y empezó a ver de qué se trataba,

quiénes eran las personas y cuál era el objeto de este tipo de transacciones que se podían dar en la quebrada de Humahuaca. Es decir, la ausencia de normativa, la ausencia de política nos lleva a una situación en donde todas estas supuestas inversiones terminan siendo en perjuicio para los intereses del país, no estando en función de la preservación de los recursos naturales.

Éstos son los conceptos, señor presidente, que a nosotros nos llevan a votar a favor de esta ley, con los cambios que en particular vamos a plantear.

En particular, señor presidente, en el artículo 1º nosotros queremos agregar lo siguiente: “Debe ser observada según las respectivas jurisdicciones, por las autoridades del gobierno federal, provincial y municipal, y se aplicará a todas las personas físicas y jurídicas que, por sí o por interpósita persona, posean [y agregamos “o adquieran” en el texto de nuestra modificación] tierras rurales, sea para usos o producciones agropecuarias, forestales, turísticas mineras, hidrocarburíferas u otros usos”. Agregamos “mineras” e “hidrocarburíferas” expresamente porque también tiene que ver con la inclusión de estos recursos en el registro, de forma tal que, a partir de esta ley, también formen parte de una política pública del Estado.

En cuanto al artículo 3º, le dejé el texto al secretario, con lo cual voy al tema más importante que modificamos. Es algo que ha planteado el senador Cimadevilla y que vamos a tener que modificar. Parece que acá ha habido un error, porque en el texto de la media sanción, en el inciso b), dice: “Personas jurídicas, según el marco previsto en el artículo 32 del Código Civil, constituidas conforme las leyes societarias de la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en proporción superior al cincuenta y uno por ciento (51%), o en proporción necesaria para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, sea de titularidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera...”. ¿Más de un 51 por ciento para qué, si ya el 51 por ciento es control? Los extranjeros van a comprar hasta el 51 por ciento. Entonces, van a venir los extranjeros, van a comprar hasta el 51 por ciento y ya van a tener el control de la tierra, quedando, vía esta norma, vía esta restricción, afuera del ojo de control que establece la ley.

Por lo tanto, el porcentaje tiene que ser el 49 por ciento, es decir, en la medida en que tengan más del 49 por ciento, porque un porcentaje menor supone que no hay control societario. Entonces, cuidado con este tema, porque por esta vía, en este capítulo, en este inciso, los capitales extranjeros pueden quedar afuera no sólo del registro sino también de la revisión de una política pública de Estado. Esta observación que planteó nuestro miembro informante tiene que ver con esto y nosotros la vamos a sostener en la redacción en particular.

Luego, compartimos, obviamente, el artículo 10, en el último párrafo que agregó Diputados, con relación a las prohibiciones.

En cuanto al artículo 18, también nosotros realmente compartimos su inclusión y creemos que es un gran acierto haber creado el Registro Nacional y el Consejo Interministerial. Desde nuestro punto de vista, hubiera sido bueno que este Consejo Interministerial también tuviera funciones interjurisdiccionales, de modo tal de involucrar a las jurisdicciones provinciales en el marco de una política nacional, sin avanzar en las competencias que le son propias y que establece la Constitución Nacional.

Yo he dejado el borrador. Después, cuando vayamos tratando en particular, vamos a ir diciendo en qué artículos tenemos observaciones, pero adelantamos nuestro voto a favor de este proyecto de ley, con los cambios que vamos a sugerir.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Irrazábal.

**Sr. Irrazábal.** – Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los compañeros y compañeras de mi bloque, en la persona de su presidente, que me ceden la posibilidad, como novel senador y en mi segunda sesión, a modo de cierre de este debate, de poder sentar la postura final del bloque del Frente para la Victoria.

Quiero además, como integrante de este bloque, dejar bien en claro que es una satisfacción y un orgullo llegar a sancionar esta ley, que pone límites a un fenómeno de extranjerización de la tierra en la República Argentina, que nos preocupaba a muchos –o a la mayoría de los argentinos–, y que lógicamente iba relacionado con un fenómeno de concentración económica

y productiva que tampoco es beneficioso para el pueblo argentino.

Si entendemos al Estado como aquella centralidad política en donde el ejercicio del poder va orientado al bien común o al interés general, creemos que esta ley es fundamental en la recuperación de capacidades soberanas del Estado. Sobre todo, en cuestiones que hacen a la soberanía nacional, entendida como tal y en abstracto, y a la soberanía alimentaria, en tiempos en donde, en el mundo, este tema tiene capital importancia, toda vez que la expansión del capital financiero, que busca ganancias o rentabilidades extraordinarias, lo lleva muchas veces a trascender los territorios nacionales, y siempre lo hace sin tener en consideración la defensa de los intereses sociales o nacionales.

También en un tiempo en el que se hacen previsiones para el mundo y en el que por el crecimiento de la población, por el fenómeno de aridez de las tierras, por la escasez de tierras productivas, el hecho de tener tierras fértiles y tierras productivas pasa a ser una cuestión de vital importancia para los Estados y para los pueblos.

En este tiempo de recuperación de capacidades del Estado, esta recuperación de capacidad soberana es muy importante.

Recuperación de capacidad de un Estado que, quiero recordar, vino siendo durante muchos años en la Argentina cooptado, sitiado y desguzado para inhabilitarlo definitivamente en su rol de defensa o resguardo de los intereses nacionales y de los intereses sociales.

Quiero también recordar que desde la recuperación democrática en el año 1983, el pueblo argentino vino votando en el mismo sentido. Vino votando, más allá de las fuerzas políticas, de los partidos políticos y de los candidatos, en el sentido de que se vaya conformando en esta etapa de la historia un orden socioeconómico que le permitiera vivir con dignidad, a partir de su trabajo.

Más allá de las contradicciones y de las cuestiones paradójales de la política y de la historia, pasó mucho tiempo para que nuevamente, en un punto de saturación de ese pueblo argentino, se ponga en marcha un proyecto político que recupere esa posibilidad de instalar en la Argentina un proyecto nacional y popular que

vaya rodando, integrando y convocando a todos los argentinos para la defensa de sus intereses, y fundamentalmente para la defensa del interés nacional.

En ese camino, la recuperación del Estado es muy importante, y también la recuperación de todas las capacidades del Estado. Porque un Estado capaz de satisfacer el objetivo del bienestar general y del bien común es el Estado que necesitamos para todos los gobiernos, que por mandato popular pasan transitoriamente en el ejercicio de la administración de la cosa pública.

Queremos decir nosotros, como Frente para la Victoria y como bloque mayoritario, en esta circunstancia de la historia, que nos vamos con la satisfacción de coincidir con la mayoría de los bloques políticos en la defensa de intereses nacionales y de intereses sociales, más allá de matices, de lógicas contradicciones y también de lógicos debates que se dan en el seno del Congreso de la Nación.

Es imprescindible estar a la altura de la historia, y sabemos que nuestro pueblo felizmente se ha vuelto exigente y pide gobiernos que, cambiando los parámetros de acumulación y distribución de la renta, contribuyan a una justa distribución de la riqueza nacional. Por eso apoya modelos nacionales y populares que resguarden el mercado interno, el fortalecimiento del trabajo y la reconstrucción de la industria nacional. Un Estado que garantice todo esto tiene que ser un Estado soberano y capacitado para poder tener elementales determinaciones sobre su propio territorio. Eso es lo que estamos contribuyendo a lograr con ésta y otras iniciativas en un año muy importante para el pueblo argentino porque se ha expresado soberanamente.

Estamos terminando este año en el Parlamento con la tranquilidad del deber cumplido, no solamente por parte de la fuerza política mayoritaria, sino también por todas las fuerzas políticas que están dando el debate de los temas en tratamiento. Nosotros, como fuerza política mayoritaria, sabemos que el mandato popular nos obliga a ser consecuentes con el proyecto político que fue legitimado en las urnas y a seguir el curso estratégico de estas políticas de Estado, y sabemos también que para eso necesitamos a todos los argentinos.

Por eso nuestra presidenta tiene claro que tiene la obligación, la responsabilidad, el compromiso y el orgullo de gobernar para los 40 millones de argentinos, y nosotros tenemos que acompañarla en ese intento. Éste es un Estado que recuperó su capacidad soberana, que recuperó todas sus capacidades para satisfacer los intereses sociales y resguardar el interés nacional, un Estado liberado de los grupos corporativos que lo condicionaron históricamente y de los intereses monopólicos que perniciosamente afectaron el marco económico-social de nuestro país. Éste es un Estado que necesitamos todos los argentinos y todas las fuerzas políticas que tienen vocación de gobernar al pueblo argentino.

Por eso, humildemente, sabiendo que con ésta y otras iniciativas vamos en ese camino, sometemos a consideración del cuerpo y pedimos acompañamiento para que sea realidad este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente.** – En primer lugar, corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobado. Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.

A continuación, corresponde autorizar las inserciones que fueron solicitadas por los diversos senadores.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

A continuación, se va a votar en general.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario (Estrada).** – Resultan 62 votos afirmativos y 1 negativo.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – Queda aprobado el proyecto en general.

En consideración en particular.

Si están de acuerdo, vamos a ir aprobando el proyecto por capítulos. Me parece que el mejor mecanismo sería que la senadora Escudero y los senadores Morales y Giustiniani señalen cuáles

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

son los artículos en los que quieren introducir modificaciones.

**Sra. Escudero.** – Nosotros, en el 10 y en el 18

**Sr. Presidente.** – O sea que serían el capítulo III y el V.

**Sr. Morales.** – Nosotros, en el artículo 1° con el texto que hemos enviado a Secretaría y en el artículo 3°. El texto trae otros artículos, pero reduciendo diferencias, en los artículos 1° y 3°.

**Sr. Presidente.** – Entonces, comencemos la votación en particular con el capítulo I, que tiene un solo artículo, el artículo 1°, dictamen de la mayoría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Resultan 51 votos afirmativos y 12 negativos.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – Resulta aprobado el capítulo I.

Se va a votar el capítulo II, que consta de un solo artículo, en el cual no hay divergencias, y los artículos 4° a 13, menos el 10.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 61 votos por la afirmativa y 2 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>2</sup>

**Sr. Presidente.** – Aprobados el capítulo II, y los artículos 4° a 13, menos el 10.

Ahora vamos a votar solamente el artículo 3°, dictamen de la mayoría.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 51 votos por la afirmativa y 12 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>3</sup>

**Sr. Presidente.** – Queda aprobado.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** – Corresponde votar en particular el artículo 10 del dictamen de la mayoría.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 57 votos por la afirmativa y 6 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.

**Sr. Presidente.** – En consideración los artículos 14 y 15, que componen el capítulo IV.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 61 votos por la afirmativa, 2 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>4</sup>

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Corresponde votar juntos los artículos 16 y 17 del dictamen de la mayoría.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 61 votos por la afirmativa y 2 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>5</sup>

**Sr. Presidente.** – Aprobados en particular los artículos 16 y 17 y ponemos en consideración en particular el artículo 18 del dictamen de la mayoría.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 56 votos por la afirmativa y 7 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>6</sup>

**Sr. Secretario** (Estrada). – El artículo 19 es de forma.

**Sr. Presidente.** – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.<sup>7</sup>

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.

4 Ver el Apéndice.

5 Ver el Apéndice.

6 Ver el Apéndice.

7 Ver el Apéndice.



**Sr. Martínez.** – Señor presidente: falta la votación del 4° al 9°.

**Sr. Pichetto.** – Senador Nikisch y senador Martínez, no quisiera que quedara esta duda abierta...

**Sr. Presidente.** – Yo los tengo incluidos dentro del capítulo III. Votamos el 3° y después dijimos todo el capítulo menos el 10. Ése fue el sistema.

**Sr. Pichetto.** – ¿Está saldada la duda?

**Varios señores senadores.** – Sí.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Mayans.

**Sr. Mayans.** – Es para desearle feliz Navidad, señor presidente.

**Sr. Presidente.** – ¿Sólo a mí?

**Sr. Mayans.** – A usted y a todos los senadores.

**Sr. Presidente.** – Damos por concluida esta sesión extraordinaria, agradecemos y deseamos feliz fin de año y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. (*Aplausos*).

–Son las 16 y 07.

JORGE A. BRAVO.  
Director General de Taquígrafos.

## 4

### APÉNDICE

#### I

### ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

**Nota:** En cada caso se incluyen, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiera– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.

#### 1

#### Orden del Día N° 852

#### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados C.D.-85/11, por el cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2011.

*Liliana B. Fellner. – Ana M. Corradi de Beltrán. – María R. Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Marcelo J. Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz Rojkés de Alperovich.*

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que pasó en revisión al Honorable Senado.

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

PAPEL DE PASTA CELULOSA PARA DIARIO.  
DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO.  
CONTROL PARLAMENTARIO Y MARCO  
REGULATORIO

#### CAPÍTULO I

#### *Interés público*

Artículo 1° – Decláranse de interés público la fabricación, la comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.

#### CAPÍTULO II

#### *Control parlamentario*

Art. 2° – Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios, que tendrá el

Francisco Edelmann, DNI 16.580.453; don Daniel José Gil, DNI 16.564.962; don Jorge Alcides Raggio, DNI 14.440.487.

#### *Escalafón general*

Don Rubén de Lourdes Fedinich, DNI 16.684.924; don Claudio Daniel Salaberry, DNI 14.494.313; don Salvador Valentino, DNI 14.095.126; don Javier Luis Fernández Busto, DNI 16.089.859; don Leonardo Sergio Barbieri, DNI 16.768.505; don Carlos Alberto Fasolis, DNI 14.954.082; don Carlos Alberto Chanda, DNI 16.401.117; don Roberto Claudio González, DNI 16.743.112; don Rolando Alberto Wissler, DNI 16.310.547; don Horacio Antonio Paris, DNI 16.197.993; don Rubén Darío Paesano, DNI 16.135.670; don Luis Eduardo Bravo, DNI 16.507.548; don Héctor Eduardo Biasutti, DNI 14.154.640; don Enrique Oscar Videla, DNI 16.226.129; don Ernesto Claudio Celiz, DNI 16.083.114; don Santiago Domingo Ramero, DNI 16.120.017; don Luis Andrés Pereyra, DNI 14.672.582; don Horacio Carlos Ghiosi, DNI 16.325.560; don Eduardo David Capelli, DNI 16.246.137; don Jorge Dante Medina, DNI 14.542.168; don Marcelo Luis Biasutto, DNI 14.876.829; don Daniel Horacio Altamirano, DNI 13.668.327; don Carlos Alberto Sorol, DNI 14.469.292.

#### *Escalafón técnico*

Don Julio Eduardo Ayup, DNI 16.529.920; don Pablo Humberto Carusillo, DNI 16.741.328.

#### *Cuerpo comando "D"*

#### *Escalafón general*

Don Luis Enrique Peña, DNI 13.533.334; don Daniel Gustavo Riccobaldi, DNI 13.163.476; don José Orlando Prado, DNI 14.177.234; don Horacio Adolfo Turco, DNI 12.366.126; don Carlos José Rafael, DNI 13.388.349; don Rodolfo Almeida, DNI 12.264.744.

#### *Cuerpo de los servicios profesionales*

#### *Escalafón de contabilidad*

Don Rubén Héctor Pecorari, DNI 14.132.237; don Jorge Osmar Rivero, DNI 13.967.918; don Luis Roberto Cortez, DNI 12.241.941; don Néstor Edgardo Maidana, LE 14.035.039; don Héctor Osvaldo Viano, DNI 14.145.801.

#### *Escalafón infraestructura*

Don Jorge Antonio Recalt, DNI 10.121.158; don Tito Oscar Graf, DNI 11.599.073.

#### *Escalafón medicina*

Don Horacio Marcelo Hunicken, DNI 11.187.161; don Horacio Daniel Ahets Etcheberry, DNI 13.851.629; don Edgardo Laghi Celeri, DNI 12.497.296; don César Marcelo Antonio Dominella, DNI 13.822.455; don Eduardo José Herreros, DNI 12.509.806; don Eduardo

Aníbal Lilla, DNI 10.433.372; don Eduardo José Funes, DNI 12.872.828; don Juan Norberto Domínguez, DNI 12.272.663.

#### *Escalafón jurídico*

Don José Luis Vigil, LE 10.951.756.

#### *Escalafón de bioquímica*

Don Daniel Oscar Barriola, DNI 11.804.061; don Ricardo Daniel Vadala, DNI 11.976.092; doña Adriana Edith Vázquez, DNI 11.333.820.

#### *Escalafón ingeniería*

Don Oscar César Martínez Lager, DNI 10.446.279; don Néstor Andrés Pia Cano, DNI 13.204.502; doña Alicia Avelina Matilde Sedeño, DNI 11.960.346; don Carlos Alberto Capella, DNI 11.633.137; don Luis Alberto Gómez, DNI 12.317.850; don Jorge Néstor Leiva, DNI 12.667.013; don Miguel Ángel Melotta, DNI 11.172.202; don Francisco Eduardo Saccinto, LE 10.046.449.

#### *Escalafón odontología*

Don Adrián Jorge Oule, DNI 12.900.082.

#### *Escalafón meteorología*

Don Eduardo Alberto Viotti, LE 4.427.320.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 242 de fecha de diciembre de 2011.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los veintidos días del mes de diciembre del año dos mil once.

AMADO BOUDOU.

Juan Estrada.

5

### **Orden del Día N° 920**

### **Dictamen de comisión**

#### *Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha considerado el proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-90/11), creando el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2011.

María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de Mathó. – Rolando A. Bermejo. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner. –

*Juan M. Irrazábal. – Sandra D. Giménez.  
– María E. Labado. – Roxana I. Latorre.  
– Nanci M. A. Parrili.*

En disidencia parcial:

*Jaime Linares.*

### **Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación**

(15 de diciembre de 2011)

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

### **RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES**

#### CAPÍTULO I

#### *Ámbito territorial y personal de aplicación de la ley*

Artículo 1º – La presente ley rige en todo el territorio de la Nación Argentina, con carácter de orden público.

Debe ser observada según las respectivas jurisdicciones, por las autoridades del gobierno federal, provincial y municipal, y se aplicará a todas las personas físicas y jurídicas que, por sí o por interpósita persona, posean tierras rurales, sea para usos o producciones agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos.

A los efectos de la presente ley se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino.

#### CAPÍTULO II

#### *Objeto*

Art. 2º – Configura el objeto de la presente ley:

- a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley;
- b) Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción.

#### CAPÍTULO III

#### *De los límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales*

Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se entenderá como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea

la forma, denominación que le impongan las partes y extensión temporal de los mismos, a favor de:

- a) Personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación Argentina, con las excepciones establecidas en el artículo 4º de la presente ley;
- b) Personas jurídicas, según el marco previsto en el artículo 32 del Código Civil, constituidas conforme las leyes societarias de la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en proporción superior al cincuenta y uno por ciento (51 %), o en proporción necesaria para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, sea de titularidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, en las condiciones descriptas en el inciso precedente. Toda modificación del paquete accionario, por instrumento público o privado, deberá ser comunicada por la persona jurídica al Registro Nacional de Tierras Rurales, dentro del plazo de treinta (30) días de producido el acto a efectos del contralor del cumplimiento de las disposiciones de la ley. Asimismo quedan incluidas en este precepto:

1. Las personas jurídicas, cualquiera sea su tipicidad social, que se encuentren en posición de controladas por cualquier forma societaria o cooperativa extranjera, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley, en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25 %), o tengan los votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.
2. Aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que sin acreditar formalmente calidad de socios actúan en una sociedad como si lo fueren.
3. Las sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures y ello permita a su legítimo tenedor acrecer en sus tenencias accionarias o convertirlas en acciones en un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25 %), o que se les permita formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, y se trate de personas físicas o jurídicas extranjeras, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley.
4. Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las formas previstas en las leyes vigentes, en virtud de un contrato de fideicomiso y cuyos beneficiarios sean personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en el inciso anterior.
5. Las sociedades de participación accidental, las agrupaciones de colaboración y las

uniones transitorias de empresas, según la regulación de la Ley de Sociedades, y toda otra forma de colaboración empresarial de carácter accidental y provisorio que se regule en el futuro, cuando en ellas participen personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en esta ley;

- c) Personas jurídicas de derecho público de nacionalidad extranjera;
- d) Simples asociaciones en los términos del artículo 46 del Código Civil o sociedades de hecho, en iguales condiciones respecto de su capital social, a las previstas en el inciso b) de este artículo.

Art. 4º – Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente ley las siguientes personas físicas de nacionalidad extranjera:

- a) Aquellas que cuenten con diez (10) años de residencia continua, permanente y comprobada en el país;
- b) Los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco (5) años;
- c) Aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a argentino/a con cinco (5) años de anterioridad a la constitución o transmisión de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el país por igual término.

Art. 5º – La reglamentación determinará los requisitos que deberán observar las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, quedando a cargo de la autoridad de aplicación su control y ejecución.

Art. 6º – Queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta.

Art. 7º – Todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo establecido en la presente ley serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. A los efectos de esta disposición se considerarán partícipes quienes hicieran entrega de las tierras u otorgaren instrumentos, públicos o privados, que conformaren el obrar antijurídico, los que responderán en forma personal y solidaria con su patrimonio por las consecuencias dañosas de estos actos. La autoridad de aplicación está facultada a examinar los actos jurídicos conforme su naturaleza real, sin sujetarse al nombre que le impongan las partes otorgantes.

Art. 8º – Se establece en el quince por ciento (15 %) el límite a toda titularidad de dominio o posesión de

tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural.

Art. 9º – En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30 %) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales.

Art. 10. – Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo o superficie equivalente, según la ubicación territorial. Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes parámetros:

- a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren;
- b) La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación.

La autoridad de aplicación, a los efectos del otorgamiento del certificado de habilitación, deberá controlar la cantidad de tierras rurales que posea o sea titular la persona adquirente.

Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas en el artículo 3º de la presente ley:

1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
2. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera con las excepciones y procedimientos establecidos por el decreto ley 15.385/44, modificado por la ley 23.554.

Art. 11. – A los fines de esta ley y atendiendo a los tratados bilaterales de inversión (TBI) suscriptos por la República Argentina y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país receptor.

Art. 12. – Los propietarios o poseedores de tierras rurales, personas físicas o jurídicas, que invistan la condición de extranjeros, deberán dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley, proceder a la denuncia ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, previsto por el artículo 14, de la existencia de dicha titularidad o posesión.

Art. 13. – Para la adquisición de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad por una persona comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior.



## CAPÍTULO IV

*Del Registro Nacional de Tierras Rurales*

Art. 14. – Créase el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que será la autoridad de aplicación con las siguientes funciones específicas:

- a) Llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera en los términos de la presente ley;
- b) Requerir a las dependencias provinciales competentes en registración, catastro y registro de personas jurídicas, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
- c) Expedir los certificados de habilitación de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales en los supuestos comprendidos por esta ley. Los certificados de habilitación serán regulados por la reglamentación de la presente ley y serán tramitados por el escribano público o autoridad judicial interviniente;
- d) Ejercer el control de cumplimiento de la presente ley, con legitimación activa para impedir en sede administrativa, o reclamar la nulidad en sede judicial, de los actos prohibidos por esta ley.

Art. 15. – Se dispone la realización de un relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que determine la propiedad y la posesión de las tierras rurales, conforme las disposiciones de la presente ley, el que se realizará dentro del término de ciento ochenta (180) días de la creación y puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales.

## CAPÍTULO V

*Del Consejo Interministerial de Tierras Rurales*

Art. 16. – Créase el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior, con los representantes de las provincias, el que tendrá las siguientes funciones:

- a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de la presente ley;
- b) Ejecutar la política nacional sobre tierras rurales;

- c) Recabar la colaboración de organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional y las provincias;
- d) Determinar la equivalencia de superficies del territorio nacional a que hace referencia el artículo 10 de la presente ley, sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados por los organismos oficiales competentes.

Art. 17. – La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación.

Art. 18. – *Cláusula transitoria:* Toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación y extensión temporal que le impongan las partes, a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras en los términos del artículo 3º, que se realice en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, queda alcanzada por las disposiciones de la presente ley y sujeta a las consecuencias previstas en el artículo 7º.

Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

Gervasio Bozzano.

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

## CAPÍTULO I

*Ámbito territorial y personal de aplicación de la ley*

Artículo 1º – La presente ley rige en todo el territorio de la Nación Argentina, con carácter de orden público.

Debe ser observada según las respectivas jurisdicciones, por las autoridades del gobierno federal, provincial y municipal, y se aplicará a todas las personas físicas y jurídicas que, por sí o por interpósita persona, posean tierras rurales, sea para usos o producciones agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos.

A los efectos de la presente ley se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino.

## CAPÍTULO II

*Objeto*

Art. 2º – Configura el objeto de la presente ley:

- a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley;

- b) Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción.

### CAPÍTULO III

#### *De los límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales*

Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se entenderá como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación que le impongan las partes y extensión temporal de los mismos, a favor de:

- a) Personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación Argentina, con las excepciones establecidas en el artículo 4° de la presente ley;
- b) Personas jurídicas, según el marco previsto en el artículo 32 del Código Civil, constituidas conforme las leyes societarias de la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en proporción superior al cincuenta y uno por ciento (51 %), o en proporción necesaria para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, sea de titularidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, en las condiciones descriptas en el inciso precedente. Toda modificación del paquete accionario, por instrumento público o privado, deberá ser comunicada por la persona jurídica al Registro Nacional de Tierras Rurales, dentro del plazo de treinta (30) días de producido el acto a efectos del contralor del cumplimiento de las disposiciones de la ley. Asimismo quedan incluidas en este precepto:

1. Las personas jurídicas, cualquiera sea su tipicidad social, que se encuentren en posición de controladas por cualquier forma societaria o cooperativa extranjera, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley, en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25 %), o tengan los votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.
2. Aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que sin acreditar formalmente calidad de socios actúan en una sociedad como si lo fueren.
3. Las sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures y ello permita a su legítimo tenedor acrecer en sus tenencias accionarias o convertirlas en acciones en un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25 %), o que se

les permita formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, y se trate de personas físicas o jurídicas extranjeras, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley.

4. Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las formas previstas en las leyes vigentes, en virtud de un contrato de fideicomiso y cuyos beneficiarios sean personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en el inciso anterior.
5. Las sociedades de participación accidental, las agrupaciones de colaboración y las uniones transitorias de empresas, según la regulación de la Ley de Sociedades, y toda otra forma de colaboración empresarial de carácter accidental y provisorio que se regule en el futuro, cuando en ellas participen personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en esta ley;
- c) Personas jurídicas de derecho público de nacionalidad extranjera;
- d) Simples asociaciones en los términos del artículo 46 del Código Civil o sociedades de hecho, en iguales condiciones respecto de su capital social, a las previstas en el inciso b) de este artículo.

Art. 4° – Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente ley las siguientes personas físicas de nacionalidad extranjera:

- a) Aquellas que cuenten con diez (10) años de residencia continua, permanente y comprobada en el país;
- b) Los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco (5) años;
- c) Aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a argentino/a con cinco (5) años de anterioridad a la constitución o transmisión de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el país por igual término.

Art. 5° – La reglamentación determinará los requisitos que deberán observar las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, quedando a cargo de la autoridad de aplicación su control y ejecución.

Art. 6° – Queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta.

Art. 7º – Todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo establecido en la presente ley serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. A los efectos de esta disposición se considerarán partícipes quienes hicieran entrega de las tierras u otorgaren instrumentos, públicos o privados, que conformaren el obrar antijurídico, los que responderán en forma personal y solidaria con su patrimonio por las consecuencias dañosas de estos actos. La autoridad de aplicación está facultada a examinar los actos jurídicos conforme su naturaleza real, sin sujetarse al nombre que le impongan las partes otorgantes.

Art. 8º – Se establece en el quince por ciento (15 %) el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural.

Art. 9º – En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30 %) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales.

Art. 10. – Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo o superficie equivalente, según la ubicación territorial. Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes parámetros:

- a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren;
- b) La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación.

La autoridad de aplicación, a los efectos del otorgamiento del certificado de habilitación, deberá controlar la cantidad de tierras rurales que posea o sea titular la persona adquirente.

Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas en el artículo 3º de la presente ley:

1. Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
2. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera con las excepciones y procedimientos establecidos por el decreto ley 15.385/44, modificado por la ley 23.554.

Art. 11. – A los fines de esta ley y atendiendo a los tratados bilaterales de inversión (TBI) suscriptos por la República Argentina y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por

tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país receptor.

Art. 12. – Los propietarios o poseedores de tierras rurales, personas físicas o jurídicas, que invistan la condición de extranjeros, deberán dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley, proceder a la denuncia ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, previsto por el artículo 14, de la existencia de dicha titularidad o posesión.

Art. 13. – Para la adquisición de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad por una persona comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento previo del Ministerio del Interior.

#### CAPÍTULO IV

##### *Del Registro Nacional de Tierras Rurales*

Art. 14. – Créase el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que será la autoridad de aplicación con las siguientes funciones específicas:

- a) Llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera en los términos de la presente ley;
- b) Requerir a las dependencias provinciales competentes en registración, catastro y registro de personas jurídicas, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
- c) Expedir los certificados de habilitación de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales en los supuestos comprendidos por esta ley. Los certificados de habilitación serán regulados por la reglamentación de la presente ley y serán tramitados por el escribano público o autoridad judicial interviniente;
- d) Ejercer el control de cumplimiento de la presente ley, con legitimación activa para impedir en sede administrativa, o reclamar la nulidad en sede judicial, de los actos prohibidos por esta ley.

Art. 15. – Se dispone la realización de un relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que determine la propiedad y la posesión de las tierras rurales, conforme las disposiciones de la presente ley, el que se realizará dentro del término de ciento ochenta (180) días de la creación y puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales.

#### CAPÍTULO V

##### *Del Consejo Interministerial de Tierras Rurales*

Art. 16. – Créase el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y conformado por el

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior, con los representantes de las provincias, el que tendrá las siguientes funciones:

- a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de la presente ley;
- b) Ejecutar la política nacional sobre tierras rurales;
- c) Recabar la colaboración de organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional y las provincias;
- d) Determinar la equivalencia de superficies del territorio nacional a que hace referencia el artículo 10 de la presente ley, sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados por los organismos oficiales competentes.

Art. 17. – La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación.

Art. 18. – *Cláusula transitoria:* Toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación y extensión temporal que le impongan las partes, a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras en los términos del artículo 3º, que se realice en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, queda alcanzada por las disposiciones de la presente ley y sujeta a las consecuencias previstas en el artículo 7º.

Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, a los veintidos días del mes de diciembre del año dos mil once.

Ley 26.737

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.  
*Gervasio Bozzano.*

AMADO BOUDOU.  
*Juan H. Estrada.*





*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Periodo Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

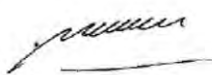
ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

#### VOTACIÓN EN GENERAL

Acta N°: 2	Fecha: 22-12-11	Hora: 22:09
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempeate: NO	

Presentes Identificados:	63	Votos afirmativos:	62
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	1
Total Presentes:	63	Abstenciones:	-
Ausentes:	9		
Votos Afirmativos Necesarios:	32	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



  
JUAN HECTOR ESTRADA  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



*Senado de la Nación*

### Votación Nominal

129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

#### VOTACIÓN EN GENERAL

Acta Nº: 2

Fecha: 22-12-11

Hora: 22:09

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempe: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AFIRMATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	AFIRMATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Anibal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE



*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

#### VOTACIÓN EN PARTICULAR Capítulo I – Artículo 1º

Acta N°: 3	Fecha: 22-12-11	Hora: 22:11
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	63	Votos afirmativos:	51
Presentes No Identificados:	--	Votos Negativos:	12
Total Presentes:	63	Abstenciones:	-
Ausentes:	9		
Votos Afirmativos Necesarios:	32	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



*Juan Hector Estrada*  
JUAN HECTOR ESTRADA  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



*Senado de la Nación*

### Votación Nominal

129º Periodo Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo I – Artículo 1º

Acta N°: 3

Fecha: 22-12-11

Hora: 22:11

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempeate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	NEGATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	NEGATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	NEGATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	NEGATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	NEGATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FERNANDEZ, Aníbal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE





*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo II – Artículo 2º, Capítulo III – Artículos 4º a 9º y 11º a 13º

Acta N°: 4	Fecha: 22-12-11	Hora: 22:12
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	63	Votos afirmativos:	61
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	2
Total Presentes:	63	Abstenciones:	-
Ausentes:	9		
Votos Afirmativos Necesarios:	32	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



*Juan Hector Estrada*  
JUAN HECTOR ESTRADA  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Periodo Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo II – Artículo 2º, Capítulo III – Artículos 4º a 9º y 11º a 13º

Acta Nº: 4 Fecha: 22-12-11 Hora: 22:12  
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo Mayoría Requenda: mas de la mitad de los presentes Miembros del Cuerpo: 72  
Presidente: BOUDOU, Amado Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AFIRMATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	AFIRMATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Anélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Aníbal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Ángel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUÍZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE



*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Periodo Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

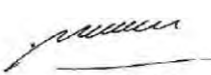
ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo III – Artículo 3º

Acta N°: 5	Fecha: 22-12-11	Hora: 22:12
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempe: NO	

Presentes Identificados:	63	Votos afirmativos:	51
Presentes No Identificados:	--	Votos Negativos:	12
Total Presentes:	63	Abstenciones:	-
Ausentes:	9		
Votos Afirmativos Necesarios:	32	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



  
JUAN HECTOR ESTRADA  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Periodo Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo III – Artículo 3º

Acta N°: 5

Fecha: 22-12-11

Hora: 22:12

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	NEGATIVO	LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	NEGATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	NEGATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	NEGATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	NEGATIVO
DÍAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSORIO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FERNANDEZ, Anibal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE





*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

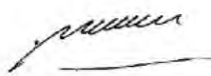
ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo III – Artículo 10º

Acta N°: 6	Fecha: 22-12-11	Hora: 22:13
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	63	Votos afirmativos:	57
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	6
Total Presentes:	63	Abstenciones:	-
Ausentes:	9		
Votos Afirmativos Necesarios:	32	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



  
JUAN HECTOR ESTRADA  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo III – Artículo 10º

Acta Nº: 6

Fecha: 22-12-11

Hora: 22:13

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AFIRMATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	AFIRMATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	NEGATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
DÍAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Aníbal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Ángel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	NEGATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luís Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE



*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES


ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo IV – Artículos 14º y 15º

Acta N°: 7	Fecha: 22-12-11	Hora: 22:14
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	63	Votos afirmativos:	61
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	2
Total Presentes:	63	Abstenciones:	-
Ausentes:	9		
Votos Afirmativos Necesarios:	32	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



  
JUAN HECTOR ESTRADA  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



*Senado de la Nación*

### Votación Nominal

129º Periodo Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo IV – Artículos 14º y 15º

Acta Nº: 7

Fecha: 22-12-11

Hora: 22:14

Tipo de Quórum: más de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: más de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AFIRMATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	AFIRMATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Anélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
DÍAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Anibal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Ángel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUÍZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE





*Senado de la Nación*

**Votación Nominal**

**129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión**

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

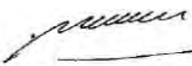
**ORDEN DEL DÍA 920**  
(CD-90/11)

**VOTACIÓN EN PARTICULAR**  
Capítulo V – Artículos 16º y 17º

Acta N°: 8	Fecha: 22-12-11	Hora: 22:15
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	63	Votos afirmativos:	61
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	2
Total Presentes:	63	Abstenciones:	-
Ausentes:	9		
Votos Afirmativos Necesarios:	32	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



  
JUAN HECTOR ESTRADA  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo V – Artículos 16º y 17º

Acta Nº: 8

Fecha: 22-12-11

Hora: 22:15

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempe: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AFIRMATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	AFIRMATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Aníbal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE



*Senado de la Nación*

### *Votación Nominal*

129º Periodo Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo V – Artículo 18º

Acta N°: 9	Fecha: 22-12-11	Hora: 22:16
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	63	Votos afirmativos:	56
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	7
Total Presentes:	63	Abstenciones:	-
Ausentes:	9		
Votos Afirmativos Necesarios:	32	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



*Juan Hector Estrada*  
JUAN HECTOR ESTRADA  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



*Senado de la Nación*

### Votación Nominal

129° Periodo Legislativo - Extraordinario - 2° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ORDEN DEL DÍA 920  
(CD-90/11)

VOTACIÓN EN PARTICULAR  
Capítulo V – Artículo 18°

Acta N°: 9

Fecha: 22-12-11

Hora: 22:16

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempeate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AFIRMATIVO	LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	AFIRMATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	NEGATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	NEGATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Anibal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	NEGATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE



Tiene advertido asimismo el alto tribunal acerca de la influencia del factor económico en la prensa actual, ya que “los medios materiales y técnicos, las redes de información, la ampliación de la tirada, la difusión nacional y hasta internacional de algunos medios, la publicidad y propaganda, etc., han insertado a la prensa en el tejido de las complejas relaciones económicas en el que se encuentran las empresas contemporáneas” (Fallos, 320:1191, disidencia de los jueces Fayt, Petracchi y Bossert).

Todas las acusaciones y descalificaciones de autoritarismo y de discurso único quedaron finalmente vaciadas de contenido cuando se pudieron escuchar otras voces a través de los foros y audiencias públicas, consiguiendo perforar el grueso muro de la impunidad que protegió los intereses de los grupos monopólicos.

Es por ello que adelanto que votaré favorablemente el proyecto de ley tal como ha llegado de la Cámara de Diputados de la Nación.

4

#### SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DÍAZ

##### **Fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diarios**

**(O.D.-852/11)**

Como integrantes de Nuevo Encuentro queremos celebrar y expresar nuestro apoyo a esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel para diario.

Queremos un Estado presente, fuerte, que regule la actividad privada y garantice derechos democráticos y no un Estado bobo, ausente o impune como sucedió el pasado cuando, a través del terror, la represión, la tortura, la violación, la desaparición y la muerte se fomentaron negocios concentrados que hasta ahora favorecieron a grandes corporaciones económicas, cómplices de ese Estado de terror y formadoras durante muchos años de un discurso único.

Este proyecto que hoy acompañamos, tal como lo fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un avance más en la necesaria intervención estatal para garantizar derechos básicos de un sistema democrático, como la libertad de expresión, información y comunicación.

No es posible dejar librada la información a las leyes implacables de la economía. No se trata de una mercancía más sino de la garantía de un pueblo para poder pensarse, para poder elegir, para poder discernir y ser parte activa en la construcción de la historia.

En este sentido, es irreproachable la iniciativa de garantizar el “acceso sin discriminaciones al abastecimiento del papel”, insumo básico para los diarios, actores nodales en la formación de la opinión pública.

Desde el sector privado no se garantizaron hasta aquí ni la pluralidad de voces, ni la libre competencia, ni el acceso igualitario al papel, con lo cual se vio comprometido el ejercicio de la libertad de expresión en su aspecto más básico. Mas bien, todo lo contrario, por medio del manejo arbitrario de cupos y costos del papel, dos jugadores lograron ahogar publicaciones que representaban una alternativa frente a un discurso cada vez más concentrado. Tampoco le corresponde al empresariado autorregularse, para eso existe un Estado presente que genera mecanismos legales como el propuesto, que representa una medida concreta a favor de la diversidad y del ejercicio de la libertad de expresión.

No es para desdeñar el propósito de lograr el autoabastecimiento en un insumo que funciona como soporte de un derecho esencial de la vida política, tal como se postula en este proyecto.

Es saludable también otro aspecto de la ley que impulsa la generación de mecanismos de participación para representantes de los diarios de cada una de las provincias, además de los periódicos de la ciudad de Buenos Aires, de los usuarios y los trabajadores. Esta medida implica la democratización y permite el acceso a información restringida hasta el momento. Además ubica en un mismo plano medios diversos que no serán discriminados por su envergadura económica, aunque sí se les exige periodicidad. En muchos casos, el papel “representa entre el 50 y el 70 por ciento de los costos” para los medios locales en las provincias, como lo señala el abogado especialista en derecho a la información Miguel Rodríguez Villafañe.

Por último, es para destacar la incorporación de parámetros de control ambiental en una industria que resulta agresiva hacia el entorno. La obligación de remediar o compensar daños ambientales es un incentivo primordial que permitirá fomentar métodos de producción más amigables con el ambiente.

5

#### SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA HIGONET

##### **Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales**

**(O.D.-920/11)**

Reconozco la importancia que reviste el tema para la Nación, por lo que no puedo dejar de expresarme al respecto. No obstante, en vista de la premura del tiempo y la larga lista de oradores, pido permiso para insertar en la versión taquigráfica el siguiente discurso.

Hoy estamos por sancionar una ley que pretende preservar nuestros recursos de todo el territorio nacional, proponiendo evitar el excesivo dominio sobre nuestras tierras rurales en manos de personas extranjeras no residentes.

El tema que nos convoca se inscribe en el marco de la defensa de nuestra soberanía nacional. Cuestión que por la situación de Malvinas siempre refiere a una trama muy sensible para todos los argentinos. Hoy parte de nuestra cordillera, de nuestras llanuras, lagos y ríos, ya se encuentra en manos transnacionales.

La Carta Magna establece dentro de su ordenamiento el establecimiento de los presupuestos mínimos para la protección de los recursos naturales, que por mandato de ella son de las provincias federales. Mucho hemos discutido sobre ello en este Senado de la Nación. Al respecto, la Cámara alta ha dado muestras en reiteradas oportunidades de su compromiso con el cuidado medioambiental y el resguardo de nuestro acervo natural. Sin embargo, la Constitución Nacional no menciona la función social de la propiedad, pero nuestro ordenamiento sí la reconoce en el Código Civil. También muchas Constituciones provinciales, como la nuestra de La Pampa, regulan el uso y tenencia de la tierra y le reconoce su función social.

Considero necesario pensar que “la posesión es un hecho que da derecho”, por lo que debemos defender un concepto más amplio de propiedad, el de la “función social” que supone que no solamente hay derechos para el propietario, sino también responsabilidades, especialmente con el cuidado del ambiente. Afortunadamente el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 21.1. establece que: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social...”, pero de manera sustentable.

Asimismo, podemos destacar que además de la función social de la propiedad, este proyecto busca corregir la falta de un registro de la propiedad y de catastro de las áreas rurales a nivel nacional. Hoy, el manejo de los datos (aislados) sobre quiénes son los propietarios dificulta garantizar la soberanía agroalimentaria, atenta que existen 24 registros de la propiedad y 24 catastros provinciales. De este modo, el país carece de la información necesaria para realizar un inventario de su recurso natural más vasto. Por ello requiere un profundo y decidido cambio de legislación que contemple la asociación del Estado nacional con los provinciales y las organizaciones sociales. Este trabajo, que ponga de manifiesto el estado de las cosas, puede coadyudar para que no se reiteren casos de la bien conocida extranjerización como el del lago Escondido, en el que el inglés Joe Lewis y su hijo Charles lograron la desafectación del régimen de reserva provincial, y con ello la privatización total del lago. Los Lewis se hicieron conocidos en esa región en 1997, cuando compraron 14.000 hectáreas de tierra valiosísima entre El Bolsón y Bariloche hasta el límite con Chile, incluyendo lago Escondido. Además, concentraron unas 15.000 hectáreas que van desde el límite con Chubut hasta Punta Colorada, abarcando 50 kilómetros de costa y 150 de cordillera, consideradas “franja de seguridad” por su valor estratégico y por la riqueza de sus recursos naturales. Lewis es

sólo uno entre varios, como Benetton, Ted Turner, Michael Douglas, Sylvester Stallone y la austríaca Maia Swaroski.

Con pesar podemos agregar que éstos no son casos aislados en nuestro país... Se estima en “una cifra aproximada a los 17 (diecisiete) millones las hectáreas en manos extranjeras”, según *Tierras S.A.: crónicas de un país rematado*, de Andrés Klipphan y Daniel Enz.

Desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ley (1.158/10) creando el Programa Nacional de Unificación de Parcelas Rurales, que vale la pena mencionar aquí por la competencia del tema y porque persigue los mismos objetivos, que son revalorizar y proteger nuestras tierras para darles un fin económico y social.

La Argentina necesita una legislación que, inicialmente, proteja los bienes naturales que son patrimonio de todos. Para ello es necesario adoptar iniciativas que refuercen el control de un recurso estratégico como el suelo. Nuestra matriz productiva nos demanda un cuidado especial de este bien natural soberano, salvaguardándolo para garantizar su explotación para la siembra de alimentos y para potenciar nuestra matriz de producción primaria y agregado de valor en origen.

En vistas de los 200 años de historia que ya ha vivido nuestro país, este proyecto nos permite pensar hacia adelante y planificar de manera estratégica el manejo de nuestros recursos naturales.

El mundo se ha transformado y día a día demanda cada vez más lo que nosotros producimos en nuestras extensiones agrícolas. Por ello, para satisfacer dichos requerimientos, pero más importante, para mejorar nuestra oferta en cantidad y calidad, consideramos desde el Bloque PJ La Pampa que este proyecto constituye una herramienta virtuosa para lograr el mencionado cometido.

Por ello anticipo que votaré de manera positiva la iniciativa a que he hecho referencia.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
PARRILLI

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales  
(O.D.-920/11)**

Señor presidente:

El proyecto de ley de protección de tierras rurales presentado por el Poder Ejecutivo nacional busca combatir el intenso proceso de extranjerización de tierras iniciado en nuestro país hace varios años. Para ello, limita la cantidad de tierras que podrán adquirir las personas físicas y jurídicas de nacionalidad extranjera, es-

tableciendo topes generales (no podrán estar en manos de extranjeros más del 15% de todas las tierras rurales de nuestro país), por nacionalidad (las personas físicas o jurídicas extranjeras de una misma nacionalidad no podrán poseer más del 30% del porcentaje asignado a los extranjeros en general) y particulares (un mismo titular extranjero no podrá superar las 1.000 ha en la zona núcleo o superficie equivalente).

Los objetivos sustanciales que se persiguen son la preservación de la propiedad y la tenencia de las tierras en manos de productores agropecuarios nacionales, posibilitando un desarrollo tecnológico que acreciente la capacidad agroindustrial y proyecte al país como productor alimentario; y por otro lado, afianzar una sociedad más equitativa y democrática.

Para el logro de sus fines y, entre otras medidas, el proyecto excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, debido a que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado o de los habitantes de la República.

Es ésta una oportunidad histórica de reivindicar y resignificar el valor que como argentinos le damos a la tierra. Una verdadera ocasión para recordar que el territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado, piedra basal de su soberanía. Más aún, el territorio es el espacio geográfico en el cual se despliega la acción soberana, es un factor de integración social, un mecanismo de unidad de grupo, que va creando identidades, afinidades, y que finalmente afianza el sentimiento nacional.

Los hombres llamados a componer el Estado deben estar permanentemente establecidos en su suelo, suelo que se llama patria, palabra que, precisamente, deriva de dos vocablos latinos: *terra patrum*, con el siguiente significado: tierra de los padres.

Cuán importante resulta entonces preservar la propiedad de aquello que nos preexiste, que nos viene dado, que nos constituye como Estado soberano, que nos otorga identidad nacional, que es la fuente y origen de nuestros alimentos y, por ende, de nuestra supervivencia.

Pero no debemos olvidar también que el Estado debe intervenir en la defensa y preservación de sus recursos naturales, especialmente en el caso de las tierras que contienen o son ribereñas de uno de nuestros recursos más preciados: el agua. Las políticas que por largos años se implementaron realzaban la acción del mercado y de las inversiones extranjeras. Ello dio como resultado un incremento de las desigualdades sociales, pérdida de calidad de vida y deterioro de los recursos naturales. Con este proyecto se propician una política fundada en el desarrollo sustentable, una mejor distribución de la riqueza y un uso responsable de los recursos.

Por otro lado, la Doctrina Social de la Iglesia, en su encíclica papal *Rerum novarum*, ya consideraba y resaltaba el valor de la tierra al decir: “Si se llegara a

despertar el interés de las masas con la esperanza de adquirir algo vinculado con el suelo, poco a poco se iría aproximando una clase a otra, acercándose el abismo entre la extremada riqueza y la extremada pobreza. Habría, además, mayor abundancia de productos de la tierra. Los hombres sentarían fácilmente apego a la tierra en que han nacido y visto la primera luz, no cambiarán su patria por una tierra extraña”.

Pero además, este proyecto de ley retoma un principio fundamental: la solidaridad intergeneracional. Si la tierra argentina deja de estar en manos de argentinos, ya no habrá nada que transmitirles a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Con ello, perderán la posibilidad de progreso, afianzamiento de la unidad e identidad nacional, la garantía de la fuente alimentaria, incrementando las probabilidades de un desmembramiento total del Estado.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, con la finalidad de no desvirtuar la coherencia y cohesión del proyecto y por razones de arraigo en el territorio nacional, es menester recomendar que el artículo 4° (cuarto) sea reglamentado en el sentido de interpretar la “residencia continua, permanente y comprobada” como la categoría de “residencia permanente” creada por la ley 25.871, de manera que los extranjeros exceptuados de cumplir esta norma deban ser residentes permanentes durante diez años, o cinco si tienen hijos argentinos o están unidos en matrimonio con el ciudadano/a argentino/a.

Para concluir deseo leerles una breve carta que hace unos días me envió una compañera y entrañable amiga desde la infancia, con la que compartimos gran parte del aprendizaje de la vida.

Querida Nanci:

Tenía 5 años cuando mi abuelo perdió su chacra a manos del banco.

Este hecho produjo una gran conmoción en la familia, especialmente en nosotros, sus nietos, porque la chacra era el santuario de los juegos permitidos y también era constitutiva de la identidad de mi abuelo, era parte sustancial de su persona: ser chacarero era mucho más que un oficio, era su forma de habitar la patria.

Comencé a tratar de que mi abuelo volviera a tener una chacra. Pensé que podría comprar otra, pero los comentarios de la escasez de nuestro dinero se unían a una mirada entrañable de agradecimiento por mi preocupación. Era como un agradecimiento por soñar por ellos.

Entonces, siguiendo una tradicional consigna familiar: “lo que no se puede comprar se hace”, pensé, desde mi niñez, que había que fabricar tierra para hacer una chacra para mi abuelo.

Cuando le pregunté a mi padre ¿cómo se hace la tierra?, y le dije mi propósito, me miró con comprensiva sonrisa y me respondió:

“La tierra no se fabrica, la tierra ya existe”, y agregó con algo de tristeza que lo ensimismaba: “La tierra la hizo Dios y nos la dio para todos”.

No entendí la respuesta, pero noté que la pronunciaba con la solemnidad de las grandes verdades de la humanidad.

Enseguida me surgió una nueva pregunta: ¿cómo podía ser que Dios nos haya dado la tierra a todos y mi abuelo que tanto había amado su chacra no la tuviese?

Pasaron los años, el secundario, luego la Universidad del Comahuae, y en ese tránsito, los grupos juveniles con monseñor De Nevares, ¿te acordás? Allí leímos la casi centenaria encíclica papal *Rerum novarum*, y su exhortación a los gobiernos para que promuevan leyes para que hubiese más propietarios, sobre todo de tierra. Seguramente mi padre no la había leído nunca, pero él expresaba en su respuesta lo que todo hombre necesita para sentirse dignificado, justificado. Pude comprenderlo luego de 20 años.

Mi abuelo falleció sin recuperar su chacra.

También murieron los abuelos de nuestros compañeros de escuela, algunos pocos lograron conservar sus chacras.

Pero estoy segura de que si hoy alguien le preguntase a mi abuelo y a todos los compañeros de campo qué eran, no dudarían en responder: chacareros.

Esta historia familiar común a muchos argentinos me brindó una evidencia: es la tierra la que queda con nosotros y nunca al revés. La muerte es su evidencia irrevocable.

Porque tanto del agua, del aire y de la tierra, sobre todo de esta última, no somos dueños, sino administradores de esos bienes de todos. Por eso creo que le corresponde al Estado velar por su uso productivo y cuidado eficiente, porque representa un bien para toda la sociedad.

¡Cuántas familias del mundo se alimentarán con el fruto de nuestro trabajo a partir de nuestra tierra! Nuestras cosechas llegarán intermediadas por el impulso tecnológico a saciar la necesidad de muchos pueblos.

Seamos claros, no somos dueños de nuestros campos, sus verdaderos dueños son todos los habitantes del mundo que se sirven de ellos. (Pero si somos sus administradores tenemos la misión de producir más y mejores alimentos para todo el mundo y a esa misión no podemos renunciar.

Por eso, querida amiga, me voy a sentir muy cerca tuyo cuando tengas que votar la ley que defiende nuestro suelo.

Con mi invariable afecto, recibí un gran cariño vos, Chiche y los chicos, aprovechando para desearte una feliz Navidad.

Teresa

Creo que esta carta expresa muy cabalmente el propósito de esta ley.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
CABANCHIK

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales  
(O.D.-920/11)**

Señor presidente:

El debate acerca de la posesión de la tierra es una cuestión urgente y, por ello, celebramos que se discuta en este Congreso, y que se hayan producido diferentes dictámenes en la Cámara de Diputados, que sin duda contribuyen a enriquecer el texto final de la media sanción, esta que hoy debatimos en el Senado.

Este debate se ubica en el marco de una discusión general sobre el problema de la soberanía, en el que la tierra posee un papel fundamental. No olvidemos que en la situación global actual la tierra y el agua han adquirido una especial importancia geoestratégica, y es por ello que su protección es también la protección política de la soberanía. En el marco de este Bicentenario, lo mejor que podemos hacer para las generaciones futuras es legarles un territorio protegido de la explotación excesiva y, al mismo tiempo, una legislación que regule la propiedad extranjera en el territorio nacional.

Efectivamente, según al Censo Nacional Agropecuario, en el lapso que va de 1998 a 2008 —es decir, en 10 años— se han reducido las exploraciones agropecuarias en una cantidad de 145 mil, lo cual demuestra que ha habido una gran concentración de tierras en este último período. Del mismo censo surge que hay 74 millones de hectáreas que pertenecen a tan sólo 4.000 propietarios. Hay evidencia, entonces, de que el llamado boom de las *commodities* que se ha producido en este tiempo no fue acompañado hasta este momento por una legislación de corte estratégico y, por ello, la sanción de esta norma es un primer paso en este sentido.

En el marco del Frente Parlamentario contra el Hambre, que integro junto con otros senadores y diputados, el 6 de octubre de este año hemos realizado una audiencia pública para discutir este proyecto, en la que participaron una serie de actores relevantes en relación al problema de la tierra y, entre las conclusiones a las que se llegó, encontramos que dicho problema tiene múltiples aristas que hay que contemplar de aquí en adelante. Por un lado, el problema de la concentración de la posesión sin propiedad y la distribución de la tierra. En relación con esto, se planteó la necesidad de complementar el proyecto con la ley de arrendamientos rurales, que es algo que consideramos que deberemos afrontar en el próximo período legislativo. Por otro, el de su uso en relación con el modelo productivo actual, que nos lleva a discutir la función social de la tierra y las condiciones actuales de su explotación, en el marco de un abordaje integral de la problemática.



Ahora bien, este abordaje integral de la problemática también responde a la necesidad de saldar una deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos originarios, dado que si bien hay legislación que los protege –la propia Constitución Nacional, como también la ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras (26.160 y afines)–, aún se registran violentas situaciones de desalojo que incluso se han cobrado vidas.

Para concluir, creemos que este proyecto es un importante primer paso en términos de regular y limitar la concentración de tierras, pero de todos modos consideramos necesario extender la limitación a la concentración, más allá de la nacionalidad del propietario.

8

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
VERANI

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diario  
(O.D.-852/11)**

Señor presidente:

Por el artículo 1º, el mercado de papel, es decir, su fabricación y venta, hasta la fecha desregulado, se convierte en ultrarregulado al declarárselo de “interés público”.

Cuál sería la consecuencia de tal cambio; que el gobierno quiere ejercer el control sobre el mismo, regulando su producción, con poder para intervenir las fábricas a la vez de tener la posibilidad de encarecer y trabar la importación del mismo y eligiendo quién puede comprarlo y quien no.

Los artículos 2º, 10 y 12 crean una comisión bicameral de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diario; asignan la autoridad de aplicación al Ministerio de Economía y crean la Comisión Federal Asesora. Esos organismos ejercerán innumerables controles sobre la actual empresa privada y sobre futuras empresas que se dediquen a esa misma actividad, las cuales serán posibles de numerosas sanciones.

Los artículos 40 y 41 exigen a Papel Prensa “operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa de la demanda interna de papel para diarios” y con la obligación de ejecutar un plan de inversiones cada tres años a efectos de poder satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios.

De no ser así, debiera el Estado hacerse cargo del aporte de fondos para esas inversiones superando su porcentaje de participación en la misma (del 27,4%) tales aportes podrán aplicarse para acrecentar dicha participación accionaria.

El artículo 20 obliga a la publicación del precio único de referencia.

Sobre este proyecto se expidieron negativamente ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires), ARPA (Asociación de Radiodifusores Privados) y ATVC (Asociación Televisión por Cable). El presidente de ADEPA denunció que “el trámite en Diputados fue irregular, que otorga amplísimas facultades a Economía para aplicar sanciones” y aventuró que la distribución de papel funcionará igual que la publicidad oficial y habrá que pedirle papel a Moreno. El presidente de AEDBA afirmó: “Esto es una confiscación encubierta y el tema va a terminar en la Justicia”, entre otras cosas; entretanto el presidente de ARPA arriesgó que “la ley es legítima en lo formal pero no por los derechos que compromete severamente, que son los de propiedad y libertad de prensa, y por ello la única expectativa favorable será por lado de la Justicia”. Por último, el presidente de ATVC fue más allá: “Esto es la ley de medios bis. Se trata de un nuevo control a los medios de comunicación, ahora los escritos”.

Mi conclusión respecto a la iniciativa del Ejecutivo sobre Papel Prensa es que resulta claramente inconstitucional en virtud del artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece que “el Congreso Federal no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal”

A mi entender estamos transgrediendo ese artículo desde los dos lugares: hay injerencia en la libertad de prensa y, al declarar a la actividad “de interés público”, se le está aplicando la jurisdicción federal, conclusión: estamos actuando, los legisladores de la Nación, de forma claramente inconstitucional.

Lo que está ocurriendo es que el gobierno, a través de sus diputados y senadores, ley mediante, genera una amplísima y rigurosa regulación para una empresa sola, Papel Prensa. La pregunta que cabe es: ¿por qué ahora?, ya, en extraordinarias debemos legislar para la única empresa que produce el papel para diarios, el que no escasea en el mercado local ni mundial, porque también existe la posibilidad de importarlo sin recargos ni aranceles e incluso a un costo menor al local. ¿Es urgente la regulación de la producción del papel o urgente la alineación de la prensa escrita bajo un solo discurso?

De manera tal que si ésta es la realidad de dicho insumo, objetivamente no existe ninguna razón comercial monopólica, ni de posición dominante, ni de especulación probada, que dé motivos al Estado a intervenir de forma tan compulsiva en el rubro que produce y provee el insumo principal de la prensa escrita. Y aquí es donde este insumo, materia prima de la prensa escrita, trasciende esa significación y se convierte en el insumo indispensable de la transmisión de las ideas, de todas las ideas, las del gobierno y las de los que no las compartimos. En el papel se plasman las ideas del que piensa igual al gobierno y del que piensa distinto. Con lo cual resulta un elemento esencial de la construcción democrática. De una democracia plural, en serio, que

defiende y respeta al adversario, que no convierte en enemigo instantáneo al que se atreve a expresar una idea diferente, la democracia que se reinventa en el pensamiento distinto y diverso y que rechaza por definición el discurso unilateral.

¿Que es entonces ese apuro y obsesión sino el presagio de un control sobre lo que se escribirá, más que sobre el mercado de papel? Si hay una ley aún no tratada y demorada en el Congreso, es la Ley de Adopción, ése es un instrumento que los niños de carne y hueso huérfanos o necesitados de hogares y muchas familias deseosas de tener hijos en adopción esperan y necesitan como una respuesta urgente; no me parece que tenga la misma urgencia una ley para regular el papel de diario.

Lo que más deseo es que esta conclusión sea un rotundo error del análisis que hice del tema; con sinceridad, espero que en uno o dos años pueda pedir disculpas por haber errado el análisis, no sólo será una cuestión de honestidad intelectual, será para mí un verdadero alivio republicano.

9

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
LABADO

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diario**

(O.D.-852/11)

Señor presidente:

El proyecto que estamos tratando tiene por objeto darles a los diarios del país un trato igualitario, igualdad que a partir de 2003 es una realidad concreta, y de esta manera poder comunicar libremente.

Señor presidente, además también se logra un precio uniforme para todos los medios gráficos, evitando el manipuleo de la materia prima básica para garantizar el derecho a la información de los argentinos.

Este proyecto es complemento de la Ley de Medios que permite la democratización de los medios y garantiza la libertad de informar y de informarse por parte de los ciudadanos.

Señor presidente, la miembro informante dio detalles precisos del proyecto y funda el porqué de su relevancia; es por ello que yo quisiera referirme a una cuestión más de fondo. En el día de ayer escuché tantas cosas al momento de darse tratamiento al proyecto de presupuesto, y sin ofender a nadie me preguntaba mientras escuchaba las exposiciones económicas de algunos senadores y de otros que dudaban del proyecto económico que lleva adelante nuestro proyecto, del Frente para la Victoria Santacruceña, ¿dónde estaban en 2001? Hoy muchos nos quieren decir qué hacer, recuerdo en 2003 cuando nadie creía que Néstor podía transformar la Argentina, que volviese a ser un país creíble, el tiempo ha demostrado, señor presidente, que las bases construidas por un pingüino resultaron firmes, sustentables ante cualquier tempestad y es por

ello, señor presidente, que esta ley es fundamental para permitir que el pueblo decida para leer, así como decide quién lo gobierna, decisión que nosotros hemos sabido respetar, por allá en 2009, cuando nos tocó ser minoría en ambas Cámaras, decisión que seguimos respetando ahora cuando nos brindó el apoyo para la profundización de este proyecto que conduce la compañía Cristina.

Señor presidente, reitero: el pueblo tiene que estar informado, creo que lo que pasó ayer fue falta de información, si no no entiendo cómo los trabajadores rurales se manifiestan en contra de sus reivindicaciones sociales; es fundamental defender los derechos de nuestro pueblo y para eso nos votaron; poder decidir qué ver, qué leer, también forma parte de la dignificación del pueblo, y por sobre todo se ejerce el verdadero derecho de vivir en democracia.

Señor presidente, muchos se hacen los distraídos y no hablan de cómo se quedaron con Papel Prensa; por suerte también volvió la justicia a la Argentina. Señor presidente, en este nuevo país la información es de todos y para todos, nosotros vinimos a hacernos cargo de lo que pasó en los 90, de lo que pasó en 2001, pero por sobre todo nos hacemos cargo del presente y del futuro, señor presidente, futuro consolidado con el trabajo y el esfuerzo de Néstor y con esta juventud que día a día crece en capacidad y conocimiento de saber que éste es el camino que nos llevará a vivir en la Argentina que todos merecemos y que además han asumido el compromiso de ser custodios de este proyecto que nos contiene a todos.

10

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
REUTEMANN

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales**

(O.D.-920/11)

Señor presidente:

El agua, la tierra, la energía escasean en el mundo. Son bienes cada vez más preciados. En la agenda del siglo XXI las cuestiones ambientales y de posesión de los recursos vitales está en el centro de las preocupaciones mundiales. De la disponibilidad de esos bienes dependerá la soberanía alimentaria.

Comparto plenamente la visión de que la tierra es un recurso estratégico y de que las tierras estén preferentemente en manos de los argentinos; es una notoria cuestión de geopolítica, de respeto del acervo cultural y, en la medida en que se modere la concentración en su tenencia y dominio, también es una cuestión de equidad social.

La naturaleza ha sido pródiga con la Argentina en materia de recursos naturales.

Ellos constituyen una permanente fuente de riqueza y la plataforma para que nuestra producción pueda sostenerse y desarrollarse, con altos niveles de competitividad, los que nos caracterizan y que son reconocidos por los mercados mundiales, en particular en lo que concierne al complejo agropecuario y agroindustrial. Queda claro que nuestro suelo es rico y codiciado.

Nuestro país, en la historia, y en el presente, ha sido visto como granero del mundo. Ese granero está ubicado en un suelo específico. Por ello, es necesario protegerlo y cuidarlo, dejándolo preferentemente en manos de los connacionales que tienen un campo ancho para desarrollarse.

Ese suelo debe ser objeto de prácticas regulatorias que promuevan que la tierra sea, del todo y prioritariamente, para los argentinos.

La Argentina es y será un factor clave a la hora de saciar la sed y el hambre de tantos habitantes del mundo. Pero lo hará respetando un criterio básico de soberanía nacional, sin que medie una previa apropiación indiscriminada de su propio territorio, decidida en forma preventiva desde otros lugares del planeta.

Sabido es que somos el principal exportador mundial de harina y aceite de soja, el segundo de maíz y un proveedor clave de trigo y que, atento a ello, entre otras razones, somos una atractiva opción en la adquisición de tierras rurales. La frontera productiva, que se ha venido ensanchando en los últimos tiempos producto de la revolución biotecnológica en curso, nos hace ver que serán necesarios en forma cada vez más creciente suelos que puedan ser susceptibles de ser cultivados o donde pastoree nuestro ganado.

El suelo es en cualquier caso percibido como un bien estratégico. Fundamentalmente por la creciente necesidad en su apropiación para ponerlo al servicio de la producción, mediando siempre el correspondiente cuidado del medio ambiente.

Este marco legal, más allá de algunos cuestionamientos puntuales que ha recibido, debe ser considerado un gran avance en procura de lograrse objetivos que deben ser conceptuados supremos.

Un último comentario respecto de ciertas prevenciones que se hicieron en el sentido de si al sancionarse este proyecto no se estaría avanzando sobre competencias provinciales.

Es sabido que soy un acérrimo defensor de ellas. Siempre he defendido el respeto al federalismo. Pero, en este caso, considero que de ningún modo se están afectando las facultades que les son propias a las provincias argentinas.

No se está reglamentando el dominio originario, que efectivamente está en cabeza de las provincias, sino que se está ejerciendo una facultad exclusiva del Congreso Nacional que deriva de la aplicación de la legislación civil. Y las cuestiones atinentes al Código Civil son exclusiva materia de la Nación y no de las provincias.

La reglamentación se refiere a la transmisión del dominio de inmuebles rurales y no al dominio originario en sí mismo.

Por lo demás, el país es uno solo, la Nación Argentina es de todos y, al defenderla, se defienden los intereses de las provincias, las que, en una mirada federal, integran la Nación.

Por todo lo expuesto, señor presidente, es que votaré este tema favorablemente en general y en particular.

11

## SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO

### **Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales**

**(O.D.-920/11)**

Señor presidente:

Este proyecto determina el comienzo de una política de Estado. Establece que las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y empleo de las tierras rurales se inscriben en el derecho a la libre determinación de los pueblos, en el derecho a la independencia económica y la determinación de la forma de explotación de lo producido por sus recursos y riquezas naturales, tal como lo establece el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado como cláusula constitucional por la reforma de 1994.

También se basa en las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, que se corresponden con los objetivos señalados en la nueva cláusula del progreso, que contempla el inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, en tanto dispone proveer lo conducente al desarrollo económico, al progreso económico con justicia social, a la productividad, a la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, entre muchos otros.

También se inscribe en lo contemplado en el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, en cuanto establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero se aclara que la ley puede subordinar tal uso al interés general. Frente al interés individual, si hay una contraposición con el interés social o colectivo, debe prevalecer este último.

Asimismo, cabe mencionar que países vecinos de la región como Brasil, Venezuela, Perú y Colombia, así como Uruguay, se encuentran en el proceso de debate respecto de una legislación similar a la que aquí se analiza.

Entrando en el análisis particular del proyecto, cabe decir que en el mundo hay un fuerte proceso financiero especulativo que hace que fondos colosales que antes

se colocaban en otro tipo de inversiones hoy se destinen a la compra de tierras en distintos lugares.

Sabemos de las inversiones extranjeras en el Sur para la cría y comercialización de ganado ovino y en otras regiones para disponer del disfrute de paisajes. Al comprar la tierra, los capitales extranjeros excluyen de esa posibilidad a los demás habitantes de la República Argentina. De no aprobarse esta ley, los inversionistas extranjeros buscarán aumentar la apropiación de las mejores tierras del patrimonio argentino para, mediante la agricultura intensiva y la extracción de recursos naturales, producir ganancias y refugiarse de la crisis financiera.

La aprobación de una nueva ley que legisle la tenencia de tierras en la Argentina resulta impostergable. En nuestro país existen 22 millones de hectáreas extranjerizadas, la mayor parte de ellas en manos de la gran burguesía monopolística norteamericana y europea.

Esto resulta evidente cuando se analizan las zonas más codiciadas por estos inversores, las tierras de frontera, que a la vez son un tema de seguridad vinculado con la integridad territorial y que son las ubicadas en una franja de 150 kilómetros (abarcando la cordillera) y de 50 kilómetros desde las costas, que albergan la mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce.

Contra este tipo de actividades y compras de tierras rurales se intenta sancionar este proyecto, que hoy se somete a consideración de los señores senadores.

Por último, cabe decir que la ley procura un proceso de emprolijamiento en la registración de las tierras. Los registros de la propiedad inmueble en la Argentina son provinciales, y presentan distintas características según las jurisdicciones. No hay una información centralizada. Nadie sabe a ciencia cierta hoy en la Argentina cuánta tierra está en manos de extranjeros, en qué lugares está localizada o quiénes son sus titulares.

Por ello, este proyecto contempla la creación de un registro nacional al cual tendrán que aportar sus informes los registros locales existentes. El Registro Nacional de Tierras Rurales, creado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, será la autoridad de aplicación de la ley. Entre las funciones de ese registro podemos citar las siguientes: reunir datos relativos a tierras rurales de titularidad o posesión extranjera en los términos de la ley, requerir de parte de las dependencias provinciales información para conformar el registro, expedir certificados de habilitación. Así, los escribanos que autoricen escrituras en las que operen transferencia de dominio o de derechos posesorios tendrán que requerir certificados a la autoridad de aplicación. De esta manera, se podrá determinar si la persona física o jurídica que va a comprar se halla dentro de los márgenes de la limitación establecida.

Por ello, este proyecto contempla la creación de un registro nacional al cual tendrán que aportar sus informes los registros locales existentes.

Como se puede apreciar, el proyecto viene a proteger a propietarios y productores agropecuarios argentinos para que se preserven la propiedad y tenencia de las tierras en manos de estos productores agropecuarios nacionales, posibilitando un desarrollo tecnológico propio que acreciente nuestra capacidad agroindustrial y nos proyecte como productores alimentarios.

Por ello adelanto, señor presidente, el voto afirmativo de mi parte a este proyecto de ley.

12

### SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO

#### **Fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diarios**

(O.D.-852/11)

Señor presidente:

Este proyecto contempla un régimen para resguardar la libertad de expresión en nuestro país, que es un derecho amparado por la Constitución Nacional. Además viene a saldar una situación muy inequitativa en la Argentina que existe desde hace más de tres décadas.

En la distribución del papel para diarios ha existido, y continúa en este momento, una inequidad absoluta. Por ello, el proyecto de ley en tratamiento busca alcanzar dos grandes objetivos: en primer lugar, el acceso igualitario a ese preciado bien, al insumo básico que necesitan los diarios para poder existir, como lo es el papel. En segundo término, a un precio único, que es absolutamente necesario para que no exista inequidad entre los grandes diarios y los pequeños periódicos que existen a lo largo y ancho de nuestro país.

Julio Ramos, de *Ámbito Financiero*; Jorge Fontevicchia, de *Editorial Perfil*, y Jorge Lanata, *Página 12* y *Crítica* de la Argentina, han denunciado en infinidad de oportunidades esta situación de inequidad y vulnerabilidad que tenían los diarios que no eran beneficiarios de la distribución del papel de producción nacional por parte de Papel Prensa S.A.

También los legisladores de la Nación se han cansado de escuchar sobre la situación que padecen los diarios en sus provincias y han asistido a la quiebra de muchos diarios históricos.

También hemos asistido a la presentación de denuncias sobre deslealtad comercial en lo que respecta a la entrega y precio de papel.

Es por ello que en agosto del año pasado la señora presidenta de la República envió el primer mensaje por el que se declaran de interés público la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diario. El objeto primordial del proyecto de la señora presidenta era garantizar la libertad de imprenta



que es la diferencia entre la demanda interna a través del registro de los compradores de papel para diarios y la capacidad de producción que tiene hoy la única fábrica de papel para diarios que existe, lo que da como resultante una fórmula que es la necesidad de la importación.

A partir de una resolución de la Secretaría de Comercio de este gobierno la importación del papel tiene arancel cero. Nosotros hemos venido contribuyendo con políticas de Estado para que esta situación mejore cada vez más. No hemos podido resolver el problema central, que es el monopolio de la fabricación de papel, con lo cual también continúan las inquietudes, pero la tasa cero es a partir de este gobierno, de una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación.

Cuando los fondos necesarios para las inversiones previstas sean provistos en forma más que proporcional por el Estado nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora, es decir, por los diarios.

Por último, cabe decir que el hecho de que los diarios tengan que comprar papel a su máximo competidor porque fabrica el papel, genera una situación de inequidad absoluta y este Congreso tiene que saldarla. Hay que proteger a los diarios de la Argentina.

Nuestro país es un caso único en el mundo. No existe país en el mundo donde el dueño de la planta que produce papel sea el dueño del diario.

Todos los legisladores conocemos por lo menos un diario que ha sido víctima de esta situación, ya sea de nuestro pueblo, de nuestro municipio o de nuestra provincia. No creo que ningún partido político que defienda los valores de la democracia pueda dejar de acompañar este proyecto.

Por los motivos esgrimidos, señor presidente, adelanto mi voto favorable a este proyecto.

13

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
PÉRSICO

**Protección al dominio nacional  
sobre la propiedad, posesión o tenencia  
de las tierras rurales**

(O.D.-920/11)

Señor presidente:

El proyecto de ley que estamos considerando reviste una importancia fundamental, teniendo en cuenta que la tierra es un recurso natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano, social y económico, que en definitiva hace a la soberanía nacional.

Por ello, se impone la necesidad de dictar una legislación tuitiva, para evitar la consolidación de procesos nocivos e indeseados que, de ser librados a su propia

dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables.

En este sentido, resulta oportuno señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO– viene trabajando y realizando desde hace algún tiempo negociaciones intergubernamentales para arribar a un documento denominado “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”.

En mayo de 2010 se realizó en Brasilia una consulta regional en torno a la temática, y en esa ocasión se pudo arribar a ciertas conclusiones que describen de manera general ciertos caracteres que son aplicables a toda América Latina.

En dicho encuentro se parte de la premisa de que un gobierno débil en estos recursos dificulta el crecimiento económico y el uso sostenible del medio ambiente; en cambio, la administración responsable de la tenencia de la tierra y de otros recursos naturales puede ayudar a reducir el hambre y la pobreza y a potenciar el desarrollo social y económico.

Las conclusiones que arrojó el encuentro son las siguientes:

- La tierra, así como otros recursos productivos de capital, está sufriendo un alarmante proceso de concentración en la propiedad y su uso. Además, esto se ve agravado por la extranjerización de la tenencia legal en la mayoría de los países de América del Sur.
- Esta situación ha repercutido principalmente en el normal desarrollo de la agricultura familiar; en el continente ha provocado, por ejemplo, masivos procesos de migración desde el campo a las ciudades y pérdida de la forma de vida tradicional en el mundo rural.
- Por lo anterior, el Estado debe tener un rol más activo en el diseño, aplicación y control del cumplimiento de medidas tendientes a mejorar la gobernanza y administración de la tierra, teniendo un papel central en la regulación de compras y transferencias de tierras a empresas extranjeras. Todas estas políticas deben propender a la protección de la agricultura familiar y, por ende, a la soberanía alimentaria de cada país.

Asimismo, la FAO considera que la concentración es producto de la consolidación de complejos agroindustriales transnacionales que, en muchos casos, están más integrados al sistema agroalimentario mundial que a los mercados internos, y también por fenómenos de largas adquisiciones de tierras por fines puramente especulativos. Ambos fenómenos son retroalimentados por el alza de los precios internacionales de alimentos y materias primas.

En este escenario, en los últimos años se registra una recuperación de la capacidad en la mayoría de los Estados para la intervención y la regulación de los mercados y de la tenencia de la tierra, destinadas a desarrollar sistemas sostenibles de producción de uso y ocupación

de la tierra y que éstos sean capaces de garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.

Nuestra Constitución Nacional contiene diversas cláusulas que sirven de sustento a la iniciativa que estamos abordando. Así, el artículo 75, inciso 19, establece que el Estado nacional, más concretamente el Congreso de la Nación, tiene el deber de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”; y de “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio...”.

Asimismo, y como bien se señala en los fundamentos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional, las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como también en su derecho a la independencia económica, y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional–.

Por su parte, el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica establece: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social...”.

Con respecto a la procedencia o pertinencia de dictar esta regulación, es importante dejar en claro que lo que hace esta norma es legislar con relación al dominio de inmuebles, facultad que es resorte exclusivo del Congreso Nacional.

En el campo de la legislación comparada, vale destacar que normas de este tipo, si bien pueden resultar novedosas en nuestro medio, existen en la mayoría de los países desarrollados y en aquellos que cuentan con una gran riqueza de recursos naturales. Como ejemplo se pueden mencionar: Brasil, Francia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros.

En nuestro país se ha detectado durante los últimos años un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

Como respuesta a dicho fenómeno, el Poder Ejecutivo nacional elaboró este valioso instrumento normativo para limitar ese proceso, y fue el primer proyecto remitido en el corriente año parlamentario. Se trata de un paso fundamental en pos de consolidar una política de Estado que preserve fuertemente la propiedad nacional de este recurso estratégico.

No sólo se limita la cantidad de tierra en manos de extranjeros sino que además se limita la cantidad en manos de un mismo propietario. Ello así en el entendimiento de que estos procesos afectan gravemente la independencia económica y política de nuestra nación.

Esta iniciativa responde a un reclamo de larga data. La misma se inserta en un contexto de visión integral y estratégica del Estado, en la que se elaboran políticas públicas que no sólo respondan a situaciones coyunturales, sino que también tracen un horizonte a largo plazo, cuidando los recursos naturales vitales para nuestro porvenir.

Vale aclarar que esta protección del dominio nacional sobre los recursos naturales argentinos en modo alguno ha de ser entendida como una norma xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado, asegurando que los recursos, vitales en el siglo XXI, sigan en la órbita del Estado nacional, sin que eso signifique desalentar la inversión extranjera.

Ello surge claramente de los fundamentos del proyecto y de su articulado, así como también de las palabras de nuestra presidenta en oportunidad de anunciar el envío del proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación.

La norma en cuestión no sólo no resulta refractaria de inversiones extranjeras, sino que tampoco afecta derechos adquiridos.

Señor presidente, estoy plenamente convencida de la relevancia trascendental que reviste esta norma, mediante la cual se protege este recurso estratégico para todos los argentinos, para nosotros y para las generaciones futuras.

Por todo ello, acompaño con mi voto positivo la sanción del presente proyecto de ley.

14

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
IRRAZÁBAL

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios**

(O.D.-852/11)

Señor presidente:

Venimos a dar el debate del proyecto venido en revisión a esta Honorable Cámara para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel de diarios, convencidos de que la sanción de esta iniciativa constituirá un paso importante en la defensa del derecho a la comunicación de todos los habitantes del país.

El papel de diario es un insumo básico para la prensa escrita y este bloque del oficialismo entiende que las condiciones en que se desarrolla actualmente el mercado de papel de diario están lejos de garantizar el libre acceso y la no discriminación del grueso de los medios de prensa del país.

Como bien sabemos, la oferta de papel de diario en nuestro país está concentrada en una empresa, Papel Prensa S.A., bajo el control de las empresas

periodísticas que editan los dos principales matutinos del país, a las que la competencia acusa de autoabastecerse a precio preferencial e imponer, al resto de los medios gráficos, precios y condiciones discriminatorios. Proponemos atender este desequilibrio flagrante mediante una regulación específica, que asegurando entre otras cosas el acceso a precio igualitario, sienta las bases de una tutela efectiva de las libertades de imprenta, de expresión y de información, de raigambre constitucional y en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos.

Esta regulación, lejos de constituir una medida aislada, caprichosa o motivada por la persecución política, como arguyen con fundamentos poco serios sus destinatarios en primeras planas, se enmarca en la posición amplia y consistente que viene defendiendo la administración, de poner coto a la concentración económica de las últimas décadas, concentración que conspira contra los intereses de los consumidores y que ha reducido los espacios para el ejercicio efectivo de los derechos y garantías constitucionales.

En este sentido, la regulación del mercado de papel para diarios complementa la política legislativa establecida por este Congreso de la Nación para los servicios de comunicación audiovisual, fijando para la provisión de este insumo objetivos de origen nacional, competencia, no discriminación, libre acceso, asignación eficiente de recursos y preservación del medio ambiente.

Entendemos que el rol del Estado de una sociedad organizada democráticamente consiste en proveer al mayor y mejor desarrollo de todos sus integrantes. Apuntamos a un Estado dotado de un orden jurídico emanado de la representación popular, una administración burocrática capacitada y un ejercicio prudente y responsable del monopolio de la fuerza legítima, que no sea pasivo ante los desequilibrios, asimetrías y falta de transparencia de los mercados, que sea capaz de corregir las desviaciones que amenazan con hacer de buena parte de los derechos declarados en sus estatutos meras expresiones de deseo.

En la actualidad el esquema comunicacional argentino está signado por la concentración económica. Unos pocos grupos económicos controlan la mayor parte de los medios informativos: prensa gráfica, radiodifusión, televisión y demás canales de distribución masiva de contenidos. El riesgo que entraña esta configuración no es tanto su creciente capacidad de imponer agendas comunicacionales –cuya influencia efectiva en los tomadores de decisión y el público en general, como ha quedado evidenciado con los últimos resultados electorales, es, en el mejor de los casos, relativa– sino el ahogo del pluralismo de fuentes de información que conlleva.

La intención declarada y explicitada de esta norma es poner límite a los posibles abusos de posición dominante y con ello ampliar el espectro de diversidad,

democratización y federalización de la prensa escrita. La obligación de publicar la información relevante para el mercado y la fijación de un precio único de contado al que todos los consumidores puedan acceder al papel de diarios, brindan transparencia al mercado de papel de diario y protegen de las prácticas anticompetitivas, colusorias y predatorias que ha facilitado la aquiescencia de gobiernos notoriamente sensibles a la influencia de las corrientes principales de la opinión publicada.

Creemos que es necesario poner coto a este mecanismo autosatisfactorio de obstrucción de la competencia comercial, que con frecuencia se intenta legitimar mediante el uso irrestricto del dispositivo mediático, algo que es importante decirlo, no debe ni podría restringir de ninguna manera este régimen constitucional. Y no es que aspiremos a que los medios de comunicación gráficos lleguen a carecer de intereses comerciales, o de puntos de vista políticos o sociales en línea con aquellos, y que la defensa de sus propósitos no vaya a entrar en competencia con otros propósitos de otros orígenes comerciales, solamente que consideramos justo que el Estado vele para que no se produzcan avasallamientos de los derechos de todos los concurrentes en proveerse de los medios que necesitan para publicar sus propias ideas y puntos de vista, es decir hacer valer sus intereses en igualdad de condiciones jurídicas, todo ello en el entendimiento que el resultado de esta intervención será un “mercado de ideas” más vasto, variado y competitivo, o lo que es lo mismo, una prensa más libre y democrática.

El presidente norteamericano James Madison sostuvo alguna vez que “un gobierno popular sin información popular o sin los medios para adquirirla, no es sino el prólogo a una farsa o una tragedia, o tal vez ambos”. Que el esfuerzo republicano que lleva adelante esta administración, de enfrentarse a los intereses concentrados que acostumbran custodiar sus negocios desplegando amplios operativos de formación de la opinión pública, arribe en lograr una mayor capacidad del conjunto social para dotarse de más y mejor información para vivir en democracia, es el anhelo que motiva mi voto favorable a la propuesta bajo examen de esta Honorable Cámara.

15

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
BERMEJO

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales**

(O.D.-920/11)

Señor presidente:

Con respecto a este proyecto, quiero afirmar que pertenezco a un movimiento político donde la soberanía

política, la independencia económica y la justicia social son banderas fundacionales y fundamentales para el desarrollo de políticas públicas en cada gestión, ya sea nacional, provincial o municipal.

Partiendo de esta base filosófica y política, resalto la voluntad y férrea decisión de nuestra presidenta de la Nación, quien a través de este proyecto genera una clara política de Estado para reservar un recurso no renovable que es estratégico para los argentinos, en salvaguarda de la soberanía alimentaria del presente; pero fundamentalmente de las generaciones futuras.

Cuando en estos días, lo medios de comunicación de mi Provincia me solicitan alguna referencia de lo vivido hace diez años en nuestro país; lo primero que viene a mi memoria es que luego de esas nefastas jornadas de diciembre de 2001, cuando murieron compatriotas que reclamaban lo que les correspondía, todos tuvimos que soportar y padecer una grave crisis económica; y en medio de ella aparecieron numerosos inversores que vinieron por nuestras tierras... porque en esa época, el valor de ese recurso era de dos pesos.

Pasó una década, la Argentina cambió y se puso de pie con un liderazgo político importante; pero fundamentalmente con la voluntad de cambiar paradigmas y defender los intereses de la Nación.

Este proyecto tiene mucho que ver con eso, porque pone un freno necesario a aquellos capitales extranjeros que lo único que pretenden es adueñarse de nuestros recursos naturales, teniendo en cuenta la riqueza de nuestra tierra en todo el territorio nacional.

Celebro que hoy estemos debatiendo este tipo de leyes, porque no podemos permitir que la tierra de nuestros pueblos originarios, como también la de nuestros abuelos, quede en manos de inversores extranjeros. Esto no significa que a través de un instrumento legal levantamos un muro, ni que coartemos la posibilidad del ingreso de capitales al país. Por el contrario, estoy convencido que mediante esta ley, le damos una clara señal a quienes deseen invertir en la Argentina, ésta es que para traer capitales, lo deben hacer en industrias que nos permitan incorporar valor agregado a nuestra producción primaria.

Señor presidente, no quiero extenderme porque entiendo que hay muchos senadores que desean participar en este debate histórico, pero antes de finalizar quiero manifestar que el proyecto que tratamos no vulnera la autonomía de las provincias, por el contrario les genera un paraguas que las protege junto a los municipios del avance indiscriminado sobre nuestra tierra y nuestros alimentos.

Por lo expuesto, señor presidente, dejo constancia que acompañaré a mi bloque en el voto afirmativo del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

16

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
PARRILLI

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios**

(O.D.-852/11)

Señor presidente:

En la distribución del papel prensa para diario ha existido durante más de 30 años una inequidad absoluta, y este proyecto con media sanción de Diputados tiene dos objetivos: el acceso igualitario al papel y a un precio único, para todos los diarios grandes, medianos y chicos que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Elementos fundamentales para que los diarios puedan cumplir con su finalidad... informar en iguales condiciones.

Es un proyecto para resguardar la libertad de expresión en nuestro país, que es un derecho amparado por la Constitución Nacional, y saldará una situación inequitativa existente en nuestro país, desde hace más de tres décadas.

Durante estas tres décadas hubo denuncias y reclamos para esta situación. Recordemos a Julio Ramos, de *Ámbito Financiero*, a Jorge Fontevicchia, de Editorial Perfil, y a Jorge Lanata tanto en *Página 12* y luego con el diario *Crítica* de la Argentina, quienes denunciaron en forma reiterada la inequidad, vulnerabilidad, opresión y disciplinamiento obligatorio que tenían los diarios que no eran beneficiarios de la distribución del papel de producción nacional por parte del Papel Prensa S.A.

Recordaremos las situaciones similares que vivieron los diarios de las provincias, de los pequeños pueblos y de los municipios, mucho de esos diarios directamente quebraron. Existieron y existen denuncias concretas sobre deslealtad comercial en la entrega de papel y/o en el precio del papel.

Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, en agosto del 2012 para declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diarios, quienes explicaron y fundamentaron su apoyo a esta declaración de interés público de la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diarios.

Todos tuvieron su oportunidad para opinar y de ser escuchados, pero... ningún diputado de la oposición –salvo alguna excepción– asistió a esos debates. Otros no quisieron venir, como los directivos de *Clarín* y *La Nación*, accionistas de la única fábrica de pasta de celulosa de papel para diarios.

Paralelamente a esas audiencias, y por orden de la señora presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, se realizaron audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. El resultado de esas audiencias fue la construcción del marco normativo que forma



“para que los pequeños empresarios tengan acceso a los insumos básicos”. Agregando que la “democratización” la debe “generar el Estado, porque fue el Estado el que creó la principal productora de papel de diarios de la Argentina con los recursos de todos los argentinos”.

Señor presidente, no deseo extenderme porque entiendo que mucho se dijo y se dirá en este debate y mis pares conocen lo que viven algunos medios gráficos en cada una de sus provincias, por esto adelanto que mi voto será de manera positiva, acompañando a mi bloque; convencido de que este proyecto que tiene sanción de Diputados y que será ley es la mejor herramienta para democratizar el acceso igualitario al papel de diario, al tiempo que incorpora la protección del ambiente en la producción y utilización de materias primas y crea una comisión bicameral para controlar la producción, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel para diarios en la Argentina.

18

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
CORRADI DE BELTRÁN

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales**

(O.D.-920/11)

Señor presidente:

Veo con agrado la aprobación de la presente ley que propone limitar y regular la compra de tierras argentinas en manos de extranjeros. Considero que esta norma será el punto de partida para el debate y la toma de conciencia de la problemática de la tierra en nuestro país.

Hablar de la soberanía nacional y sus derivados: la soberanía territorial, la soberanía agroalimentaria, la defensa de nuestros recursos naturales (en especial el agua dulce), la distribución de la tierra y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, entre otros, son algunos de los grandes temas pendientes o ha profundizar en el Poder Legislativo.

En Santiago de Estero, provincia a la que represento, existen serios problemas dominiales que han acarreado conflictos políticos y sociales llegando al extremo de la violencia armada y llevándose la vida de varios campesinos.

Sin más, hace apenas un mes, todos nos conmovimos con la noticia del asesinato del joven Cristian Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE VC), quien por resistirse a los desalojos de su tierra fue herido de bala y muerto posteriormente en el hospital. Hace apenas 3 días en Villa Matoque, al norte de la capital santiagueña, limitando con Salta, 2 campesinos, Ariel y Néstor Palacios, fueron heridos de gravedad debiendo ser hospitalizados en un nosocomio salteño para luego ser derivados al hospital de la ciudad de Salta.

Esto sucede porque las tierras de nuestra región, despreciadas durante mucho tiempo por su aridez y la ausencia de riquezas naturales, propias de la zona núcleo (concepto que aprendí con este dictamen), hoy son muy apetecidas por empresarios nacionales y extranjeros para el desmonte y la posterior cosecha de soja.

Los poseedores ancestrales de las tierras santiagueñas jamás pensaron que su terruño podía ser fruto de conflictos económicos y financieros al punto de tener que dar la vida por defender su hábitat y su medio de subsistencia. 500 años después de la conquista, los indígenas y los gauchos deben seguir defendiendo sus tierras en condiciones extremadamente desiguales.

Los empresarios que compran tierras fiscales ocupadas por lugareños desde décadas atrás, intentan desalojarlos tirando abajo sus casas, alambrando sus terrenos e intimidándolos a fuerza de armas y palos.

Por esta razón desde la década del 90 los campesinos santiagueños se han unido en diferentes organizaciones y movimientos con el fin de defenderse de la usurpación y el desalojo de su terruño.

Es mi intención agradecer la colaboración de la doctora Florencia Gómez Galizzi, quien desde las organizaciones nacionales de agricultura familiar y desde la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del mismo nombre, viene acompañando la lucha campesino-indígena de Santiago del Estero y la consecuente legislación que deriva de las necesidades de esas comunidades.

Actualmente, la lucha campesina indígena por la regulación dominial de las tierras y por la implementación de la ley nacional 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas son el eje de la discusión y el centro de la problemática rural.

Por otra parte, como bien sabe la población, son los santiagueños los que más padecen de la explotación laboral y las condiciones de esclavitud propias del trabajo golondrina, pues es la provincia de mayor flujo migratorio a la hora de la estacionalidad de la cosecha.

Esto se debe a que la tecnificación de la producción del algodón, la desaparición del obraje como consecuencia de la indiscriminada tala de árboles y la inédita producción sojera que requiere un mínimo de mano de obra hacen que la gente decida migrar para conseguir un pasajero e ilusorio sustento económico. Pero en vez de trabajo encuentran explotación y sometimiento, como lo han demostrado diferentes artículos periodísticos al comienzo de este año y hace unos días con la cosecha de arándanos en la localidad de San Andrés de Giles a 100 km de Buenos Aires.

Apuntalar y fortalecer el desarrollo sustentable campesino es el camino para la independencia y la autonomía de la agricultura familiar argentina.

A raíz de la muerte de Cristian Ferreyra se hizo efectiva la presentación en la Cámara de Diputados de la

Nación de un proyecto de ley que intenta suspender los desalojos y hacer un relevamiento de las tierras rurales.

Adjunto como antecedentes provinciales de violencia en mi provincia los siguientes datos:

#### ESTAFA A EMPRESA DE BRASIL

13/12/11 Estafas: un empresario cordobés radicado en Brasil denuncia que permuto 8 departamentos en Camboriú por tierras en el departamento de Mariano Moreno de Santiago del Estero, pero al intentar tomar posesión descubrió que estaban ocupados, al menos desde hace 20 años.

La supuesta maniobra incluye a tres ciudadanos cordobeses, un porteño y un escribano santiagueño.

La jueza de la causa es la doctora Rosa Falco de Rainieri.

La causa está caratulada de defraudación y asociación ilícita y la presunta estafa sería de 3.000.000 de dólares o su equivalente a 13.000.000 millones de pesos argentinos.

#### CRISTIAN FERREYRA Y DARÍO GODOY

Miércoles 16 de noviembre de 2011. En paraje San Antonio, a 60 km de Monte Quemando, hirieron de bala causándole la muerte a Cristian Ferreyra e hirieron al campesino Darío Godoy, quien estuvo hospitalizado para observación por días, por resistir el intento de desalojo de sus tierras.

Los responsables del ataque son Javier y Arturo Juárez. El dueño de esas tierras es el empresario Cicciola.

Los empresarios que intentan acaparar las tierras son: Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, vecinos de Santa Fe y Tucumán, quienes amedrantan a las comunidades de Copo, Pellegrini y Alberdi.

#### RENUNCIA DEL JUEZ

El juez que investiga la causa de Cristian Ferreyra es Alejandro Farrias Fringes, luego de un mes presenta su renuncia en forma indeclinable, luego que el MOCA-SE pidiera su juicio político y que 5 funcionarios del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero realizara una auditoría en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Monte Quemado.

#### ANTECEDENTES DE OTROS CASOS DE VIOLENCIA Y ASESINATO

– Pozo del Castaño: departamento de Pellegrini, hubo 2 intentos de homicidio por parte de los empresarios Luis Ressio y Alberto Croche contra las familias que resistían el desalojo. En 2010 el abogado de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), Santiago Luis Mathieu, realizó un informe de la situación.

– Piraj Bajo a 300 km al norte de la capital los campesinos resisten los trabajos de los señores Horacio Gándara y Luis Méndez quienes realizan desmonte

ilegal en la zona, cierre de caminos vecinales, robo de ganado menor y mayor, presencia de guardias armadas que intimidan.

– El Hoyo y El Simbolar, departamento de Mariano Moreno, ataque a campesinos para realizar desmonte y alambrado.

– Detienen arbitrariamente a Ricardo Cuellar.

– Atentan contra la FM Pajsachama.

– Queman ranchos y pertenencias de campesinos.

– El Poder Judicial de Santiago del Estero y la Dirección Provincial de Bosques autorizan el desmonte en lugares donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones.

El lunes 19/12/11 hubo 2 heridos de armas en paraje de Mistolito, Villa Matoque, departamento de Copos, Ariel y Néstor Palacio, integrantes de Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), adherentes fueron internados en el hospital del Quebrachal Salta. El primero presentaba un corte en la región occipital a causa de un culetazo, se le realizó una sutura de 6 puntos y fue dado de alta, mientras que Néstor, herido de bala en su clavícula derecha, se encontraba grave por lo que debió ser derivado al Hospital San Bernardo de la capital salteña.

El agresor fue Alonso Santillán, secretario y cuñado del comisionado de Villa Matoque, representante de la empresa tucumana Servicio y Negocios S. A., la cual dice ser propietaria de 15.000 hectáreas pero muestra papeles por 3.000.

Conflicto: Este conflicto lleva un año, ejemplo de ello es que las escuelas rurales de la zona han sido cerradas con anticipación. Como consecuencia hay 4 presos del pueblo Tonocotes desde el 16/08: Eusebio Aranda, Silvio Ibáñez, Venerando Mendoza, Ariel del Jesús Sosa.

Como he intentado demostrar la problemática de la tierra no se circunscribe a la extranjerización, por eso considero que limitar la compra de nuestras tierras rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras será el paso previo y necesario para lograr la tan esperada regulación de la agricultura familiar en el ámbito nacional.

Considero que la presente norma acentuará el rumbo de las políticas públicas nacionales que se vienen implementando y marcará el camino que deberán seguir las provincias que por negligencia o por voluntad política hoy no han adherido en los hechos a lo que marca la Constitución Nacional.

Sé que la primera obligación es de los gobiernos provinciales, pues el recurso natural les pertenece, pero si éstos siguen demorando la implementación de medidas y la utilización de instrumentos o herramientas que posibiliten la paz social veré con sumo interés que desde el Congreso de la Nación se tome conocimiento, se de el debate necesario y se genere conciencia nacional sobre esta temática.

Por todo lo expuesto, celebro el tratamiento y la aprobación de la presente ley.

19

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
CORREGIDO

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales**

(O.D.-920/11)

Señor presidente:

El C.D.-90/11 que limita la propiedad extranjera sobre tierras rurales es un ejemplo de legislación soberana y estratégica tendiente a defender los intereses nacionales relacionados con un recurso natural no renovable y escaso (no para la Argentina, pero sí para muchos países) como es la tierra rural.

La defensa soberana que ejerce la norma puede verse no sólo en la limitación a la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, sino también en el dominio nacional sobre lo producido por esas tierras, dado que es allí donde radica mayor valor de las mismas.

Por otro lado, entender la tierra y sus producidos como recursos estratégicos para el desarrollo del país, no hace más que profundizar el modelo de defensa de los intereses nacionales implementados a partir del 2003.

El proyecto de ley establece un límite a la propiedad de titularidad extranjera del 15 por ciento del total de tierras rurales del país, porcentaje que se hacen extensivo a los departamentos, municipio y provincias.

Por otra parte, los titulares de una misma nacionalidad no podrán acceder a más del 30 por ciento del total habilitado para su venta, y cada titular no podrá adquirir más de mil hectáreas en zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país.

La norma también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y dispone la realización del relevamiento catastral dominial y de registro para determinar la propiedad y la posesión de dichas tierras. Este relevamiento es fundamental, ya que a la fecha no se conoce con exactitud el porcentaje de tierras rurales en manos de extranjeros.

Es de destacar el artículo 11 del proyecto que expresamente establece que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país receptor”.

Este artículo protege al país de futuras demandas ante el CIADI, ejerciendo aquí también un acto de defensa soberana al impedir la jurisdicción extranjera de arbitraje, es decir tribunales ad hoc o tribunales regidos por reglas específicas, en perjuicio de la intervención de sus propios tribunales naturales.

Finalmente, en respuesta a la caracterización que se ha hecho de esta norma “xenófoba” y anticonstitucional por “avanzar sobre la propiedad privada”, de ninguna manera pueden aceptarse estos argumentos.

El proyecto no prohíbe la propiedad de tierras rurales a los extranjeros, simplemente limita, y específicamente la regula, teniendo en cuenta los mejores intereses del país; y es justamente la atribución y el rol de este Congreso legislar, normar, regular, teniendo como objetivo la prosperidad de la Nación.

En este sentido vale recordar el artículo 75 de la Constitución Nacional que establece:

Inciso 18: proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienes de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, al colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras con estos fines y por concesiones temporales y privilegios y recompensas de estímulo. (Ésta es la llamada cláusula de la prosperidad.)

Inciso 19: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

20

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
RIOFRIO

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios**

(O.D.-852/11)

Señor presidente:

Quiero decirles que los que están preocupados por la restricción de la libertad de imprenta, que la libertad de imprenta está restringida hoy en la Argentina. No se imprime ni en cantidad, ni en contenido con libertad, y es por ello que, haciendo honor a la manda constitucional del artículo 42 avemos con este proyecto de ley, proteger esos derechos.

Les quiero contar cuál es la situación de los diarios del interior (algo de lo que no se habla).

– Aporte inicial: desde la gestación de la empresa Papel Prensa S.A., por decreto ley 18.312 del año 1969, todo los diarios –incluidos lo más pequeños del interior– tuvieron que destinar el 10% del monto total que importaban para la conformación de un fondo común que permitirían en el futuro la fabricación nacional de este insumo. El aporte se realizó durante 10 años. Tiempo después la empresa quedó en manos de tres diarios de Buenos Aires y los del interior quedaron atados a los cupos que los primeros les asignaron discrecionalmente.

– Cupos discrecionales: cada diario del interior tiene un cupo de papel asignado por la empresa Papel Prensa S.A. que no obedece a la necesidad real del medio, su tirada o su capacidad de pago, sino a criterios que sólo se explican en la discrecionalidad del directorio. El cupo asignado a diarios del interior suele equivaler a un cuarto de la demanda real. El resto se puede suplir por dos vías. La primera es la importación –hoy en San Juan se imprime con papel de origen chileno– siempre y cuando la relación cambiaria y la cotización del papel prensa en el mercado internacional no esté muy por encima de los valores nacionales. La segunda alternativa es cultivar una relación política cercana con la conducción de Papel Prensa S.A. para obtener un “favor”.

– La compra de diarios del interior por parte de grupos mayoristas de Papel Prensa S.A. puso en desventaja a otros diarios de capitales locales, que se encontraron con un menor cupo del insumo, a precios superiores.

El artículo 42 de la Constitución Nacional en su primer párrafo dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

En el tema que nos ocupa no se está cumpliendo con esa manda constitucional porque los usuarios o compradores de papel para diarios no tienen libertad de elección y mucho menos de gozar de condiciones de trato equitativo y digno. Y los consumidores últimos, que son los ciudadanos en general, se ven también afectados no ya en lo económico sino en el derecho inalienable de acceso a la información veraz.

El ciudadano que recibe la información no es un mero receptor. Participa. El sentido de incluir el concepto de informado está orientado a reconocerlo como un agente activo en la relación informativa, en la que tiene derechos reconocidos desde la concepción del sujeto universal del derecho de la información. El derecho que le cabe es recibir informaciones y opiniones por cualquier medio y sin limitación de fronteras. Este punto es fundamental y está orientado al pleno reconocimiento del derecho al conocimiento y a la participación del individuo. El derecho al hecho o derecho al conocimiento de la noticia es aquel que le permitirá saber qué es lo que ocurre a su alrededor como forma imprescindible de permitir su participación en la comunidad.

Debe contar también el sujeto informado con las facultades suficientes para seleccionar los medios con los que se quiere informar. Lo que podría denominarse derecho al pluralismo informativo; es la garantía efectiva de la recepción de una información sana y participativa. La facultad de cualquier ciudadano de contar con pluralismo informativo es el objetivo de impedir la conformación de monopolios informativos, obligación que le cabe al Estado según el artículo 13, inciso 3, del Pacto de San José de Costa Rica.

El informado tiene también derecho a contar con información veraz.

Ser el único proveedor de la materia prima obviamente ha impuesto una suerte de condicionamiento de la opinión vertida por los medios de menor capacidad, sobre todo del interior.

Ese condicionamiento se ve también en la línea editorial, tema analizado intensamente en oportunidad del tratamiento de la Ley de Medios.

Para finalizar, señor presidente, quiero destacar que este proyecto de ley reposa sobre los siguientes pilares fundamentales:

- a) La declaración de interés público de la fabricación, comercialización y distribución de la pastas de celulosa y de papel para diarios.
- b) La propensión a la producción nacional.
- c) La competencia.
- d) La no discriminación.
- e) El libre acceso.
- f) La asignación eficiente de recursos.
- g) La preservación del medio ambiente.

Y es sabido que la declaración de interés público se presenta, por lo demás, como la columna vertebral que posibilita la estructuración de todo el régimen normativo en tratamiento.

Por las razones expuestas adelanto mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento.

21

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
DE LA ROSA

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales  
(O.D.-920/11)**

Señor presidente:

*1. Fundamentos jurídicos*

Respecto de las principales normas que fundamentan el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional debemos destacar las siguientes.

1) En materia de tratados internacionales:

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

#### Artículo 2°.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

– Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos.

Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 1°: Los propósitos de las Naciones Unidas son:

– 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

#### Artículo 1°.

– 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

– 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

#### Artículo 2°.

2. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

#### Artículo 25.

– Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

En cuanto a las principales normas de nuestra Constitución Nacional debemos destacar:

Artículo 75: Corresponde al Congreso:

12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por

opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

#### 2. Fundamentos constitucionales de la no discriminación a extranjeros

El proyecto es regular los derechos de extranjeros en materia de propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y su constitucionalidad queda debidamente fundamentada en las siguientes normas constitucionales.

– Principio general en materia de derechos de los extranjeros en nuestro país.

#### Artículo 20.

– Reglamentación de los derechos para todos los habitantes de la Nación.

Artículo 14: todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: ...de usar y disponer de su propiedad...

La Constitución no establece derechos absolutos, ya que ellos resultan susceptibles de reglamentación razonable (artículo 28 de la Constitución Nacional: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio). Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "...los derechos constitucionales no son absolutos ni pueden actuar de manera aislada, toda vez que conforman un complejo de operatividad concertada de manera que el Estado de derecho existe cuando ninguno resulta sacrificado para que otro permanezca..." (CSJN *Fallos*, 330:4988, entre otros).

Los tratados internacionales también autorizan a reglamentar diferencias de trato entre nacionales y extranjeros mientras sean razonables y objetivas. Esto es particularmente importante en relación con los tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados a la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994, en su artículo 75, inciso 22, que deben ser interpretados de manera armónica con los derechos de la 1ª parte (parte dogmática de la Constitución).

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Artículo 1.2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.

### 3. Tratados Bilaterales de Inversión.

– El artículo 11 del proyecto establece una norma de interpretación respecto de los tratados bilaterales de inversión vigentes para la Argentina.

– En ese sentido, la adquisición de tierras rurales no se entenderá como inversión.

– El fundamento de dicha declaración aparece explicitado en la propia norma, ya que la conceptualización de la tierra como recurso no renovable y estratégico impide conferirle dicho carácter a partir de una ley que está tutelando un interés nacional.

– En general los tratados en sus primeros artículos definen el concepto de inversión incluyendo a los bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales relacionados, tales como hipotecas o derechos de prenda.

– Otros Estados partes en dichos acuerdos han excluido del carácter de inversión a la adquisición de tierras y de recursos naturales. Así, por ejemplo, el Tratado entre EE.UU. y la Argentina del 14 de noviembre de 1991, en el cual EE.UU. formuló una reserva respecto del uso de la tierra y de los recursos naturales, entre otros temas considerados estratégicos.

– El artículo 11 aparece enmarcado en el derecho del Estado nacional al ejercicio de su soberanía y a la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales. (Mensaje de elevación.)

– El artículo 27 de la CN, señala: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.

– Los objetivos trazados por el constituyente en diversas cláusulas del artículo 75, inciso 16 (seguridad de frontera), inciso 18 (cláusula de prosperidad) o inciso 19 en cuanto ordena lo concerniente a proveer al desarrollo humano y, lo que interesa como competencia constitucional originaria de este cuerpo, el crecimiento armónico de la Nación y el equilibrio del desigual desarrollo de las provincias y regiones, aparecen configurados como un ejercicio de soberanía que no es susceptible de limitación por acuerdos internacionales como los descriptos.

– Asimismo, tales potestades aparecen claramente demarcadas en los tratados internacionales con jerarquía constitucional mencionados, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

– De acuerdo al Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA, la Argentina ha firmado 57 tratados bilaterales de inversión.

Finalmente, quiero resaltar que ante la realidad innegable y evidente de la extranjerización de las tierras, y la consecuente movilización de las conciencias de los argentinos, es que nos toca a nosotros, senadores, la responsabilidad de complementar el acto legislativo y otorgar al pueblo argentino este instrumento jurídico de protección cuya ausencia no puede tolerarse mucho más tiempo. Los intereses que nada tienen que ver con nuestra realización no se están quietos, avanzan. El general Perón tenía una bella y sintética forma de definir la dinámica social y cuál era el rol de los hombres ante su tiempo. Decía: "Los cambios son una realidad que se percibe mas allá de la razón, e impactarán de una u otra forma en el hombre, lo que éste puede hacer es elegir el vehículo con el cual los atraviesa".

Y este proyecto que nos convoca es un vehículo casi inevitable para transitar el futuro de enorme potencial que está al alcance de la Argentina. Y es, además, un instrumento apto y aceptable desde cualquier punto de vista con que se lo mire: político, jurídico, económico y social. Si bien es verdad que existe una diversidad de soluciones propuestas, tanto desde el aspecto técnico como por sus alcances materiales y la medida de los derechos que reglamenta, también es cierta y palpable otra verdad: todos sabemos que consensuar una fórmula que satisfaga la totalidad de los puntos de vista es materialmente imposible, y el presente proyecto satisface todos los requerimientos, por lo menos, no cabe duda, los de corto plazo, además de marcar un camino que en el futuro sólo se podrá profundizar, el de la protección de los derechos sociales y la soberanía política.